ESTUDIO PRELIMINAR

De todos los organismos administrativos, es sin duda el Municipio el que tiene mayor importancia, no sólo por lo complicado de sus funciones, sino porque se halla en contacto directo y constante con el ciudadano.

Se ha dicho con gran verdad que el Municipio es la célula de la Nación ó el Estado: para que esta célula sea sana y ejerza influencia benéfica en el todo de que forma parte, es preciso que dentro de la agrupación de vecinos regida y gobernada por el Municipio cada uno cumpla con sus funciones, y cooperen todos á que la vida municipal se realice sin obstáculos y sin incidentes.

Para esto sería preciso que todos los vecinos conocieran perfectamente sus derechos y deberes, supieran al detalle cuándo son llamados por la ley á intervenir en la gestión municipal, y conocieran en qué forma han de ejercitar estos derechos y dar cumplimiento á estos deberes. Para facilitar esta importantísima educación cívica publicamos hoy el presente libro, que comprende la Ley Municipal, Real decreto sobre descentralización administrativa de 15 de Noviembre de 1909, la Ley de 11 de Julio de 1912 creando los Cabildos insulares de las islas Canarias, el reglamento de 12 de Octubre de 1912 para el cumplimiento de la anterior, y demás disposiciones complementarias.

De este modo el libro resulta útil, no sólo para los señores concejales, diputados, secretarios y demás empleados de dichas oficinas, sino para todo ciudadano, que en su día puede formar parte, por ejemplo, de la Junta de asociados, y en él encontrará todo cuanto necesite saber para desempeñar á conciencia su cometido.

Cuando todos los vecinos de un Municipio conozcan las reglas á que la vida municipal ha de ajustarse, la Administración será impecable, y con ello desaparecerán seguramente las discordias que con frecuencia corroen las entrañas de las villas y las aldeas. A los que se duelen de las demasías del caciquismo les ponemos al alcance de la mano el mejor remedio: la ley. Nada como la ley para combatir los desafueros y lograr el triunfo definitivo de la justicia que es la base del bienestar común.

Ley Municipal

Ley Municipal de 2 de Octubre de 1877

MINISTERIO DE LA GOVERNACIÓN
LEY

Don Alfonso XII

Por la gracia de Dios Rey constitucional de España; á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo único. Se autoriza al Ministro de la Gobernación para publicar las leyes orgánicas Municipal y Provincial, incorporando á su texto las reformas comprendidas en la de 16 de Diciembre de 1876. Por tanto:

Mandamos á todos los tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á 2 de Octubre de 1877.-YO EL REY.- El Ministro de la gobernación, Francisco Romero y Robledo.

LEY MUNICIPAL

TITULO PRIMERO

De los términos municipales y de sus habitantes.

CAPÍTULO PRIMERO

De los términos municipales y sus alteraciones (1).

Artículo 1º.- Es Municipio la asociación legal de todas las personas que residen en un término municipal.

Su representación legal corresponde al Ayuntamiento (2).

Art. 2º Es término municipal el territorio á que se extiende la acción administrativa de un Ayuntamiento.

Son circunstancias precisas en todo término municipal:

1ª Que no baje de 2.000 el número de sus habitantes residentes.

2ª Que tenga ó se le pueda señalar un territorio proporcionado á su población.

3ª Que pueda sufragar los gastos municipales obligatorios con los recursos que las leyes autoricen.

Subsistirán, sin embargo, los actuales términos municipales que tengan Ayuntamiento aun cuando no reúnan las circunstancias anteriores (3).

(1) Véase el artículo 83 de la Constitución.

(2) Ayuntamiento, de ayuntar, es la persona jurídica que gobierna y rige con arreglo á las leyes el término municipal.

(3) Véanse los Reales decretos de 23 de Diciembre de 1870 y 30 de Agosto de 1889, mandando que sean señalados los términos municipales por medio de hitos ó mojones.

Ley Municipal

Art. 3º Los términos municipales pueden ser alterados:

1º Por agregación total á uno ó varios términos colindantes.

2º Por segregación de parte de un término, bien sea para constituir por si ó con otra ú otras porciones Municipio independiente, ó bien para agregarse á uno ó á varios de los términos colindantes.

Art. 4º Procede la suspensión de un Municipio y su agregación á otro ó á varios de sus colindantes:

1º Cuando por carencia de recursos ú otros motivos fundados lo acuerden los Ayuntamientos y la mayoría de los vecinos de los Municipios interesados.

2º Cuando por ensanche y desarrollo de edificaciones se confundan los cascos de los pueblos y no sea fácil determinar sus verdaderos límites.

Art. 5º Procede la segregación de parte de un término para agregarse á otros existentes cuando lo acuerde la mayoría de los vecinos de la proporción que haya de segregarse, y puede tener efecto sin perjudicar los intereses legítimos del resto del Municipio ni hacerle perder las condiciones expresadas en el artículo 2º.

La segregación de parte de un término para constituir uno ú varios Municipios independientes por si ó en unión de otra ú otras porciones de otros términos colindantes puede hacerse mediante acuerdo de la mayoría de los interesados, y sin perjudicar intereses legítimos de otros pueblos, siempre que los nuevos términos que hayan de formarse reúnan las condiciones del artículo 2º.

Art. 6º En cualquiera de los casos de agregación ó segregación los interesados señalarán las nuevas demarcaciones de los terrenos y practicarán la división de bienes, aprovechamientos, usos públicos y crédito, sin perjuicio de los derechos de propiedad y servidumbres públicas y privadas existentes.

Art. 7º La Diputación provincial resolverá los expedientes sobre creación, segregación y supresión de Municipios y términos.

Sus acuerdos serán ejecutivos cuando fueren adoptados de conformidad con los interesados.

En caso de disidencia, la aprobación será objeto de una ley (1).

Art. 8º Todo término municipal forma parte de un partido judicial y de una provincia de la Nación, y no podrá pertenecer bajo ningún concepto á distintas jurisdicciones de un mismo orden (2).

Art. 9º Para hacer pasar un término municipal de uno á otro partido se oirá á los Ayuntamientos del pueblo y de las cabezas de partido, á la Diputación y al gobernador, y al Ministro de Gracia y Justicia.

Art. 10 Los grupos de población, aunque tengan Ayuntamiento propio, situados á una distancia máxima de 10 kilómetros del término de la capital, de la Monarquía, podrán ser agregados a él por Real decreto, previa consulta al Consejo de Estado, dando cuenta á las Cortes.

De igual modo y con los mismos trámites podrá ensancharse el término de las poblaciones que cuenten más de 100.000 habitantes hasta una distancia de máxima de seis kilómetros.

CAPITULO II

De los habitantes de los términos municipales.

Art. 11. Los habitantes de un término municipal se dividen en residentes y transeúntes.

(1) *La variación de nombre de un Municipio necesita la aprobación del Gobierno, Véase el artículo 2º del Real decreto de 15 de Noviembre de 1909.*

(2) *Véase el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder judicial.*

Ley Municipal

Los residentes se subdividen en vecinos y domiciliados.

Art. 12 Es vecino todo español emancipado de reside habitualmente en un término municipal y se halla inscrito con tal carácter en el padrón del pueblo.

Es domiciliado todo español que, sin estar emancipado, reside habitualmente en el término, formando parte de la casa ó familia de un vecino.

Es transeúnte todo el que, no estando comprendido en los párrafos anteriores, se encuentra en el término accidentalmente (1).

Art. 13 Todo español ha de constar empadronado como vecino ó domiciliado en algún Municipio. El que tuviere residencia alternativa en varios optará por la vecindad de uno de ellos.

Nadie puede ser vecino de más de un pueblo; si alguno se hallare inscrito en el padrón de dos ó más pueblos, se estimará como válida la vecindad últimamente declarada, quedando desde entonces anuladas las anteriores.

Art. 14 La cualidad de vecino es declarada de oficio ó á instancia de parte por el Ayuntamiento respectivo.

Art. 15 El Ayuntamiento declarará de oficio vecino á todo español emancipado que en la época de formarse ó rectificarse el padrón lleve dos años de residencia fija en el término municipal.

También se hará igual declaración respecto á los que en las mismas épocas ejerzan cargos públicos que exijan residencia fija en el término, aun cuando no hayan completado los dos años (2).

Art. 16 El Ayuntamiento, en cualquier época del año, declarará vecino á todo el que lo solicite, sin que por ello quede exento de satisfacer las cargas municipales que le correspondan hasta aquella fecha en el pueblo de su anterior residencia.

El solicitante ha de probar que lleva en el término una residencia efectiva continuada por el espacio de seis á lo menos.

CAPITULO III Del empadronamiento.

Art. 17 Es obligación de los Ayuntamientos formar el padrón de todos los habitantes existentes en su término, con expresión de su calidad de vecinos, domiciliados y transeúntes, nombre, edad, estado, profesión, residencia y demás circunstancias que la estadística exija y el Gobierno determine.

Art. 18 cada cinco años se hará un nuevo empadronamiento, el cual será rectificado todos los años intermedios con las inscripciones de oficio ó á instancia de parte, y las eliminaciones por incapacidad legal, defunción ó traslación de vecindad ocurridas durante el año.

Los vecinos que cambien de domicilio, los padres ó tutores de los que se incapaciten y los herederos ó testamentarios de los finados están obligados á dar al Ayuntamiento la declaración correspondiente para que tenga efecto la eliminación.

(1) Véase la ley de 3 de Junio de 1885.

(2) El declarado vecino ó su instancia tiene los mismos derechos que el declarado de oficio, excepto aquellos para cuya concesión exijan las leyes determinado tiempo de residencia; *verbigracia*: el derecho electoral.

Ley Municipal

Art. 19 Hecho el empadronamiento quinquenal, ó su rectificación anual el Ayuntamiento formará dos listas en extracto: una que exprese las alteraciones ocurridas durante el año, y otra comprensiva de todos los habitantes para que resulten en el distrito al ultimarse la operación.

Estas listas se publicarán inmediatamente.

Art. 20 El empadronamiento y las rectificaciones se verificarán en el mes de Diciembre, y estarán, así como las listas, a disposición de cuantos quieran examinarlos, en la Secretaria del Ayuntamiento, los días y horas útiles. En los quince días siguientes el Ayuntamiento recibirá las reclamaciones que cualquier residente en el término hiciere contra el empadronamiento ó sus rectificaciones, y resolverá acerca de ellas en lo restante del mes, consignando en el libro de actas el acuerdo que tome respecto á cada interesado, á quien lo comunicará por escrito inmediatamente.

Art. 21 Contra estas decisiones de los Ayuntamientos procede el recurso de alzada para ante la Diputación provincial.

El recurso será entablado ante el Alcalde dentro de los tres días siguientes á la notificación escrita del acuerdo.

El Alcalde remitirá sin dilación alguna el expediente á la Diputación provincial.

La Diputación en el término de un mes, resolverá ejecutivamente en vista de las razones alegadas por los interesados y el Ayuntamiento, y comunicará á éste su fallo circunstanciado; después de lo cual, y hechas en la semana siguiente las rectificaciones á que hubiere lugar, se declarará ultimado el padrón y se publicarán las listas rectificadas (1).

Art.22 El padrón es un instrumento solemne, público y fehaciente, que sirve para todos los efectos administrativos.

Art.23 Los Ayuntamientos remitirán todos los años á la Diputación provincial en el último mes de cada año económico, un resumen del número de vecinos, domiciliados y transeúntes, clasificado en la forma que para el censo de población determine el Gobierno (2).

CAPITULO IV

De los derechos y de las obligaciones de los habitantes en los términos municipales.

Art.24 Todo el que recurra á la autoridad municipal tiene derecho á exigir de la misma un resguardo en el cual se haga constar la demanda ó la queja, y la fecha y la hora en que hubiera sido producidas.

Art.25 Todos los habitantes de un término municipal tiene acción y derecho para reclamar contra los acuerdos de los Ayuntamientos, así como para denunciar y perseguir criminalmente á los alcaldes, regidores y vocales de la Asamblea de asociados, en los casos, tiempo y forma que prescriba esta ley y la especial á que se refiere el artículo 77 de la Constitución (3).

(1) Véase el artículo 3º del Real decreto de 15 de Noviembre de 1909.

(2) Véase la ley de 3 de Abril de 1900.

El padrón es considerado por la ley como instrumento público fehaciente, y sus alteraciones constituyen delito de falsedad.

(3) Para ejercitar esta acción y este derecho no es preciso que el asunto interese personalmente al que se querelle.

La Ley especial á que se alude en el artículo 77 de la Constitución no se ha publicado aún.

Ley Municipal

Art.26 Todos los vecinos tienen participación en los aprovechamientos comunales y en los derechos beneficios concedidos al pueblo, así como están sujetos á las cargas de todo género que para los servicios municipales y provinciales se impongan, en la forma y proporción que esta ley determina (1). Los vecinos adquieren el pleno dominio de la parte que en los aprovechamientos comunales les hayan sido adjudicada; pero no entrarán en su disfrute, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 75, sino cuando acrediten estar al corriente en el pago de todas sus obligaciones con el presupuesto municipal.

Art.27 Para cuando se refiere á la administración económica municipal y á los derechos y obligaciones que de ella emanan respecto á los residentes, tendrán la consideración de propietarios por las fincas que labren, ocupen ó administren los siguientes.

1º Los administradores, apoderados ó encargados de los propietarios forasteros, sin perjuicio de los casos siguientes, ya sea que por cuenta y en nombre de éstos se hallen al frente de algún establecimiento agrícola, industrial ó mercantil abierto en el distrito, ó ya se limiten á la cobranza ó recaudación de rentas.

2º Los colonos, arrendatarios ó aparceros de fincas rústicas, residan ó no en el distrito los propietarios y administradores.

3º Los inquilinos de fincas urbanas, cuando estuvieren arrendadas á una sola persona, y su dueño, administrador o encargado no residiere en el distrito.

Art.28 Los extranjeros gozarán de los derechos que les correspondan por los Tratados ó por la ley especial de Extranjería.

TITULO II

Del gobierno y organización de los municipios.

CAPITULO PRIMERO

De los Ayuntamientos y de las juntas municipales.

Art.29 En todo término habrá un Ayuntamiento y una junta municipal.

Art.30 El gobierno interior de cada término municipal será encomendado á un Ayuntamiento compuesto de concejales divididos en tres categorías:

Alcalde

Tenientes.

Regidores.

El Ayuntamiento será elegido por los residentes en el término que tengan derecho electoral, según el artículo 40, y en la forma que determinen las leyes (2).

Art.31 La formación de los presupuestos corresponderá á los Ayuntamientos, a su aprobación, á las Juntas municipales. También pertenece á éstas el establecimiento y creación, de arbitrios en el tiempo y forma que esta ley ordena.

(1)Véanse las leyes de Obras públicas, de Ferrocarriles y de Aguas, el reglamento de 7 de Octubre de 1896 y la Real orden de 22 de Marzo de 1898.

(2)Cuando el Ayuntamiento está constituido en Corporación, desaparecen estas categorías y tienen el mismo valor los votos de todos.

Ley Municipal

Art.32 La Junta municipal está compuesta:

1° De todos los concejales que debe tener el Ayuntamiento.

2° De un número de vocales asociados igual al de concejales.

Esta Asamblea será designada en la forma que expresa el capítulo III de este artículo II (1).

Art.33 La revisión y censura de las cuentas de los Ayuntamientos corresponderá á las Juntas municipales

(1) Cuando están reunidos los vocales de la Junta y los concejales, estos pierden su carácter y tienen los mismos derechos y deberes que los primeros

CAPITULO II De la organización de los Ayuntamientos (2).

Art.34 El censo de población determina el número de concejales correspondientes á cada Municipio y su división en categorías, el número de alcaldes y tenientes determina el de los distritos en que se divide cada término, y el número de residentes en cada uno de estos distritos determina el número de barrios; todo conforme á los siguientes artículos.

Art.35 El número de alcaldes, de teniente, de concejales y de distritos se ajustarán á la siguiente escala:

	Alcaldes	Tenientes	Regidores	Total de concejales	Distritos
Has 500 residentes	1	1	5	6	1
501 a 800	1	1	6	7	1
801 a 1.000	1	1	6	8	2
1.001 a 2.000	1	2	6	9	2
2.001 a 3.000	1	2	7	10	2
3.001 a 4.000	1	2	8	11	2
4.001 a 5.000	1	2	9	12	2
5.001 a 6.000	1	2	10	13	2
6.001 a 7.000	1	3	10	14	3
7.001 a 8.000	1	3	11	15	3
8.001 a 9.000	1	3	12	16	3
9.001 a 10.000	1	3	13	17	3
10.001 a 12.000	1	4	13	18	4
12.001 a 14.000	1	4	14	19	4
14.001 a 16.000	1	4	15	20	4
16.001 a 18.000	1	4	16	21	4
18.001 a 20.000	1	5	16	22	5
20.001 á 22.000	1	5	17	23	5
22.001 á 24.000	1	5	18	24	5

(2) Para una mejor comprensión de este capítulo es conveniente tener a la vista la Ley Electoral de 8 de Agosto de 1907 y disposiciones posteriores, que constituyen uno de los tomos de esta Biblioteca)

Ley Municipal

Cont Tabla.	Alcaldes	Tenientes	Regidores	Total de concejales	Distritos
24.001 á 26.000	1	5	19	25	5
26.001 á 28.000	1	6	19	26	6
28.001 á 30.000	1	6	20	27	6
30.001 á 32.000	1	6	21	28	6
32.001 á 34.000	1	6	22	29	6
34.001 á 36.000	1	7	22	30	7
36.001 á 38.000	1	7	23	31	7
38.001 á 40.000	1	7	24	32	7
40.001 á 45.000	1	8	24	33	8
45.001 á 50.000	1	8	25	34	8
50.001 á 55.000	1	8	26	35	8
55.001 á 60.000	1	8	27	36	8
60.001 á 65.000	1	8	28	37	8
65.001 á 70.000	1	9	28	38	9
70.001 á 75.000	1	9	29	39	9
75.001 á 80.000	1	9	30	40	9
80.001 á 85.000	1	9	31	41	9
85.001 á 90.000	1	9	32	42	9
90.001 á 95.000	1	10	32	43	10
65.001 á 100.000	1	10	33	44	10

De 100.000 residentes en adelante no se hará más variación que la de aumentar un regidor por cada 20.000 hasta que el Ayuntamiento llegue á 50 concejales, de cuyo número no pasará.

Los distritos en que se divida cada término serán próximamente iguales en número de habitantes.

Art.36 Cada distrito se dividirá en barrios cuando tengan más de 4.000 habitantes.

Los barrios de cada distrito serán próximamente iguales en población, y cada barrio quedará comprendido en uno solo distrito.

Todo arrabal separado del casco de la población, así como cualquiera otra parte del término municipal apartado del mismo casco, ha de constituir barrio, sea la que fuere su población.

En cada barrio habrá un alcalde del mismo, nombrado por el alcalde de entre los electores que tengan su residencia fija en la demarcación.

El alcalde podrá separar libremente á los alcaldes de barrio.

En los pueblos á que se refiere el capítulo II del título III de esta ley desempeñarán las funciones de alcalde de barrio los presidentes de las Juntas que deben elegirse en conformidad á los artículos 91, 92 y 93, y no podrán ser removidos sino por las causas que se expresan en esta ley para los alcaldes y tenientes

Art.37 Los términos municipales se dividirán en tantos colegios electorales como el Ayuntamiento crea conveniente, con tal que no sean menos que el número de alcaldes y tenientes, y que un mismo colegio no forme parte de diferentes distritos. En los pueblos que no excedan de 800 vecinos se constituirá una sola Mesa.

El Ayuntamiento podrá dividir los colegios en tantas secciones como sean necesarias para facilitar la libre emisión del sufragio, siempre que el número no exceda del de alcaldes de barrio.

Ley Municipal

Los grupos de población rural que según esta ley deben formar barrios constituirán sección si exceden de 800 vecinos (1).

Art.38 La primera división del término en distritos, barrios, colegios y secciones se hará en conformidad á las siguientes reglas:

1ª El Ayuntamiento acordará la división, y la hará pública en el Boletín Oficial de la provincia y por medio de los periódicos locales, ó por edictos en su defecto.

2ª Los vecinos y domiciliados del término pueden hacer dentro del mes siguiente á contar desde la fecha de la publicación del acuerdo, las reclamaciones que contra éste creyeren oportunas.

3ª Sí no hubiere reclamación alguna, el acuerdo será ejecutivo finalizado el plazo antedicho: si las hubiere, el Ayuntamiento las examinará y remitirá informadas, juntamente con la copia certificada del acuerdo de división, á la Diputación provincial, dentro de los quince días siguientes á la expiración del plazo.

4ª La Diputación provincial, examinados los antecedente y reclamaciones, resolverá lo que proceda en cuanto á los puntos á que éstas se contraigan, y comunicará su acuerdo dentro de un mes desde que fuere remitido el expediente.

Art.39 Hecha la división de un término municipal conforme á las prescripciones de esta ley, no podrá alterarse hasta pasados dos años por lo menos, y sólo en el caso de que por el trascurso del tiempo no corresponda á las condiciones y circunstancias anteriormente expresadas, y nunca en los tres meses que precedan á cualesquiera elecciones ordinarias.

El expediente de variación dará principio por iniciativa del Ayuntamiento, y seguirá los mismos trámites expresados en el artículo anterior.

Art.40 Serán electores los vecinos cabeza de familia, con casa abierta, que lleven dos años por lo menos de residencia fija en el término municipal y vengan pagando por bienes propios alguna cuota de contribución de inmuebles, cultivo y ganadería ó de subsidio industrial y de comercio con un año de anterioridad á la formación de listas electorales, ó acrediten ser empleados civiles del Estado, la Provincia ó el Municipio, en servicio activo, cesantes con haber por clasificación, jubilados ó retirados del Ejército y Armada.

También serán electores los mayores de edad que, llevando dos años por lo menos de residencia en el término del Municipio, justifiquen su capacidad profesional ó académica por medio de título oficial.

En los pueblos menores de 100 vecinos todos ellos serán electores, sin más excepciones que las generales que establece el artículo 2º de la ley Electoral de 20 de Agosto de 1870 (2).

(1) Véase en el tomo *Legislación electoral* el artículo 23 de la ley y la Real orden de 15 Abril de 1909.

(2) Artículo 1º de la ley Electoral de 8 de Agosto de 1907:

“Son electores para diputados á Cortes y concejales todos los españoles varones mayores de veinticinco años que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y sean vecinos de un municipio en el que cuenten dos años al menos de residencia. Las clases é individuos de tropa que sirvan en los Ejércitos de mar y tierra no podrán emitir su voto mientras se hallen en filas. Lo mismo se establece respecto de los que se encuentran en condiciones semejantes dentro de otros Cuerpos ó Institutos armados dependientes del Estado, de la Provincia ó del Municipio, siempre que estén sujetos á disciplina militar”.

Ley Municipal

Art.41 Serán elegibles en las poblaciones de 1.000 vecinos los electores que, además de llevar cuatro años por lo menos de residencia fija en el término municipal, paguen una cuota directa de la que comprendan en la localidad los dos primeros tercios de las listas de contribuyentes por el impuesto territorial y por el de subsidio industrial y de comercio; y en los Municipios menores de 1.000 y mayores de 400 vecinos, los que satisfagan cuotas comprendidas en los primeros cuatro quintos de las referidas listas.

En los pueblos que no excedan de 400 vecinos serán elegibles todos los electores.

Serán además incluidos en el número de los elegibles todos los que contribuyan con cuotas igual á la más baja que en término municipal corresponda pagar para serlo con arreglo al párrafo anterior.

Los que, siendo vecinos, paguen alguna cuota de contribución y acrediten por medio de título oficial su capacidad profesional ó académica, serán también elegibles.

Igualmente lo serán los que acrediten que sufren descuentos en los haberes que perciban de fondos generales, provinciales ó municipales, siempre que el importe del descuento se halle comprendido en la proporción marcada anteriormente para los elegibles en las poblaciones de 1.000 y 400 vecinos, respectivamente.

Se estimará la cuota acumulada las que satisfagan los contribuyentes dentro y fuera del pueblo por impuesto directo del Estado y por recargos municipales.

Para computar la contribución á los electores y á los elegibles se considerarán bienes propios: respecto de los maridos, los de sus mujeres mientras subsista la sociedad conyugal; respecto de los padres, los de sus hijos que legítimamente administren; respecto de los hijos, los suyos propios cuyo usufructo no tuvieren por cualquier concepto (1).

Art.42 Se procurará que á cada colegio electoral corresponda elegir cuatro concejales, ó el número que más á éste se aproxime.

Cada elector votará únicamente dos concejales cuando hayan de elegirse tres en el colegio electoral; tres, cuando cuatro; cuatro, cuando seis; y cinco, cuando siete.

Promulgada esta ley, se procederá á formar las listas electorales con arreglo á lo prevenido en los párrafos anteriores, sujetando las en su formación, plazos y demás requisitos y trámites á la ley Electoral, según queda dispuesto (2).

Art.43 En ningún caso pueden ser concejales:

1º Los Diputados provinciales ó a Cortes y los senadores, excepto en la capital de la Monarquía.

2º Los jueces municipales, notarios y otras personas que desempeñen cargos públicos declarados incompatibles con el concejal por las leyes especiales.

3º Los que desempeñen funciones públicas retribuidas, aun cuando hayan renunciado el sueldo. Los catedráticos podrán ser concejales en las poblaciones donde desempeñen sus destinos.

(1) Véase la Real orden de 20 de Octubre de 1903.

(2) Este artículo lo aclara completamente y completa el 21 de la vigente ley Electoral, que dice así: " En los distritos que deba elegirse un diputado ó concejal cada elector no podrá dar válidamente su voto más que á una `persona; cuando se elija más de uno, hasta cuatro, tendrá derecho á votar uno menos del número de los que hayan de elegirse, á dos menos si se eligieran más de cuatro, á tres menos si se eligieran más de ocho y á cuatro menos si se eligieran más de diez".

Ley Municipal

4° Los que directa ó indirectamente tengan parte en servicios dentro del término municipal por cuenta de su Ayuntamiento, de la Provincia ó del Estado.

5° Los deudores como segundos contribuyentes á los fondos municipales, provinciales ó generales contra quienes se haya expedido apremio.

6° Los que tengan contienda administrativa ó judicial pendiente con el Ayuntamiento ó con los establecimientos que se hallan bajo su dependencia ó administración.

Para el desempeño de los cargos de alcalde ó sindico se necesita saber leer y escribir.

Pueden excusarse de ser concejales:

1° Los mayores de sesenta años y los físicamente impedidos.

2° Los que hayan sido senadores, diputados á Cortes, diputados provinciales y concejales, hasta dos años después de haber cesado en sus respectivos cargos.

Los concejales cesarán en sus cargos si dejaren de tener las condiciones que marca esta ley.

Cada colegio nombrará el número de concejales que le corresponda proporcionalmente al de sus electores.

Las secciones de cada colegio votarán el mismo número de concejales señalados á éste (1).

Art.44 Las elecciones municipales se harán en la primera quincena del undécimo mes del año económico.

(1) Téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 7° de la ley Electoral, que dice:

“Están incapacitados para ser admitidos como diputados, aunque hubiesen sido válidamente elegidos:

Primero. Los que se encuentren comprendidos en alguno de los casos que determina el artículo 3° de esta ley.

Segundo. Los contratistas de obras ó servicios públicos que se costeen con fondos del Estado, de la Provincia ó del Municipio; los que de resultas de tales contrataciones tengan pendientes reclamaciones de interés propio contra la Administración, y los fiadores y consocios de dichos contratistas. Esta incapacidad se entenderá solamente en relación con el distrito ó circunscripción en que se haga la obra ó servicio público.

Tercero. Los que desempeñen ó hayan desempeñado un año antes en el distrito ó circunscripción en que la elección se verifique cualquier empleo, cargo ó comisión de nombramiento del Gobierno, ó ejercido función de la carrera judicial y fiscal, aun cuando fuera con carácter de interinidad ó sustitución, autoridad de elección popular, en cuyo concepto se comprenden los presidentes de Diputaciones y los diputados que durante el año anterior hubiese desempeñado el cargo de vocales de las Comisiones provinciales, y los militares que formen parte de las Comisiones mixtas de reclutamiento y reemplazo.

-Se exceptúan los ministros de la Corona y los funcionarios de la Administración central.

-Las incapacidades á que se refiere este número 3° se limitarán á los votos emitidos en el distrito ó en la circunscripción adonde alcancen la autoridad ó funciones de que haya estado investido el diputado electo.

-Si resultará, por virtud del descuento de dichos votos, con minoría el proclamado electo, se anulará la elección.

Cuarto. Los funcionarios judiciales y fiscales de la jurisdicción ordinaria, en todos sus grados y categorías.

-Las causas de incapacidad en lo que á los concejales se refiere serán las anteriormente numeradas, con las modificaciones que en vista de la distinta naturaleza y funciones de este cargo establezca la ley respectiva.

Ley Municipal

Art.45 Los Ayuntamientos se renovarán por mitad de dos en dos años, saliendo en cada renovación los concejales más antiguos.

En los casos de renovación ordinaria ó extraordinaria la elección de los concejales se hará por los mismos colegios electorales que hubieren hecho la de los salientes (1).

Art.46 Se procederá á la elección parcial cuando medio año, antes por lo menos de las elecciones ordinarias ocurran vacantes que asciendan á la tercera parte del número total de concejales.

Si las vacantes ocurrieran después aquella época y ascendieren al número indicando, serán cubiertas interinamente hasta la primera elección ordinaria por los que el gobernador designe de entre los que en épocas anteriores hayan pertenecido por elección al Ayuntamiento(2).

Art.47 Los Ayuntamientos darán cuenta de las antedichas vacantes al gobernador, el cual, en el preciso término de diez días, mandará proceder á la elección dentro de un plazo que no baje de quince ni exceda de veinte, contados desde que el acuerdo sea comunicado al Ayuntamiento respectivo (3).

Art.48 Para los efectos de esta ley, en cuanto al turno d salida, serán considerados los electos, en caso de vacantes, como los concejales á quienes reemplacen (4).

Art.49 Los Ayuntamientos elegirán de su seno á los alcaldes y tenientes de alcalde.

El Rey podrá nombrar de entre los concejales los alcaldes de las capitales de provincia, de las cabezas de partido judicial y de los pueblos que tengan igual ó mayor vecindario que aquéllas dentro del mismo partido, siempre que no bajen de 6.000 habitantes.

El alcalde de Madrid será de libre nombramiento del Rey; también podrá el Rey nombrar en Madrid los tenientes de alcalde, pero del seno de la Corporación municipal.

Art.50 En los pueblos donde la elección de alcalde y tenientes corresponda á los Ayuntamientos se verificará en la forma que disponen los artículos 53 y siguientes de esta ley.

Art.51 Los alcaldes nombrados por el Rey se presentarán á tomar posesión de sus cargos el día en que debe constituirse la Corporación municipal, previo aviso del alcalde saliente, y el nuevo alcalde confiera la posesión de su cargo á los tenientes y concejales.

Art.52 Las vacantes de alcalde y tenientes cuyo nombramiento corresponda á los concejales serán cubiertas por los que hayan sido elegidos por mayor número de votos, ó superiores en edad en caso de empate, si ocurrieren dentro del medio año que precede á las elecciones ordinarias; y en otro caso, por elección en la forma que disponen los artículos 53 y siguientes.

En la primera elección general ó parcial, y después de completo el Ayuntamiento, se procederá á cubrir la vacante en la forma que disponen dichos artículos.

El primer día del año económico, después de hecha la elección ordinaria, cesarán en sus cargos los concejales salientes y tomarán posesión los electos.

El Alcalde saliente concurrirá á este último para recibir á los nuevos concejales é instalarlos en sus cargos, y se retirará enseguida con los demás concejales salientes.

Art.53 Constituido el nuevo Ayuntamiento bajo la presidencia interina del concejal que hubiere obtenido mayor número de votos, procederá á la elección del alcalde.

(1) Véase el Real decreto de 15 de Noviembre de 1909, artículo 5°.

(2) Véase el artículo 4° de Real decreto antes citado.

(3) Véase el Real decreto de 15 de Noviembre de 1909 en su artículo 5°.

(4) Ídem. id. id.

Ley Municipal

Art.54 La votación se hará por medio de papeletas que los concejales, llamados por orden de votos, irán depositando uno á uno en la urna destinada al efecto.

Art.55 Terminada la votación, el presidente sacará de la urna las papeletas una á una, leyendo en voz alta su contenido, que el secretario del Ayuntamiento anotará en el acta.

Todos los concejales tienen derecho para examinar y reconocer en el acto las papeletas.

Quedará elegido el que obtenga la mayoría absoluta del número total de concejales.

En caso de empate se repetirá la votación; y si hubiere segundo empate, decidirá la suerte.

Art.56 Proclamado por el presidente interino el resultado de la votación, el elegido pasará á ocupar la presidencia y recibirá las insignias de su cargo.

En seguida, por el mismo orden y uno por uno, se procederá á la elección de los tenientes.

Terminada la elección de los tenientes, el Ayuntamiento nombrará uno ó dos concejales que con el nombre y carácter de procuradores síndicos representen á la corporación en todos los juicios que deba sostener en defensa de los intereses del Municipio y censuren y revisen todas las cuentas y presupuestos locales.

Art.57 Hechas estas elecciones y dada posesión por el alcalde de los cargos de tenientes y de síndicos á los concejales electos, el Ayuntamiento señalará los días y horas en que ha de celebrar sus sesiones ordinarias, que no serán menos de una por semana, con lo cual se dará por terminada la sesión inaugural(1).

Art.58 En el mismo día el alcalde nombrará de entre los electores á los alcaldes de barrio.

Los nombrados desempeñarán el cargo de alcalde de barrio hasta la próxima renovación del Ayuntamiento, si antes no fuesen separados por el alcalde (2).

Art.59 El alcalde dará conocimiento á la Corporación municipal en la sesión inmediata de los nombramientos de alcaldes de barrio á que se refiere el artículo anterior (3).

Art.60 En la segunda sesión fijará el Ayuntamiento el número de Comisiones permanentes en que ha de dividirse, confiando á cada una todos los negocios generales de uno ó más ramos de los que la ley pone á su cargo, y determinando el número de individuos de que han de componerse.

Tomado el acuerdo, se procederá inmediatamente á la elección de personas en votación secreta y por papeletas, quedando elegidos los que obtuvieren mayor número de votos, y decidiendo la suerte en caso de empate.

Art.61 En el transcurso del año podrá el Ayuntamiento cuando lo estime conveniente Comisiones especiales, que serán elegidas como las permanentes, pero cesarán concluido que sea su cargo.

Cuando un alcalde, teniente ó síndico fuere electo por una Comisión, será su presidente.

Art.62 Entretanto que el Gobierno no prepare un proyecto de ley para el régimen especial de los Ayuntamientos en poblaciones que excedan 100.000 almas, según el censo oficial, los concejales de las mismas no podrán ser reelegidos hasta cuatro años después de haber cesado en el cargo por cualquiera causa.

Igual incompatibilidad tendrán durante el mismo plazo de cuatro años los que hayan de ser nombrados concejales interinos en las poblaciones á que se refiere el párrafo anterior, si ocurrieren los casos previstos en los artículos 465 y 193 de la ley.

(1) En las sesiones inaugurales no deben tratarse más asuntos que los que indican el presente artículo y los anteriores.

(2) Véase el artículo 8º del Real decreto de 15 de Noviembre de 1909.

(3) Los alcaldes de barrio sustituyen á los antiguos alcaldes pedáneos

Ley Municipal

En las demás poblaciones que no excedan de 100.000 almas, lo mismo que en los Ayuntamientos constituidos por agregación, con arreglo al artículo 3º de esta ley, podrán ser reelegibles los concejales.

Son asimismos reelegibles en todas partes los vocales asociados.

Lo mismo los concejales que los individuos de la Asamblea de asociados dejarán de ser reelegibles si incurrieran en alguno de los casos de responsabilidad.

Art.63 La investidura de alcalde, teniente ó síndico, los cargos de concejales, de vocal asociados y de alcaldes de barrio, son gratuitos, obligatorios y honoríficos.

Los alcaldes, tenientes y regidores no tendrán, como tales, tratamiento alguno especial.

En las capitales de provincia de primera clase pueden los Ayuntamientos conceder cierta suma al alcalde para gastos de representación.

El alcalde, los tenientes y los alcaldes de barrio usarán como símbolo de su autoridad la insignias que el reglamento determine (1).

CAPÍTULO III

De la organización de la Junta municipal.

Art.64 La Junta municipal se compone del Ayuntamiento y de los vocales asociados, en número igual al de concejales, designados de entre los contribuyentes del distrito.

Art.65 Pueden designados para este objeto todos los vecinos que hayan de contribuir por repartimiento á sufragar las cargas municipales y donde no hubiere repartimiento, los que paguen contribución directa al Estado.

Quedan, sin embargo, exceptuados los que no tengan capacidad para ser concejales, los que lo fueren á la sazón, sus asociados y sus parientes dentro del cuarto grado, y los empleados y dependientes del Ayuntamiento.

En los pueblos que no excedan de 2.000 habitantes la exclusión por parentesco se limitará al segundo grado.

Art.66 La designación se hará por sorteo entre los contribuyentes repartidos en secciones, en conformidad á las reglas siguientes:

1ª El número de secciones será determinado en una de las cuatro primeras sesiones del año por cada Ayuntamiento, en conformidad al vecindario del pueblo y á la cuantía y clase de riqueza del mismo, no siendo en ningún caso menor que el de la tercera parte de los concejales.

2ª Ingresarán en cada sección los vecinos ó hacendados cuya profesión ó industria tenga entre sí más analogía con arreglo á las agremiaciones y clasificaciones para el pago de las contribuciones directas, de suerte que los individuos de una misma clase contributiva no formen parte de secciones diferentes.

Los vecinos que contribuyan por más de un concepto ó acumulen dos ó más industrias ingresarán en una sección á su elección.

(1) Este reglamento no se ha publicado todavía.

Ley Municipal

3ª En poblaciones donde no se pueda hacer distinción de clases por ser uniforme el concepto contributivo de sus habitantes, ó tener ramos industriales cuya importancia exija la formación de una sección especial, el repartimiento de éstas tendrá lugar por calles, barrios ó parroquias.

Esto mismo se verificará cuando alguna de las secciones formada según la regla anterior resultare tan numerosa que comprenda por si sola el cuarto de los vocales asociados de la Junta municipal.

4ª A cada sección se designará el número de vocales asociados que corresponda en proporción al importe de las contribuciones que paguen todos sus individuos.

Art.67 El Ayuntamiento, antes de finalizar el primer mes de cada año económico, publicará el resultado de la formación de secciones, contra el cual puede reclamar cualquiera interesado en término de ocho días para ante la Diputación provincial.

La Diputación resolverá necesariamente dentro de los quince días siguientes, y su acuerdo será ejecutivo en los años sucesivos (1).

Art.68 Ultimada así la formación de secciones, el Ayuntamiento en sesión pública anunciada con dos días de anticipación en la forma ordinaria, y una hora antes en el mismo día, á toque de campana, procederá al sorteo de los vocales asociados entre las secciones, y hará inmediatamente publicar el resultado.

La Junta deberá quedar definitivamente constituida dentro del segundo mes del año económico.

Los elegidos desempeñarán su cargo durante todo el respectivo año económico(2).

art.69 El Ayuntamiento admitirá y resolverá en término de ocho días las excusas y oposiciones, procediendo á nuevo sorteo si hubiese lugar, sin perjuicio del recurso de alzada para ante la Diputación provincial (3).

Art.70 Siempre que ocurra una vacante en el número de vocales asociados se procederá á un nuevo sorteo con las formalidades del artículo 68, á fin de que siempre esté completo su número (4).

TÍTULO III

De la administración municipal.

CAPÍTULO PRIMERO

De las atribuciones de los Ayuntamientos.

Art.71 Los Ayuntamientos son corporaciones económico-administrativas, y sólo pueden ejercer aquellas funciones que por las leyes les están encomendadas.

Su tratamiento es el impersonal.

(1) Véase el Real decreto de 15 de Noviembre de 1909 en su artículo 9º.

(2) Véase la disposición citada en el artículo anterior.

(3) Véase el artículo 9º del Real decreto de 15 de Noviembre de 1909.

(4) Véase la disposición citada en el artículo anterior.

Ley Municipal

Art.72 Es de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos el gobierno y dirección de los intereses peculiares de los pueblos, con arreglo al número 1º del artículo 84 de la Constitución, y en particular cuando tenga relación con los objetos siguientes:

1º Establecimiento y creación de servicios municipales referentes al arreglo y ornato de la vía pública, comodidad é higiene del vecindario, fomento de sus intereses materiales y morales, y seguridad de las personas y propiedades á saber:

1. Apertura y alineación de calles y plazas y de toda clase de vías de comunicación.
2. Empedrado, alumbrado y alcantarillado.
3. Surtido de aguas.
4. Paseos y arbolados.
5. Establecimientos balnearios, lavaderos, casas de mercados y mataderos.
6. Ferias y mercados.
7. Instituciones de instrucción y servicio sanitario.
8. Edificios municipales y, en general, todo género de obras públicas necesarias para el cumplimiento de los servicios, con sujeción á la legislación especial de Obras públicas.
9. Vigilancia y guardería.

2º Policía urbana y rural, ó sea cuando tenga relación con el buen orden y vigilancia d los servicios municipales establecidos, cuidado de la vía pública en general, y limpieza, higiene y salubridad del pueblo.

3º Administración municipal, que comprende el aprovechamiento, cuidado y conservación de todas las fincas, bienes y derechos pertenecientes al Municipio y establecimientos que de él dependan, y la determinación, repartimiento, recaudación, inversión y cuenta de todos los arbitrios é impuestos necesarios para la realización de los servicios municipales.

Es obligación de los Ayuntamientos la composición y conservación de los caminos vecinales.

En cuanto a los caminos rurales, los Ayuntamientos obligarán á los interesados en los mismos á su reparación y conservación.

Para lograr tan útiles objetos acordarán los medios en junta de asociados para los vecinales y en junta de interesados para los rurales.

Los gobernadores velarán por el cumplimiento de esa parte tan interesante de la Administración en virtud de las facultades que les confiere la ley Provincial (1).

Art.73 Es obligación de los Ayuntamientos procurar por si ó con los asociados, en los términos que más adelante se expresarán, el exacto cumplimiento con arreglo á los recursos y necesidades del pueblo de los fines y servicios que según la presente ley están sometido á su acción y vigilancia, y en particular de los siguientes;

- 1º Conservación y arreglo de la vía pública.
- 2º Policía urbana y rural.
- 3º Policía y seguridad.
- 4º Instrucción primaria.

(1) Los acuerdos adoptados en las materias que son de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos son inmediatamente ejecutivos, sin que el recurso de alzada interpuesto permita al gobernador conocer del fondo del asunto, pues dicha autoridad debe limitarse á declarar si el Ayuntamiento obró con competencia ó sin ella, confirmando el acuerdo en el primer caso y revocándolo en el segundo (Sentencias de 21 de Noviembre y de 26 de Diciembre de 1910, Sala tercera.)

Ley Municipal

5° Administración, custodia y conservación de todas las fincas, bienes y derechos del pueblo.

6° Instituciones de beneficencia.

Las atribuciones de los Ayuntamientos en el ramo de beneficencia serán y se entenderán siempre sin perjuicio de la alta inspección que al Gobierno confiere la legislación vigente sobre beneficencia. general y particular.

En los asuntos que no sean de su exclusiva competencia están igualmente obligados á auxiliar la acción de las autoridades generales y locales para el cumplimiento de aquella parte de las leyes que se refiera á los habitantes del término municipal ó deba cumplirse dentro del mismo, á cuyo efecto procederán en conformidad á lo que determinen las mismas leyes y los reglamentos dictados para su ejecución.

Art.74 Para el cumplimiento de las obligaciones de los Ayuntamientos corresponden á estos muy especialmente las atribuciones siguientes:

1ª Formación de las Ordenanzas municipales de policía urbana y rural.

2ª Nombramiento de sus empleados y agentes en todos los ramos.

Los agentes de vigilancia municipal que usan armas dependerán exclusivamente del Alcalde en su nombramiento y separación.

3ª establecimiento de prestaciones personales.

4ª asociación con otros Ayuntamientos.

Art.75 Es atribución de los Ayuntamientos arreglar para cada año el modo de división, aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales del pueblo, con sujeción á las siguientes reglas (1):

1ª Cuando los bienes comunales no se presten á ser utilizados en igualdad de condiciones por todos los vecinos del pueblo, el disfrute y aprovechamiento será adjudicado en pública licitación entre los mismos vecinos exclusivamente, previas las tasaciones necesarias y la división en lotes, si á ello hubiere lugar.

2ª Si los bienes fueran susceptibles de utilización general, el Ayuntamiento verificará la distribución de los productos entre todos los vecinos, formando al efecto divisiones ó lotes que adjudicará á cada uno con arreglo á cualquiera de las tres bases siguientes:

Por familias ó vecinos.

Por personas ó habitantes.

Por cuota de repartimiento, si la hubiere.

3ª la distribución por vecinos se hará con estricta igualdad entre cada uno de ellos, sea cual fuere el número de individuos de que conste su familia ó que vivan en su compañía y bajo su dependencia.

La distribución por persona se hará adjudicando á cada vecino la parte que le corresponda en proporción al número de habitantes residentes de que conste su casa ó familia.

La distribución por cuota de repartimiento se verificará entre los vecinos sujetos, á su pago, adjudicando á cada uno la parte que en proporción á la cuota repartida le corresponda.

En este caso se adjudicará á los vecinos pobres exceptuados del pago una porción que no exceda de lo que corresponda al contribuyente por cuenta más baja.

(1) *Son bienes comunales aquellos cuyo aprovechamiento se hace por los vecinos de uno ó más pueblos con sujeción á las leyes ú Ordenanzas. Son bienes de propios los que administraban los Ayuntamientos invirtiendo sus productos en atenciones del presupuesto municipal*

Ley Municipal

3ª la distribución por vecinos se hará con estricta igualdad entre cada uno de ellos, sea cual fuere el número de individuos de que conste su familia ó que vivan en su compañía y bajo su dependencia.

La distribución por persona se hará adjudicando á cada vecino la parte que le corresponda en proporción al número de habitantes residentes de que conste su casa ó familia.

La distribución por cuota de repartimiento se verificará entre los vecinos sujetos, á su pago, adjudicando á cada uno la parte que en proporción á la cuota repartida le corresponda.

En este caso se adjudicará á los vecinos pobres exceptuados del pago una porción que no exceda de lo que corresponda al contribuyente por cuenta más baja.

4ª En casos extraordinarios y cuando las atenciones del pueblo así lo exijan puede el Ayuntamiento acordar la subasta entre los vecinos de los aprovechamientos comunales propiamente dichos, ó fijar el precio que cada uno ha de satisfacer por el lote que le haya sido adjudicado.

En todo lo referente al régimen, aprovechamiento y conservación de los monte municipales regirán la ley de 34 de Mayo de 1863 y el reglamento de 17 de igual mes de 1865.

Art. 76 las Ordenanzas municipales de policía urbana y rural que los Ayuntamientos acuerden para el régimen de sus respectivos distritos no serán ejecutivas sin la aprobación del gobernador, de acuerdo con la Diputación provincial.

En caso de discordia, si el Ayuntamiento insiste en su acuerdo, la aprobación en los puntos á que aquélla se refiere corresponde al Gobierno, previa consulta al Consejo de Estado.

Ni en ella ni en los reglamentos y disposiciones que los Ayuntamientos formaren para su ejecución se contravendrá á las leyes generales del país

Art.77 Las penas que por infracción de las Ordenanzas y reglamento impongan los Ayuntamientos sólo pueden ser multa que no excedan de 50 pesetas en las capitales de provincia, 25 en las de partido y pueblos de 4.000 habitantes. , y 15 en los restantes, con el resarcimiento del daño causado é indemnización de gastos y arresto de un día por duro en caso de insolvencia.

Par la exacción de estas multas se procederá en conformidad á lo dispuesto en los artículos 185, reglas 1ª, 2ª y 3ª, 186 y 188.

El juez municipal desempeñará las funciones que el artículo 188 se encomiendan al de primera instancia.

Contra la imposición gubernativa puede el multado reclama, conforme al artículo 187.

Art.78 Es atribución exclusiva de los Ayuntamientos el nombramiento y separación de todos los empleados y dependientes pagados por los fondos municipales y que sean necesarios para la realización de los servicios que están á su cargo, con la excepción establecida en el párrafo cuarto del artículo 74 (1).

Los funcionarios destinados á servicios profesionales tendrán la capacidad y condiciones que en las leyes relativas á aquellos se determine.

Art.79 La prestación personal se concede como auxilio para fomentar las obras públicas municipales de toda especie; los Ayuntamientos tienen facultad para imponerla á todos los habitantes mayores de diez y seis y menores de cincuenta años, exceptuando los acogidos en los establecimientos de caridad, los militares en activo servicio y los imposibilitados para el trabajo.

El número de días no excederá de veinte al año ni de diez consecutivos, siendo redimible cada uno por el valor que tengan los jornales en cada localidad.

(1)La separación de empleados municipales como corrección disciplinaria no puede acordarse sin dar audiencia previa al interesado, (Sentencia de 27 de Abril de 1912, Sala tercera)

Ley Municipal

Fuera de los casos de obras públicas que en este artículo se expresan no podrá exigirse prestación ni servicio personal de ninguna clase, incurriendo en responsabilidad el alcalde ó teniente que así lo hiciere.

Art.80 Los Ayuntamientos pueden formar entre sí y con los inmediatos asociaciones y comunidades para la construcción y conservación de caminos, guardería rural, aprovechamientos vecinales y otros objetos de su exclusivo interés.

Estas comunidades se regirán por una Junta compuesta de un delegado por cada Ayuntamiento, presidida por un vocal que la Junta elija.

La Junta formará las cuentas y presupuestos, que serán sometidos á las Municipalidades de cada pueblo, y en su defecto de aprobación de todas ó de algunas, al gobernador, oyendo necesariamente á la Comisión provincial.

Art.81 El Gobierno de S.M., cuidará de fomentar y proteger por medio de sus delegados las asociaciones y comunidades de Ayuntamientos para fines de seguridad, instrucción, asistencia, policía, construcción y conservación de caminos, aprovechamientos vecinales ú otros servicios de índole análoga, sin perjuicio de los derechos adquiridos hasta hoy.

Estas comunidades serán siempre voluntarias y estarán regidas por Juntas de delegados de los Ayuntamientos, que celebrarán alternativamente sus reuniones en las respectivas cabezas de los distritos municipales asociados.

Cuando se produzcan reclamaciones sobre la manera como actualmente son administradas las antiguas comunidades de tierra, el Gobierno, oyendo al Consejo de Estado, podrá someter dichas comunidades á lo dispuesto en el párrafo anterior, salvas las cuestiones relativas á los derechos de propiedad hasta hoy adquiridos, que quedan reservadas á los tribunales de justicia.

Art.82 Los Ayuntamientos pueden representar acerca de los negocios de su competencia á la Diputación provincial, al gobernador y á las Cortes (1).

Fuera del caso en que representen en queja del alcalde, del gobernador ó de la Diputación habrán de hacerlo por conducto del primero, y del segundo además cuando se dirijan al Gobierno.

Si en el término de ocho días no dieren curso esas autoridades á las representaciones de los Ayuntamientos en asuntos de su competencias, son inmediatamente ejecutivos, salvo los recursos que determinan las leyes.

Art.83 Todos los acuerdos de los Ayuntamientos en asuntos de su competencia son inmediatamente ejecutivos, salvo los recursos que determinan las leyes.

Art.84 Necesitan la aprobación del gobernador, oída la Comisión provincial, para ser ejecutivos, los acuerdos que se refieren á lo siguiente:

1º Reforma y supresión de establecimientos municipales de beneficencia é instrucción.

2º Podas y cortas en los montes municipales, con sujeción á la ley y reglamento del ramo (2).

(1) Los Ayuntamientos pueden acudir á las Cortes directamente, sin mediación del gobernador ni del Gobierno

(2) Véase el artículo 15 del Real decreto de 15 de Noviembre de 1909

Ley Municipal

Art.85 Las enajenaciones y permutas de los bienes municipales se acomodarán á las reglas siguientes:

1ª Los terrenos sobrantes de la vía pública y concedidos al dominio particular, y los efectos inútiles, pueden ser vendidos exclusivamente por el Ayuntamiento.

2ª Los contratos relativos á los edificios municipales inútiles para el servicio á que estaban destinados, y créditos particulares á favor del pueblo, necesitan la aprobación del gobernador, oyendo á la Comisión provincial.

3ª Es necesaria la aprobación del Gobierno, previo informe del gobernador, oyendo á la Comisión provincial, para todos los contratos relativos á los demás bienes inmuebles del Municipio, derechos reales y títulos de la Deuda pública (1).

Art.86 Es necesaria la autorización de la Diputación para entablar pleitos á nombre de los pueblos menores de 4.000 habitantes.

El acuerdo del Ayuntamiento ha de ser tomado en todo caso previo dictamen conforme de dos letrados.

No se necesita autorización ni dictamen de letrados para utilizar los interdictos de retener ó recobrar y los de obra nueva ó vieja, ni para seguir los pleitos en que el Ayuntamiento fuese demandado (2).

Art.87 Siempre que por cualquiera de los casos enumerados en los artículos anteriores sea preciso obtener la aprobación del gobernador ó del Gobierno el alcalde cuidará de remitir los antecedentes dentro de un plazo que no exceda de ocho días, contados desde la fecha del acuerdo.

Art.88 Los Ayuntamientos, en todos los asuntos que según esta ley no les competen exclusivamente y en que obran por delegación, se acomodarán á lo mandado por las leyes y disposiciones del Gobierno que á ellos se refieran.

Art.89 Los juzgados y Tribunales no admitirán interdictos contra las providencias administrativas de los ayuntamientos y alcaldes en los asuntos de su competencia.

Los interesados pueden utilizar para su derecho los recursos establecidos en los artículos 171 y 177 de esta ley.

CAPÍTULO II

De la administración de los pueblos agregados a un término municipal.

Art.90 Los pueblos que formando con otros término municipal tengan territorio propio, agua, pastos, montes ó cualesquiera derechos que les sean peculiares conservarán sobre ellos su administración particular (3).

Art.91 Para dicha administración nombrarán una Junta, que se compondrá de un presidente y de dos ó cuatro vocales, elegidos directamente uno y otros por los vecinos del pueblo y de entre ellos mismos.

Serán cuatro los vocales para los pueblos de sesenta ó más vecinos, y dos cuando sea menor el vecindario.

(1) Véase los artículos 15 y 16 del real decreto de 15 de Noviembre de 1909.

(2) Véase el artículo 15 del mismo Real decreto

(3) Para ejercitar acciones ante tribunales, las Juntas administrativas deben acudir al Ayuntamiento respectivo.

Ley Municipal

Art.92 La elección de presidente y vocales indicados se hará con arreglo á la ley Electoral, pero en un solo día y sin que transcurran más de ocho desde la posesión del Ayuntamiento del término, el cual cuidará de la ejecución.

Art.93 Elegidos los tres ó cinco individuos para la Junta, corresponderá el cargo de presidente á quien haya obtenido más votos, y si hubiese empate, decidirá la suerte.

Art.94 Serán tachas para la elección de individuos de la Junta con relación al pueblo respectivo las mismas que establece esta ley para los cargos municipales.

Art.95 El Ayuntamiento del término respectivo inspeccionará administración particular á que se refiere este capítulo, bien por su iniciativa, ó ya á solicitud de dos ó más vecinos del pueblo interesado.

Art.96 La administración y la inspección expresadas, así como los deberes y obligaciones de la Junta y de sus vocales, se arreglarán á las prescripciones de la presente ley en todo lo que no se halle determinado en este capítulo.

CAPÍTULO III

De las sesiones y del modo de funcionar los Ayuntamientos.

Art.97 Las sesiones del Ayuntamiento serán públicas. Sólo serán secretas cuando así lo acordare la mayoría de los asistentes por ser asuntos que en ellas hayan de tratarse relativos al orden público, régimen interior de la Corporación, ó por afectar al decoro de ésta ó cualquiera de sus miembros. Las sesiones se celebrarán precisamente, bajo la pena de nulidad, en las Casas Consistoriales, salvo los casos de fuerza mayor.

Estarán constantemente anunciados en los sitios de costumbre los días y horas en que daban celebrar se las sesiones ordinarias.

Art.98. Los alcaldes, tenientes y regidores están obligados á concurrir puntualmente á todas las sesiones ordinarias y extraordinarias, no impidiéndoselo justa causa, que acreditarán en su caso.

La falta de asistencia hace incurrir por cada vez en una multa, con arreglo á la siguiente escala:

En pueblos de más de 30.000 habitantes, cinco pesetas; en pueblos de más de 15.000 habitantes, cuatro pesetas; en pueblos de más de 8.000 habitantes, dos pesetas; en los demás, una pesetas.

Esta disposición es aplicable á los vocales de la Junta municipal; pero las multas serán por cantidad cuádruple respecto á la primera, y doble de ésta respecto á la segunda(1).

Art.99 Los alcaldes, tenientes y regidores tienen todos voz y voto en las sesiones y acuerdos del Ayuntamiento.

Son igualmente responsables por los acuerdos que autoricen con su voto, sin que por ningún concepto les sea permitido abstenerse de emitirlo (2).

Art.100 La presidencia del Ayuntamiento corresponde al alcalde.

En su defecto, presidirán los tenientes; y á falta de todos, el regidor decano y los demás por el orden que se determina en el artículo 52.

El gobernador preside sin voto cuando asiste á las sesiones del Ayuntamiento.

(1) Véase el artículo 19 del Real decreto de 15 de Noviembre de 1909.

(2) Las responsabilidades de este artículo no alcanzan á los que no hayan asistido á la sesión

Ley Municipal

Art.101 El alcalde podrá convocar á sesión extraordinaria cuando lo juzgue oportuno, y debe hacerlo siempre que se lo convenga el gobernador ó lo reclame la tercera parte de los concejales.

Art.102 En toda convocatoria para sesión extraordinaria se expresarán los asuntos que hayan de tratarse en ella, y no podrá el Ayuntamiento ocuparse de ningún otro en la misma sesión.

Las convocatorias se harán con un día de anticipación por lo menos, á no ser en los casos de mayor urgencia, y quedarán sujetos los acuerdos á ratificación en la sesión inmediata.

Art.103 Toda sesión con carácter de ordinaria, fuera de los días señalados, conforme al artículo 57 de esta ley, así como cualquiera extraordinaria no convocada por el alcalde en la forma y con las circunstancias que previenen los artículos anteriores, ó en que se tratare de un asunto no anunciado en la convocatoria, es nula y de ningún valor, y nulos también los acuerdos en ella tomados.

Art.104 Para que haya sesión se requiere la presencia de la mayoría del total de concejales que según esta ley deba tener el Ayuntamiento.

Si en la primera reunión no hubiera número suficiente para acordar, se hará nueva citación para dos días después, expresando la causa, y los que concurran puede tomar acuerdo, cualquiera que sea el número.

Art.105 Todo asunto sobre que haya de resolver el Ayuntamiento será primero discutido, y luego votado.

Se entiende acordado lo que votaren la mitad más uno de los Concejales presentes en sesión.

En caso de empate, se repetirá la votación en la sesión próxima, ó en la misma si el asunto tuviere el carácter de urgente á juicio de los asistentes; y si aquél se produjere, el voto del que presida será decisivo. Si el gobernador de la provincia presidiera accidentalmente, decidirá el voto de aquel concejal á quien, según la ley correspondiera la presencia.

Art.106 Las votaciones serán nominales cuando no se trate de asuntos relativos á los mismos concejales ó á personas de su familia dentro del cuarto grado, en cuyo caso serán secretas, debiendo salir de la sesión mientras se discuta y vote el asunto el concejal interesado.

Art.107 de cada sesión se extenderá por el secretario del Ayuntamiento un acta en que han de constar los nombres del presidente y demás concejales presentes, los asuntos que tratasen y lo resuelto sobre ellos, el resultado de las votaciones y la lista de las nominales, cuando las hubiere.

Siempre constarán en el acta la opinión de las minorías y sus fundamentos.

El acta será firmada por los concejales que concurrieren á la sesión, por los presentes cuando se dé cuenta de ella, y por el secretario.

El acta de la sesión inaugural de cada Ayuntamiento será firmada por todos los que á ellas concurran, expresando los que no saben firmar.

Art.108 El libro de actas del Ayuntamiento es un instrumento público y solemne; ningún acuerdo que no conste explícita y terminantemente en el acta á que se refiere tendrá valor alguno.

Este libro está extendido en papel del sello correspondiente, y todas sus hojas llevarán la rúbrica del alcalde y del sello del Ayuntamiento (1).

Art.109 A in de que cada mes en las capitales de provincia y de partido y pueblos que tengan más de 4.000 habitantes, y de cada trimestre en los demás, se formará por el secretario un extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento durante el mismo, y, aprobado por la Corporación, se remitirá al gobernador de la provincia para su inserción en el Boletín Oficial (2).

(1) *El libro de actas ha de estar reintegrado con arreglo á la ley del Timbre.*

(2) *Véase el artículo 25 del Real decreto de 14 de Noviembre de 1909.*

Ley Municipal

Art.110 Las reglas anteriores se aplicarán á las actas y sesiones de la Junta municipal. Se llevarán sus actas en libros separados de las del Ayuntamientos, y con análogas formalidades, precauciones y requisitos, salvo lo en contrario dispuesto por esta ley.

Art.111 Los trámites de instrucción y discusión no servirán nunca de excusa á los Ayuntamientos para dilatar el cumplimiento de las obligaciones que las leyes les imponen (1).

CAPÍTULO IV

De las funciones administrativas, de los alcaldes, tenientes, síndicos, regidores y alcaldes de barrio.

Art.112 El alcalde presidente de la Corporación municipal lleva su nombre y representación en todos los asuntos, salvas las facultades concedidas á los síndicos.

Art.113 Corresponde al alcalde único, ó al primero donde haya más de uno:

1º Presidir las sesiones y dirigir las discusiones.

2º Cuidar, bajo su responsabilidad, de que se cumplan por el Ayuntamiento las leyes y disposiciones de sus superiores jerárquicos.

3º Corresponderse á nombre del Ayuntamiento con las autoridades y particulares que fuese necesario.

Art.114 Corresponde también al alcalde único, ó primero en su caso, como jefe de la Administración municipal:

1º Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento cuando fueren ejecutivos y no mediare causa legal para su suspensión, procediendo si fuese necesario por la vía de apremio y pago, é imponiendo multas que en ningún caso excedan de las que establece el artículo 77, y arresto por insolencia.

2º Suspender la ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento en los casos prescritos por los artículos 169 y 170 de esta ley.

3º Transmitir á la Diputación provincial y al gobernador de la provincia, según lo que en esta ley se prescribe, los acuerdos del Ayuntamiento que requieran la aprobación superior para ser ejecutivos, y publicarlos, ejecutarlos y hacerlos cumplir cuando lo obtuvieren.

4º Transmitir á quien corresponda las exposiciones que los Ayuntamientos en uso de su derecho hicieren á la Diputación provincial, al gobernador ó á las Cortes.

5º Dirigir todo lo relativo á la policía urbana y rural, dictando al efecto los bandos y disposiciones que tuviere por convenientes, conforme á las Ordenanzas y resoluciones generales del Ayuntamiento en la materia.

6º Dirigir y vigilar la conducta de todos los dependientes del ramo de policía urbana y rural, castigándoles con suspensión de empleo y sueldo hasta treinta días, y proponer su destitución al Ayuntamiento

(3) *Cuando no obstante este artículo, los Ayuntamientos retrasen sus resoluciones, pueden establecerse el recurso de queja.*

Ley Municipal

7º Ejercer todas las funciones propias de ordenador y jefe de la inversión de fondos municipales y su contabilidad.

8º Inspeccionar, activar y dirigir en lo económico y gubernativo las obras, establecimientos de beneficencia y de instrucción pública costeados por fondos municipales con sujeción á las leyes y disposiciones para su ejecución.

9º Cuidar de que se presten con exactitud los servicios de bagajes, alojamientos y demás cargas públicas.

10º Presidir los remates y subastas para ventas, arrendamientos y servicios municipales, salvo las disposiciones de las leyes.

11º Corresponderse en los asuntos de su competencia administrativa con las autoridades y Corporaciones de la provincia, haciéndolo por conducto del gobernador de la misma cuando hubiere de entenderse con las de otras ó con el Gobierno, y desempeñar cuantas funciones especiales le confieran las leyes y reglamentos.

Art.115 Donde sólo hubiere un teniente el alcalde y el teniente tendrá cada á su cargo uno de los distritos en que se haya dividido el término municipal.

Donde hubiere más de un teniente los distritos de e dividirán sólo entre los tenientes.

Art.116 Los tenientes ejercerán cada uno en su distrito las funciones que la ley atribuye al alcalde, bajo la dirección de éste como jefe superior de la administración municipal. Los alcaldes de barrio están á las ordenes de los tenientes y ejercen la parte de funciones administrativas que éstos les deleguen.

Art.117 El alcalde y los tenientes necesitan licencia del Ayuntamiento para ausentarse de su término por más de ocho días.

En ningún caso dejarán de dar aviso previo al que haya de reemplazarlos, y además lo comunicarán por escrito al Ayuntamiento cuando la ausencia exceda de dos día.

Esto mismo tendrá lugar respecto al alcalde cuando por un asunto urgente tuviere precisión de ausentarse antes de poder obtener licencia del Ayuntamiento.

Para estos casos puede el alcalde autorizar la ausencia de los tenientes.

La licencia concedida y el nombre del que ha de reemplazar al ausente serán comunicados al gobernador en la fecha de aquélla.

Art.118 Los alcaldes de barrio no pueden ausentarse nunca del de su cargo por más veinticuatro horas sin licencia del alcalde, quien designará persona que los reemplace durante su ausencia.

Art.119 Los tenientes reemplazarán al alcalde en todas sus atribuciones y los regidores á los tenientes, por el orden establecido en el artículo 52 en casos de ausencias, enfermedades ó vacantes interinas (1).

Art.120 No pueden los concejales sin licencia del Ayuntamiento ausentarse en día de sesión ordinaria ó extraordinaria, ni por más tiempo que el que medie entre dos ordinarias.

Sólo se concederá licencia á la par á la cuarta parte del número total de concejales.

Art.121 Los concejales desempeñarán sus funciones dentro del término municipal á que pertenecen, sin que para su ejercicio puedan ser obligados por nadie á salir de él.

(1) Véase la Real orden de 12 de Octubre de 1885

CAPÍTULO V
De los secretarios de ayuntamientos.

Art.122 Todo Ayuntamiento tendrá un secretario pagado de sus fondos.

El nombramiento corresponde exclusivamente al Ayuntamiento, previo concurso, comunicado el nombramiento al gobernador (1).

Art.123 Para ser secretario se necesita ser español, mayor de edad, estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos, y poseer los conocimientos de instrucción primaria.

No pueden ser secretarios en propiedad ni interinamente:

1º Los concejales del mismo Ayuntamiento.

2º Los notarios y escribanos, en tanto que desempeñen las funciones propias de estos cargos.

3º Los empleados activos de todas clases.

4º Los particulares ó facultativos que tengan contacto ó compromisos de servicios con el Ayuntamiento ó común de vecinos.

5º Los que directa ó indirectamente tengan parte en servicios, contratos ó suministros dentro del distrito municipal, por cuenta de éste, de la Provincia ó del Estado.

6º Los que tengan pendiente cuestión administrativa ó judicial con el Ayuntamiento ó con los establecimientos que se hallen bajo su dependencia ó su administración.

7º Los deudores á fondos municipales como segundos contribuyentes.

El cargo de secretario es incompatible con todo otro cargo municipal.

Art.124 Los alcaldes pueden suspender á los secretarios, dando al gobernador cuenta documentada para su conocimiento.

La destitución será valida cuando lo acuerden dos terceras partes de la totalidad de los concejales (2), en cuyo caso se informará al gobernador, remitiéndose copia del acta.

El gobernador, mediante causa grave, podrá también suspender y destituir á los secretarios del Ayuntamiento, dando parte al Gobierno, quien, á instancia ó con audiencia del secretario destituido ó suspenso y oyendo al Consejo de Estado, adoptará la resolución que estime oportuna (3).

Art.125 La obligaciones de los secretarios del Ayuntamiento son:

1º Asistir sin voz ni voto á todas las sesiones del Cuerpo municipal para darle cuenta de la correspondencia y de los expedientes en la forma y orden que el presidente se lo prevenga.

2º Redactar el acta de cada sesión, leerla al principio de la siguiente, y aprobada que sea, hacerla transcribir fielmente al libro destinado al efecto, cuidando de recoger las firmas, como previene el artículo 107, y estampando la suya en el lugar correspondiente.

3º Preparar los expedientes para los trabajos de las Comisiones y la resolución del Ayuntamiento.

4º Anotar bajo su firma en cada expediente la resolución del Ayuntamiento.

5º Extender las minutas de los acuerdos y resoluciones del Cuerpo municipal, y de las Comisiones en su caso.

(1) Véase el artículo 20 del Real decreto de 15 de Noviembre de 1909.

(2) Que constituyan el Ayuntamiento; no de los que asistan á la sesión, (Sentencia del Tribunal de la Contencioso de 21 de Diciembre de 1910)

No pueden acordarla los concejales interinos, sino los propietarios, (Sentencia del Tribunal de lo Contencioso de 271 de Diciembre de 1910)

Cuando la destitución se funde en la comisión de una falta, es necesario que ésta resulte demostrada y sea imputable al secretario.

(3) Véase el artículo 15 del Real decreto de 15 de Noviembre de 1909.

Ley Municipal

6° Preparar los expedientes, anotar las resoluciones y extender las minutas de los acuerdos del alcalde cuando no hubiere secretario especial al efecto.

7° Certificar de todos los actos oficiales del Cuerpo municipal y del alcalde donde no hubiere secretario especial, y expedir las certificaciones á que hubiere lugar.

Estas, sin embargo, para ser valederas requieren el visto bueno del alcalde.

8° Dirigir y vigilar á los empleados d la Secretaria, de que es jefe.

9° Auxiliar á las Juntas periciales, sin retribución especial, en la confección de amillaramientos y repartos.

10° Cualquier otro encargo que las leyes le atribuyan ó el Ayuntamiento le confiare, dentro de la esfera y objeto de su empleo.

Art.126 Donde no hubiere archivero será cargo del secretario custodiar y ordenar el Archivo municipal.

Formará inventario de todos los papeles y documentos, y lo adicionará cada año con un apéndice, del cual, así como del inventario, remitirá copia, con el visto bueno del alcalde, á la Diputación provincial.

Art.127 En los Ayuntamientos en que no hubiere contador, será cargo del secretario llevar los registros de entradas y salidas de caudales, autorizar los libramientos y tomar razón de las cartas de pago.

Art.128 Los Ayuntamientos pueden imponer á sus secretarios las correcciones disciplinarias que tengan por conveniente, dentro d sus facultades, por las faltas ó abusos que cometieren en el ejercicio de su cargo y no dieren lugar á encausamiento criminal.

Art.129 Los secretarios de Ayuntamiento lo serán del alcalde; pero en las capitales de provincia y en, los pueblos de más de 25.000 habitantes el alcalde tienen facultad para nombrar un secretario especial cuyo sueldo será determinado por la Junta municipal.

Art.130 Los secretarios de Alcaldía, donde los hubiere, quedarán en cuanto á responsabilidad igualados á los del respectivo Ayuntamiento, salvas las diferencias consiguientes en la parte de atribuciones.

Art.131 El secretario del Ayuntamiento lo será de la Junta municipal.

TÍTULO IV

De la Hacienda municipal.

CAPÍTULO PRIMERO

De los presupuestos municipales.

Art.132 Son aplicables á la Hacienda municipal las disposiciones de la ley de contabilidad general dl Estado, en cuanto no se oponga á la presente.

El año económico municipal será el mismo que rija para los presupuestos y cuentas de la Nación.

Art.133 Los Ayuntamientos formarán todos los años un presupuesto que comprenda los gastos que por cualquier concepto hayan de hacerse y los ingresos destinados á cubrirlos.

Al efecto constituirán de su seno una de las Comisiones permanentes de que habla el artículo 60.

Art.134 Los presupuestos anuales ordinarios contendrán precisamente las partidas necesarias según los recursos del Municipio para atender y llenar las obligaciones á que se refiere el párrafo primero, artículo 73 de esta ley; los servicios establecidos de entre los que según el artículo 72 sean de la

Ley Municipal

competencia de los Ayuntamientos; los gastos que en virtud del párrafo segundo del citado artículo 73 expresan clara y terminantemente las leyes como obligatorios, y además los siguientes:

1º Personal y material de las dependencias y oficinas.

2º Pensiones, censos y cargas de justicia que pesen sobre los fondos municipales, así como de las deudas reconocidas y liquidadas, y réditos y consecuencias de contratos.

3º Fomento del arbolado.

4º Medios preventivos, y de socorro contra incendios, y de salvamento en las poblaciones marítimas.

5º Suscripción al Boletín Oficial de la provincia en todos los Ayuntamientos, y á la Gaceta de Madrid en las cabezas de partido y pueblos que excedan de 2.000 habitantes.

6º Contingente del Municipio en el repartimiento provincial.

7º Una partida para imprevistos y calamidades públicas que no exceda del 10 por 100 del presupuesto de gastos.

8º Las impresiones, anuncios y demás necesario para la publicidad de los actos municipales.

El valor de los aprovechamientos comunales enajenados ó distribuidos entre los vecinos será incluido en los presupuestos municipales de ingresos, y figurará como data en los gastos, al valor de los lotes adjudicados ó repartidos por el título lucrativo.

Art.135 Los gastos comprendidos en los presupuestos municipales serán cubiertos con los ingresos, recargos y arbitrios que autorizan esta ley, la general de Presupuestos del Estado y la demás disposiciones vigentes, sin continuar los Ayuntamientos en la obligación de subordinarse estrictamente al orden establecido en el artículo 136.

Art.136 Los ingresos serán:

Rentas y productos procedentes de bienes, derechos ó capitales que por cualquier concepto pertenezcan al Municipio ó á los establecimientos de beneficencia, instrucción y otros análogos que de él dependan

Arbitrios é impuestos municipales sobre determinados servicios, obras ó industrias, así como los aprovechamientos de policía urbana y rural, y multas é indemnizaciones por infracción de las Ordenanzas municipales y bandos de policía.

Un repartimiento general entre todos los vecinos y hacendados en proporción á los medios ó facultades de cada uno, para cubrir los servicios municipales en la totalidad ó en la parte á que no alcancen los anteriores recursos.

Impuestos sobre artículos de comer, beber y arder.

Los Ayuntamientos de poblaciones mayores de 200.000 habitantes, si renuncian al repartimiento general, podrán acudir á otros impuestos, recargos ó arbitrios además de los enumerados en las leyes, con la aprobación del Gobierno, que oirá, para concederlos, al Consejo de Estado (1).

Art.137 Para el cumplimiento del párrafo segundo del artículo 1326 se observarán las reglas siguientes:

1ª Sólo será autorizado el establecimiento de arbitrios sobre aquellas obras y servicios costeados con los fondos municipales cuyo aprovechamiento no se efectúe por el común de vecinos, sino por personas ó clases determinadas, siempre que los interesados no le hayan adquirido anteriormente por título eneroso, así como sobre industrias que se ejerzan en la vía pública ó en terrenos y propiedades del pueblo, entendiéndose que el Ayuntamiento no podrá atribuirse monopolio ni privilegio alguno sobre aquellos servicios sino en lo que sea necesario para la salubridad pública.

(1) Véase el artículo 21 del Real decreto de 15 Noviembre de 1909.

Ley Municipal

2º En conformidad á lo dispuesto en el artículo anterior, puede autorizarse el establecimiento de arbitrios sobre los objetos siguientes:

Aprovechamiento y abastecimiento de aguas para uso privados.

Alcantarillado.

Establecimientos balnearios de aguas públicas.

Guardería rural.

Establecimientos de enseñanza secundaria, superior ó especial.

Licencias para construcción de edificios.

Mataderos.

Puestos públicos y sillas en plazas, calles, ferias, mercados y paseos.

Alquiler de pesas y medidas.

Almotacenia y repeso.

Enterramientos en los cementerios municipales.

Coches de plaza y de servicios funerarios y carros de transporte en el interior de las poblaciones.

Expedición de certificaciones por actos del Ayuntamiento ó documentos que existan en sus archivos.

Parte que concedan las leyes en la expedición de documentos de vigilancia, licencias de caza y pesca y de navegación y flote de los ríos y aprovechamientos de aguas.

Y los demás análogos.

3ª En ningún caso pueden ser objeto de arbitrio los servicios siguientes:

Aprovechamiento y abastecimiento de aguas para uso comunal.

Alumbrado público.

Aceras y empedrados.

Vigilancia pública.

Beneficencia.

Instrucción pública elemental.

Limpieza, sin perjuicio de los aprovechamientos á que diere lugar.

Y otros de igual naturaleza.

4º Se autoriza la creación de arbitrios sobre la venta de bebidas espirituosas ó fermentadas, bien sean en establecimientos ó puestos fijos, ó bien por mercaderes ambulantes, trajineros ó por los mismos cosecheros ó fabricantes; sobre cafés, fondas, botillerías, posadas, hospederías y otros establecimientos del mismo carácter; sobre casas de baños, sobre toda clase de espectáculos, y sobre juegos permitidos y rifas, en la parte que las leyes concedan á los Ayuntamientos.

5ª Los derechos de mataderos se acumularán á los consumos (cuando los Hubiere), y no podrán en junto exceder del 25 por 100, de conformidad con el párrafo segundo, regla 1ª del artículo 139.

Donde no hubiere sobre carnes derechos de consumo sólo se impondrá por derechos de matanza una cantidad que jamás exceda del 10 por 100 del valor de la res.

6ª los arbitrios expresados en la regla 4ª de este artículo, salvo los relativos á casas de baños, espectáculos públicos, juegos y rifas, no serán autorizados en casos de existir los impuestos de consumos; pero los establecimientos enumerados pueden ser en todo caso objeto de un arbitrio especial, por razón de vigilancia, que no exceda del 5 por 100 de la cuota con que contribuyan al estado.

7ª Los arbitrios sobre industrias que se ejerzan en la vía públicas no existirán acumulativamente con el repartimiento general, sin perjuicio de lo cual las cuotas que por este concepto correspondan á los industriales pueden ser recargadas con un 5 por 100 por razón de arriendo ó uso de la vía.

Ley Municipal

8º Las cuotas que se impongan á las industrias mencionadas en esta ley que se hallen incluidas en las tarifas de la contribución industrial correspondientes al Estado, no excederán del 25 por 100 de la cantidad señalada en éstas; y

9ª El pago de multas é indemnizaciones se hará en un papel especial, que la Hacienda emitirá para el caso, y entregará á los Ayuntamientos que lo soliciten, cobrando sobre él por razón de sello un derecho que no exceda del 10 por 100 de su valor nominal.

Art.138 Para el cumplimiento del párrafo tercero del artículo 136 se observarán las reglas que á continuación se expresan:

1ª El repartimiento general será extensivo á las personas siguientes, por todas las utilidades que tengan en el distrito, sea cual fuere su naturaleza:

Primero. A los vecinos del distrito municipal.

Segundo. A los propietarios forasteros que, según el artículo 27, tengan consideración de vecinos.

Tercer. A los que, según el mismo artículo, tengan el concepto y consideración de propietarios.

Cuarto. A los colonos, arrendatarios ó aparceros de fincas rústicas que no residan en el distrito.

Las utilidades que procedan de pensiones, intereses de capitales, sueldos ó rentas públicas, serán imputadas á sus poseedores en el pueblo donde residan.

Quedan exceptuados del repartimiento los pobres de solemnidad, los acogidos en los establecimientos de beneficencia y las clases de tropa de tierra y mar.

2ª Para fijar la utilidad imposible de cada contribuyente se procederá con arreglo á las siguientes bases:

Primera. A los propietarios de fincas urbanas se les valuará como utilidad imposible de las rentas que por este concepto perciban, ó las que pudieran percibir atendidas la naturaleza y condiciones de las fincas si están ocupadas por ellos mismos ó por otros que no paguen renta.

Segunda. A los propietarios que labren fincas rústicas, ó en su caso a los colonos, arrendatarios ó aparceros, se les imputará una suma igual á vez y media el importe de la renta que produzca la finca, ó que pudiere producir según los tipos medios del pueblo si estuviera arrendada.

Tercera. Cuando los propietarios de las fincas, ya sean rústicas ó urbanas, no sean vecinos del distrito, se rebajará de la utilidad imponible un quinto de la suma á que según las bases anteriores debiera ascender.

Cuarta. A los que perciban sueldos, pensiones, censos ó intereses de cualquiera clase ó procedencia se les valuará como utilidad líquida el importe de estas sumas.

Quintas. A los comerciantes, industriales y demás comprendidos en las tarifas de la contribución industrial se les valuará la utilidad imposible en proporción á la cuota que por este concepto satisfagan al Estado, no bajando de cinco ni excediendo de veinte veces el importe de la misma cuota, con arreglo á las escalas que según la naturaleza de cada industria determine el Gobierno.

Sexta. Los jornaleros ó braceros, y en general todos los que vivan de un salario eventual, contribuirán en razón de la tercera parte de la suma que según costumbre de cada localidad pueda alcanzar por término medio su haber durante el año.

Sétima. Cuando no sea posible conocer la utilidad de algún vecino, se hará la evaluación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 y regla 3ª de éste, teniendo en cuenta los signos exteriores de la riqueza, tales como el valor de muebleje, alquiler de la casa, número de criados, y otros análogos.

Octava. De la utilidad valuada á cada vecino ó hacendado se deducirá en todo caso el importe de la contribución directa que pague al Estado.

3ª La determinación de utilidad imponible se verificará por los mismos contribuyentes reunidos en secciones en la forma que el capítulo III, título II de esta ley dispone.

Ley Municipal

Cada sección formará una relación que comprenda las utilidades de todos sus individuos, procurando especificar en lo posible su naturaleza y número de los objetos que se produzcan.

4ª Los individuos de cada sección designados por el sorteo, procediendo como síndicos, y reunidos con el Ayuntamiento, examinarán y comprobarán estas relaciones, resolviendo las reclamaciones á que dieren lugar y fijando la cantidad total imponible.

La Junta repartirá lo que á cada sección corresponda, bien sea por el tanto por ciento proporcional á la utilidad total valuada, ó por categorías fijas.

5ª Los índicos de cada sección verificarán el repartimiento a los individuos de las misma.

El Ayuntamiento resolverá las reclamaciones á que este repartimiento diere lugar.

6ª Todas las operaciones de evaluación y repartimiento serán publicadas en la forma ordinaria, y se comunicarán además en la Secretaría del Ayuntamiento á todo interesado que lo solicite.

7ª Contra las decisiones del Ayuntamiento y de la Junta de evaluación se establece el recurso de agravio para ante la Diputación provincial.

El recurso habrá de entablarse dentro de los quince días siguientes á la publicación y no obstará para el pago de la cuota repartida interin no recaiga resolución definitiva.

Tanto estas reclamaciones como las que se intenten por las operaciones se cada sección habrán de fundarse en hechos concretos, precisos y determinados, aduciendo las pruebas necesarias para su justificación.

8ª El repartimiento comprenderá un tanto de aumento, que no exceda del 6 por 100 de la cuota total, para gastos de distribución, cobranzas y partidas fallidas.

Quedan exentos del pago de este aumento los contribuyentes que satisfagan anticipadamente sus cuotas por trimestres, semestres ó anualidades en las Depositarias de las respectivas Municipalidades, y se les abonará en el segundo y tercer caso el tanto por ciento anual que se fije por razón del anticipo.

9ª Los propietarios y los colonos, arrendatarios, aparceros ó inquilinos arreglarán por medio d contratos particulares la proporción en que sobre cada uno ha de pesar la cuota repartida á éstos por razón de las fincas, y la forma y tiempo de indemnizarse entre sí de esta cuota.

A falta de contrato, pueden los inquilinos retener al hacer el pago de la renta el importe total, y los colonos, arrendatarios ó aparceros, los dos tercios de la cuota.

Art.139 Para el cumplimiento del párrafo cuarto del artículo 136 se observarán las reglas siguientes:

1ª El Ayuntamiento y asociados, reunidos en junta, determinarán las especies que han de ser objeto del impuesto de consumos, así como las tarifas por que se ha de regir su extracción, y la forma en que ésta haya de hacerse.

Las tarifas no excederán en ningún caso del 25 por 100 del precio medio del artículo en la localidad respectiva, según su clase.

2ª El acuerdo del Ayuntamiento y de los asociados será ejecutivo, sin perjuicio de los recursos á que según la presente ley hubiere lugar, y salva la inspección y atribuciones del gobernador, con arreglo al artículo 150.

3ª Los impuestos de consumo sólo serán autorizados sobre los frutos ó sobre las bebidas que se consuman en cada pueblo, quedando absolutamente prohibido sobre ellos y todos los demás cualquier otro impuesto que embarace el tráfico, circulación y venta, sean cuales fueren los nombres con que se intentara establecerlos, como derechos de piso ó transito, venta á alcabala, ú otro semejante.

4ª En los pueblos que tengan Aduanas establecidas los artículos extranjeros, una vez nacionalizados por el pago de los derechos arancelarios, pueden ser objeto del impuesto municipal de consumos

Ley Municipal

dentro de las prescripciones de esta ley, sobre el valor que tengan en la plaza, deducido el importe de aquellos derechos arancelarios.

Art.140 Se concede recurso de agravio á todos los interesados para ante la Diputación provincial cuando las cuotas señaladas á los arbitrios ó impuestos de toda clase no guarden relaciones con la importancia del servicio industria ú objeto á que se apliquen, ó con los demás establecidos en el pueblo.

Estos recursos, y cualquiera otros que puedan intentarse, serán formulados ante el alcalde respectivo, el cual, bajo su personal responsabilidad, queda obligado á remitir la instancia por conducto del gobernador de la provincia en término de ocho días, con los informes que crea necesarios (1).

Art.141 Terminado el año económico, quedan anulados los créditos abiertos y no invertidos durante su ejercicio.

Durante el periodo de ampliación se terminarán las operaciones de cobranza de los arbitrios presupuestos y la liquidación y pago de los servicios realizados durante el año.

Las resultas que quedaren después de este período serán objeto de un presupuesto adicional, previas las consiguientes liquidaciones, que se determinarán dentro del mes siguiente.

Art.142 Cuando para cubrir atenciones imprevistas, satisfacer alguna deuda ó para cualquier otro objeto de importancia no determinado en el presupuesto ordinario sean insuficientes los recursos consignados en éste, los Ayuntamientos formarán un presupuesto extraordinario en la misma forma y por el mismo procedimiento determinado para los ordinarios.

Art.143 Las deudas de los pueblos que no estuvieren aseguradas con prenda ó hipoteca no serán exigidas á los Ayuntamientos por los procedimientos de apremio.

Cuando algún pueblo fuese condenado al pago de una cantidad, el Ayuntamiento, en el término de diez días después de ejecutada la sentencia, procederá á formar un presupuesto extraordinario, á no ser que el acreedor convenga en aplazar el cobro de modo que puedan consignarse en los presupuestos ordinarios sucesivos las cantidades necesarias para el pago del capital y crédito estipulado.

Art.144 Si los recursos de que puede disponer el pueblo no fueren suficientes á cubrir sus deudas, ó no creyese el Ayuntamiento posible recargar las cuotas impuestas á los vecinos, y los acreedores no se conformaren con los medios que se ofrezcan para solventar sus deudas, se remitirá el expediente á la Diputación provincial á fin de que, oyendo á los interesados, se disponga lo conveniente para que tengan efecto los pagos, sin perjuicio de la competencia de los Tribunales y Juzgados ordinarios para resolver acerca de la legitimidad y prelación de los créditos.

Art.145 No pueden ser aplicados al pago y cumplimiento de servicios ú obligaciones permanentes los recursos procedentes de arbitrios de carácter eventual y transitorio.

Art.146 El proyecto de presupuesto, ya sea ordinario, adicional ó extraordinario, aprobado por el Ayuntamiento, previa censura del síndico, quedará expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por espacio de quince días desde la fecha en que se haga el anuncio en la forma ordinaria

Art.147 El Ayuntamiento formará el presupuesto, y lo aprobará la Junta municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 150.

(1) *La ley no fija plazo para la interpolación de estos recursos; pero suponemos que debe de ser el del artículo 138, ó sea el de quince días. Véase el artículo 22 de Real decreto de 15 de Noviembre de 1909.*

Ley Municipal

Art.148 La Junta municipal se reunirá, previa citación personal y anuncio, en los plazos y forma señalados en el artículo 68.

Art.149 Para formar acuerdo es necesario el voto de la mayoría absoluta del total de vocales que componen la Junta.

Si no se reúne este número en la primera, sesión, se procederá á nueva convocatoria para ocho días después, y en ella formará acuerdo la mayoría de los concurrentes.

En los pueblos menores de 800 habitantes formarán acuerdo el voto de la mitad más uno de los concurrentes, si éstos llegan á la cuarta parte por lo menos del número total de vecinos que tengan derecho á componer la Junta.

En caso de no reunirse este número, se procederá con arreglo á lo dispuesto en el párrafo anterior.

Art.150 El día 15 de Septiembre comunicarán los Ayuntamientos al gobernador el presupuesto aprobado, para el solo efecto de que corrija las extralimitaciones legales, si las hubiere.

De los acuerdos del gobernador en materia de presupuestos podrán alzarse las Juntas municipales en el término de ocho días ante el Gobierno de S.M., que resolverá en el de sesenta, oyendo al Consejo de Estado. Si llegase el 15 de Diciembre sin resolución del Gobierno, regirán los presupuestos aprobados por las Juntas.

Los acuerdos de la Junta son apelables, de igual modo, para ante el gobernador cuando por ellos se infringiere alguna de las disposiciones de esta ley, salvo lo en contrario ordenado por la misma, pero sólo en la parte que contuviere la infracción.

Todos los Ayuntamientos remitirán al gobierno de su S.M., por conducto de los gobernadores civiles, resúmenes de sus presupuestos de ingresos y gastos definitivamente aprobados (1).

Art.151 Son en todo caso ejecutivos, con aprobación de la Junta municipal, y sin perjuicio de los ulteriores recursos á que según esta ley hubiere lugar, los presupuestos formados para atender á las medidas sanitarias de absoluta urgencia en las calamidades públicas y obras de carácter perentorio cuando el importe no exceda de 2 pesetas 50 céntimos por vecino, ni la tercera parte del presupuesto ordinario.

Art.152 Para hacer efectiva la recaudación serán aplicables los medios d apremio en primeros y segundos contribuyentes dictados en favor del Estado.

Art.153 Las dudas y reclamaciones sobre recargos ó arbitrios municipales serán resueltas por el Ministerio de la Gobernación, oyendo al de Hacienda y al Consejo de Estado cuando lo estime oportuno.

CAPÍTULO II

De la recaudación, distribución y cuenta de los fondos municipales.

Art.154 La recaudación y administración de fondos municipales está á cargo de los respectivos Ayuntamientos, y se efectuará por sus agentes y delegados.

(1) Véase el artículo 23 del Real decreto de 15 Noviembre de 1909.

Ley Municipal

Art.155 La distribución é inversión de los fondos se acordará mensualmente por el Ayuntamiento con sujeción á los presupuestos (1).

Art.156 La ordenación de pagos corresponde al alcalde.

La intervención estará á cargo del contador, donde lo hubiere, y en su defecto se ejercerá por un regidor elegido por el Ayuntamiento.

En la poblaciones cuyo presupuesto de gasto no baje de 100.000 pesetas habrá un contador de fondos municipales, nombrado por el Ayuntamiento entre los que hubieren sido aprobados en oposición pública que tendrá lugar en Madrid.

Un reglamento determinará todo lo referente á clases y sueldos de estos funcionarios, así como á las bases del concurso, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los contadores actuales.

La separación de los contadores municipales nombrados con arreglo á lo que queda dispuesto corresponderá á los Ayuntamientos, pero no será acordada sino por causa grave y previo expediente. Los interesados podrán alzarse del acuerdo ante el gobernador, que resolverá oyendo á la Comisión provincial.

Art.157 Los Ayuntamientos nombran y separan libremente á los depositarios y agentes para la recaudación de todas las rentas y arbitrios del Municipio.

A las mismas Corporaciones corresponde también señalar la retribución que aquellos empleados hayan de disfrutar y las fianzas que deben prestar.

Si el pueblo no hubiese persona que quisiera encargarse de la custodia d fondos, el cargo de depositario será declarado concejal y obligatorio; pero no llevará aneja la prestación de fianza, y los gastos que originare serán de cuenta del Municipio.

Art.158 Los agentes de la recaudación municipal son responsables ante el Ayuntamiento, quedándolo éste en todo caso civilmente para el Municipio caso de negligencia ú omisión probada, sin perjuicio de los derechos que contra aquellos se puede ejercitar.

Art.159 Todos los fondos municipales ingresarán precisamente en la caja del Ayuntamiento, cuyas tres llaves custodiarán el depositario, el ordenador é interventor.

Art.160 El contador ó concejal interventor, auxiliados si fuere necesario por el secretario y demás dependientes del Ayuntamiento, formarán las cuentas de cada ejercicio en las épocas correspondientes, y con los documentos justificativos serán sometidas al Ayuntamiento, previa censura del síndico.

Art.161 Fijadas definitivamente las cuentas por el Ayuntamiento, serán pasadas con el dictamen del síndico y los documentos justificativos, para su revisión y censura, á la Junta municipal.

Esta, en el primer día útil del año económico, se reunirá en la casa del Ayuntamiento, bajo la presidencia del alcalde y asistiendo el secretario, y nombrar una Comisión de su seno para que, examinando las cuentas, emita su dictamen en término que no exceda de quince días.

Durante los quince días que procedan á la reunión estarán las cuentas de manifiesto en la Secretaría, y cualquier vecino puede examinarlas y formular por escrito sus observaciones, que serán comunicadas á la Junta.

Art.162 Las sesiones que la Junta dedique á la discusión del dictamen de la Comisión serán presididas por un vocal que la misma elija.

(1) *Los Ayuntamientos no pueden delegar la inversión ni distribución de fondos en ninguna otra entidad ni Corporación.*

CAPÍTULO II

De la recaudación, distribución y cuenta de los fondos municipales.

Art.154 La recaudación y administración de fondos municipales está á cargo de los respectivos Ayuntamientos, y se efectuará por sus agentes y delegados.

Art.163 Examinadas y discutidas las cuentas y practicadas cuantas diligencias é informaciones crea necesarias, la Junta se reunirá para acordar y votar por mayoría absoluta su dictamen definitivo.

Este dictamen irá suscritos por todos los concurrentes, sea cual fuere su opinión particular, que pueden, no obstante, salvar por medio de un voto escrito, el cual, original, quedará unido al expediente, haciéndose constar así en el acta (1).

Art.164 Las Juntas municipales se reunirán en la primera quincena de Febrero para revisar y censurar las cuentas del año económico anterior en forma determinada por los artículos que preceden.

Art.165 La aprobación de las mismas, cuando los gastos no excedan de 100.000 pesetas, corresponde al gobernador, oída la Comisión provincial; y si excediesen de esa suma, al Tribunal Mayor de Cuentas del Reino, previo informe del gobernador y de la Comisión provincial.

Art.166 Los Ayuntamientos publicarán al principio de cada trimestre un estado de la recaudación é inversión de sus fondos durante el anterior.

En las obras públicas que se hagan por administración se publicará semanalmente nota de gastos causados, especificando el por menor de los jornales, materiales, vendedores contratistas, sitio de la obra, y demás circunstancias análogas.

En la Secretaría estarán de manifiesto todo el año, en los días y horas útiles, á cualquier vecino, y con especialidad á los vocales asociados de la Junta municipal, las cuentas y documentos originales, de los cuales el Ayuntamiento permitirá sacar apuntes y copias.

Las cuentas cuya data exceda de 62.500 pesetas serán impresas en extracto, que comprenderá el dictamen de la Junta y las observaciones del Ayuntamiento, y se pondrán de venta al público.

Art.167 Los Ayuntamientos remitirán á los gobernadores una copia integra, certificada por el secretario, con el visto bueno del alcalde, de los presupuestos y cuentas definitivamente aprobadas, con las actas literales de la Junta municipal.

Art.168 Quedan suprimidas las Juntas especiales que estableció la ley de 29 de junio de 1864, referente al ensanche de las poblaciones.

La cuenta de ingresos y gastos del ensanche será separada de la general del Ayuntamiento, y continuará sujeta á la división por zonas, cuyo número podrá reducir el Gobierno.

TÍTULO V

Recursos y responsabilidades que nacen de los actos de los Ayuntamientos.

CAPÍTULO PRIMERO

Recursos contra los acuerdos de los Ayuntamientos.

(1) Como la ley no especifica lo que debe hacerse en el caso en que no se reúna mayoría absoluta, debe considerarse precepto general el del artículo 149.

Ley Municipal

Art.169 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 144, el alcalde está obligado á suspender, por sí y á instancia de cualquier residente del pueblo, la ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento en los casos siguientes:

1º Por recaer en asuntos que según esta ley ú otras especiales no son de la competencia del Ayuntamiento.

2º Por delincuencia. La suspensión en uno y otro caso será razonada, con expresión concreta y precisa de las disposiciones legales en que se funde.

En los caos de incompetencia, perjuicios de los intereses generales ó peligro de orden público podrá el alcalde suspender los acuerdos del Ayuntamiento, dando cuenta al gobernador, que aprobará ó desaprobará la suspensión, y propondrá la revocación al Gobierno cuando la crea justa, si no perteneciere á su autoridad (1).

Art.170 El alcalde suspenderá también la ejecución de los acuerdos á que se refiere el párrafo primero del artículo anterior cuando de ella hubiere de resultar perjuicio en los derechos civiles de un tercero.

La suspensión en este caso se acordará solamente cuando el interesado lo solicitare, reclamando al mismo tiempo contra el acuerdo (2).

Art.171 No podrá ser suspendida la ejecución de los acuerdos dictados en asuntos de la competencia del Ayuntamiento, aun cuando por ellos y en su forma se infrinjan algunas de las disposiciones de esta ley ú otros especiales, salvo lo dispuesto en el artículo 169.

En este caso no se concede recurso de alzada á cualquiera, sea ó no residente en el pueblo, que se crea perjudicado por la ejecución del acuerdo.

Los recursos de alzada que autoriza este artículo i procederán ante el gobernador, oída la Comisión provincial, debiendo ser interpuestos en el término de treinta días, contados desde la notificación administrativa, ó en su defecto desde la publicación del acuerdo.

Este recurso será entablado con arreglo á lo que dispone el artículo 140.

Art.172 Los que crean perjudicados en sus derechos civiles por los acuerdos de los Ayuntamientos, haya sido ó no suspendida su ejecución en virtud de lo dispuesto en los artículos anteriores, pueden reclamar contra ellos mediante demanda ante el juez ó Tribunal competente, según lo que, atendida la naturaleza del asunto, dispongan las leyes.

El juez ó Tribunal que entienda en el asunto puede suspender por primera providencia, á petición del interesado, la ejecución del acuerdo apelado, si ya no la hubiere sido, según lo dispuesto en el artículo 170, cuando, á su juicio, proceda y convenga, á fin de evitar un perjuicio grave é irreparable.

Para interponer esta demanda se concede un plazo de treinta días después de notificado el acuerdo ó comunicada la suspensión, en su caso; pasado el cual sin haberlo verificado, queda esta suspensión levantada de derecho y consentido el acuerdo.

Art.173 Suspendido ó apelado algún acuerdo en virtud d lo dispuesto en los artículos 169, 170 y 171, remitirá el alcalde los antecedentes al gobernador de la provincia en el término de ocho días, para los fines a que haya lugar.

Si la suspensión hubiese tenido efecto mediante el caso de delincuencia, pasará los antecedentes, dentro del mismo plazo de ocho días, al juez ó Tribunal.

(1) Véase el artículo 24 de Real decreto de 15 de Noviembre de 1909

(2)Véase el artículo 12 del Real decreto citado en el artículo anterior

Ley Municipal

Art.174 Cuando el acuerdo se refiera á asuntos que por esta ley, la Provincial ú otras especiales no estén sometidos á las Corporaciones ó autoridades locales, el gobernador, oída la Comisión provincial, dejando subsistente la suspensión de acuerdo, remitirá el expediente al Gobierno para su ulterior resolución. Si el acuerdo hubiese sido apelando en virtud de lo dispuesto en el artículo 171, el gobernador, oyendo a la Comisión provincial, resolverá sobre el fondo del mismo, confirmándole si á ello hubiese lugar, ó revocándole en la parte que excediese de las atribuciones del Ayuntamiento.

La resolución en todo caso será fundada, con expresión de la disposiciones legales á ella referentes (1).

Art.175 Los acuerdos así aprobados por el gobernador son ejecutivos, sin perjuicio de los recursos que procedan y de la responsabilidad á que por ellos hubiere lugar.

Art.176 Cuando el Gobierno crea que la suspensión no procede, la levantará inmediatamente y sin otro procedimiento, revocando el acuerdo del gobernador.

En todo caso pasará el expediente al Consejo de Estado, oído cuyo parecer resolverá lo que proceda. También resuelve por sí y bajo su responsabilidad cuando la urgencia del asunto no consintiere mayores dilaciones.

La resolución será siempre motivada, y se publicará en la Gaceta y en el Boletín Oficial de la provincia.

Si el Gobierno disintiere del parecer del Consejo de Estado, se publicará el dictamen de este Cuerpo al mismo tiempo y en la misma forma que la resolución del Gobierno.

Art.177 Contra la resolución del Gobierno procede el recurso contencioso administrativo en la forma que las leyes determinen.

Art.178 Los gobernadores, los alcaldes y los vocales de los Ayuntamientos son personalmente responsables de los daños y perjuicios indebidamente originados por la ejecución ó suspensión de los acuerdos de las Corporaciones municipales.

Esta responsabilidad será siempre declarada por la autoridad ó Tribunal que en último grado haya resuelto el expediente, y se hará efectiva por los Tribunales ordinarios en la forma que las leyes determinen.

CAPÍTULO II

Dependencia y responsabilidad de los concejales y de sus agentes

Art.179 Los Ayuntamientos, los alcaldes y los regidores, en todos los asuntos que la ley no les comete exclusiva é independientemente, están bajo la autoridad y dirección administrativa del gobernador de la provincia.

El ministro de la Gobernación es el jefe superior de los Ayuntamientos y el único autorizado para transmitirles las disposiciones que deban ejecutar en cuanto no se refiera á las atribuciones exclusivas de estas Corporaciones.

Art.180 Los Ayuntamientos y concejales incurren en responsabilidad:

1º Por infracción manifiesta de la ley en sus actos ó acuerdos, bien sea atribuyéndose facultades que no les competen, ó abusando de las propias.

(1) Véase el artículo 12 del Real decreto de 15 de Noviembre de 1909.

Ley Municipal

2º Por desobediencia ó desacato á sus superiores jerárquicos.

3º Por negligencia ú omisión de que pueda resultar perjuicio á los intereses ó servicios que están bajo su custodia (1).

Art.181 La responsabilidad será exigible á los concejales ante la Administración ó ante los Tribunales, según la naturaleza de la acción ú omisión que la motive y sólo será extensiva á los vocales que hubieren tomado parte de ella.

Art.182 Cuando el alcalde, los tenientes ó los concejales de un Ayuntamiento se hicieren culpables de hechos ú omisiones punibles administrativamente, incurrirán, según los casos, en las penas de amonestación, apercibimiento, multa ó suspensión.

Art.183 Procede la amonestación en los casos de error, omisión ó negligencia leves, no mediando reincidencia y siendo de fácil reparación el daño causado.

Procede el apercibimiento en los casos de reincidencia en falta reprendida, y en los de extralimitación de poder y abuso de facultades y negligencia cuyas consecuencias no sean irreparables ó graves.

Procede la multa siempre que las leyes y disposiciones generales, con arreglo á las mismas, lo determinen, y en los casos de reincidencia en faltas castigadas con apercibimiento, y de extralimitación, abuso de autoridad, negligencia ó desobediencia graves que no exijan la suspensión ni produzca responsabilidad criminal.

Art.184 El máximo de la cuota de multas que los gobernadores pueden imponer á los alcaldes y regidores por faltas en que respectivamente incurrieren, y según lo prescrito en la presente ley, será proporcional al número de concejales de cada pueblo, en la forma siguiente:

Número de concejales	Alcaldes	Regidores
6 á 9	17,50 ptas.	7,50 ptas.
10 á 16	37,50	20
17 á 24	125	50
25 á 32	175	75
33 á 40	250	100
41 á 50	375	125 (2)

Art.185 Para la imposición y exacción de multas se observarán precisamente las reglas siguientes:

1ª No se impondrá ninguna sin resolución por escrito y motivada.

2ª La providencia se comunicará por escrito al multado; del pago se le expedirá el competente recibo.

3ª Las multas y los apremios se cobrarán en papel del sello correspondiente.

4ª Las multas serán precisamente pagadas del peculio particular de los multados.

5ª Las multas serán extensivas á todos los concejales que según esta ley sean responsables por acto ó acuerdo que les motive.

(1) Véase el artículo 25 del Real decreto de 15 de Noviembre de 1909.

(2) Véase el artículo 19 de Real decreto de 15 de Noviembre de 1909.

Ley Municipal

Art.186 Para el pago de toda multa se concederá un plazo proporcionado á la cuantía de la multa, y que no baje de diez días ni exceda de veinte, pasado el cual procede el apremio contra los morosos. El apremio no será mayor del 5 por 100 diario de la multa, sin que exceda en ningún caso del duplo de la misma.

Art.187 Contra la imposición gubernativa de la multa puede el interesado reclamar, por la vía administrativa ó por la judicial.

La primera procede para ante el Gobierno, que la resolverá por sí, ó con audiencia del Consejo de Estado, y sin perjuicio, en todo caso, de la reclamación contenciosa ante el Consejo de Estado.

La judicial procede ante la Audiencia en primera instancia, previa reclamación gubernativa á la autoridad que impuso la multa.

En el caso de ser ésta declarada improcedente, serán impuestas las costas y daños causados por su exacción á la autoridad que la ordenó, sin que sirva de excusa la obediencia en los casos de infracción clara y terminante de una ley.

Art.188 En ningún caso se expedirán comisionados de ejecución contra Ayuntamientos y concejales.

Cuando ocurra el caso previsto en el artículo anterior y los multados dejasen de satisfacer la multa no obstante el apremio, el gobernador oficiará al juez de primera instancia del partido expresado la causa que ha motivado la imposición de la multa y la cuantía y liquidación de ésta, y requiriendo su autoridad para hacerla efectiva.

El juez procederá á la exacción por los tramites de la vía de apremio.

Art.189 Los gobernadores civiles de las provincias podrán suspender á los alcaldes y tenientes por causa grave, dando cuenta al Gobierno en el término de ocho días. El ministro de la Gobernación, en el de sesenta, ó alzará la suspensión, ó instruirá, oyendo al interesado, expediente de separación que será resuelto en el Consejo de ministros.

Los Ayuntamientos pueden ser suspendidos por el gobernador de la provincia cuando cometiese extralimitación grave con carácter político, acompañada de cualquiera de las circunstancias siguientes:

1ª Haber dado publicidad al acto.

2ª Excitar á otros Ayuntamientos á cometerla.

3ª Producir alteración en el orden público.

También tendrá efecto la suspensión cuando los concejales incurrieren en desobediencia grave, insistiendo en ella después de haber sido apercibidos y multados.

Art.190 La suspensión gubernativa de los regidores no excederá de cincuenta días.

Pasando este plazo sin que hubiesen mandado proceder á la formación de causa, volverán los suspensos de hecho y de derecho al ejercicio de sus funciones.

Los que les hubiesen reemplazado serán considerados como culpables de usurpación de atribuciones si ocho días después de expirado aquel plazo y de requeridos para cesar por los concejales propietarios continuaran desempeñando funciones municipales (1).

Art.191 Sí el Gobierno entiende que la suspensión de los regidores no es procedente, revocará por sí, y dentro de quince días, el acuerdo del gobernador, en caso contrario, pasará el expediente al Consejo de Estado, oído el cual, y en el plazo que no exceda de cuarenta días, dictará la resolución definitiva.

(1) Con la palabra propietarios se refiere la ley á los concejales repuestos.

Ley Municipal

Declarada improcedente la suspensión, serán los regidores inmediatamente repuestos de sus cargos. Sí hubiese lugar á destitución, el Gobierno mandará pasar los antecedentes al Juzgado ó Tribunal competente.

Este, previas las actuaciones en derecho necesarias, decretará la destitución, sin perjuicio de las demás penas á que hubiere lugar cuando apareciese que los regidores se han hecho culpables de algunas de las infracciones determinadas en el artículo 189.

En uno y otro caso el decreto del Gobierno será publicado en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia, con inserción de los dictámenes del Consejo de Estado.

Una vez publicado el decreto mandando pasar los antecedentes á los Tribunales de justicia los regidores suspensos no volverán al ejercicio de sus cargos en tanto no recaiga sentencia absolutoria definitiva y ejecutoriada.

Art.192 Los regidores no pueden ser destituidos sino en virtud de sentencia ejecutoriada del juez ó Tribunal competente.

Lo será el que ejerza la jurisdicción ordinaria de primera instancia en el partido á que corresponda el distrito municipal de que aquellos formen parte.

Decretará el juez la suspensión de los concejales procesados cuando apareciesen motivos racionales para creer que han cometido delito que el Código penal castigue con suspensión de cargos ó derechos políticos, y lo pondrá en conocimiento del gobernador de la provincia.

Art.193 Las vacantes ocurridas en un Ayuntamiento por suspensión legal de sus vocales serán cubiertas en la forma que dispone el artículo 46.

Art.194 Los Alcaldes y regidores que por sentencia ejecutoria fueren absueltos volverán á ocupar sus cargos si durante el procedimiento no les hubiese correspondido cesar, mediante lo dispuesto en el artículo 45, teniendo efecto respecto á ellos lo dispuesto en el artículo 190.

Art.195 Los regidores destituidos estarán inhabilitados para ejercer este cargo durante seis años á lo menos.

Art.196 Los alcaldes de barrio están relativamente á los alcaldes y Ayuntamientos en la misma dependencia jerárquica que los alcaldes y tenientes respecto á los gobernadores.

Les son, por tanto, aplicables las disposiciones del presente título en cuanto á responsabilidad, salvas las modificaciones siguientes:

1ª El máximo de las multas que se les impongan será el menor de las fijadas para los concejales.

2ª Para la suspensión y separación basta la orden del alcalde.

La suspensión no excederá del plazo de dos sesiones ordinarias del Ayuntamiento.

3ª La absolución no les da derecho, pero sí los habilita para ser repuestos en su cargo.

Art.197 Todos los agentes del ayuntamiento por él nombrados y pagados están sujetos á su obediencia, y son responsables gubernativamente ante el mismo con sujeción á esta ley, y jurisdiccionalmente ante los Tribunales por los delitos y falsedades que cometieren.

Art.198 Además de los recursos administrativos establecidos por la presente ley, cualquier vecino ó hacendado del pueblo tiene acción ante los Tribunales de justicia para denunciar y perseguir criminalmente á los alcaldes, concejales y asociados, siempre que éstos en los establecimientos, distribución y recaudación de los arbitrios ó impuestos se hayan hecho culpables de fraude ó de exacciones ilegales, y muy especialmente en los casos siguientes:

1º Si cualquiera de los concejales y asociados, en el año que lo son, pagan cuota menor por repartimiento, impuesto ó licencia comparada con el año anterior al desempeño de su cargo, siendo igual ó superior la cantidad total repartible, á menos de probar que han sufrido en su riqueza disminución bastante á justificar aquella baja.

2º Cuando el producto total de los repartimientos y arbitrios distribuidos excediese de la cantidad presupuesta y 6 por 100 de recargo autorizado por la regla 8ª artículo 138 de esta ley.

Ley Municipal

3° Cuando establecieren y recaudaren cualesquiera clase de impuestos no comprendidos en la presente ley.

Los Tribunales de justicia, una vez probado el hecho, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Código penal, harán las declaraciones siguientes:

Primer caso. Imposición de doble cuota á los culpables.

Segundo á tercer caso. Anulación del repartimiento en lo que exceda á la cantidad autorizada y devolución de las recaudadas, con multa igual al sobrante, mancomunadamente impuesta á los concejales y asociados culpables.

Cuarto caso. Anulación del arbitrio impuesto y devolución de las cantidades recaudadas, con multa igual á su importe, exigida en la forma expresada en el caso anterior.

TÍTULO VI

Gobierno político de los distritos municipales.

CAPÍTULO ÚNICO

Art.199 El alcalde es el representante del Gobierno, y en el concepto desempeñará todas las atribuciones que las leyes le encomienden, obrando bajo la dirección del gobernador de la provincia conforme aquellos determinen, así en lo que se refiere á la publicación y ejecución de las leyes y disposiciones generales del Gobierno, ó del gobernador y Diputación provincial, como en lo tocante al orden público y á las demás funciones que en tal concepto se le confieran

Sí el alcalde, requerido por el gobernador, se negase á cumplir alguna de las obligaciones á que el presente artículo se refiere ú omitiese hacerlo en el plazo bastante, el gobernador puede cometer su ejecución al juez municipal del pueblo ó á cualquiera de sus suplentes.

Esta delegación se limitará al tiempo y á los casos absolutamente precisos, y no envuelve facultad alguna para intervenir en ninguno de los actos del Ayuntamiento.

Art.200 En todo lo relativo al gobierno político del distrito municipal la autoridad, deberes y responsabilidad del alcalde son independientes del Ayuntamiento respectivo.

Art.201 Los tenientes de alcalde en sus secciones respectivas obran siempre por delegaciones y bajo la dirección del alcalde, como representantes del Gobierno, en los mismos términos que aquél lo es en el distrito municipal.

Art.202 Los alcaldes de barrio en los suyos respectivos ejercerán las funciones de gobierno político que con arreglo á las leyes les delegasen los tenientes de alcalde, conformándose con las disposiciones del alcalde y del gobernador de la provincia.

Art.203 Por las faltas que en el desempeño de sus funciones gubernativas en lo político cometieren los alcaldes y tenientes podrán ser amonestados, apercibidos y multados: Los alcaldes, por el gobernador de la provincia; los tenientes, por el primero y el gobernador, igualmente, en los términos que se previene en los artículos 183,184,185,186 y 187 de esta ley (1).

(1)Aun cuando la ley no lo dice, es indudable que los alcaldes de barrio también pueden ser corregidos por sus superiores jerárquicos

Ley Municipal

DISPOSICIONES ADICIONALES.

1ª Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones anteriores relativas al régimen municipal.

2ª El Gobierno dictará, con arreglo á esta ley, los reglamentos necesarios para su ejecución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1ª El Gobierno de S.M. procederá, tan pronto como sea posible, á la renovación total de los Ayuntamientos con sujeción á esta ley y á la Electoral, dictando además las disposiciones y reglamentos además que juzgue necesarios.

Podrá el Gobierno anticipar y variar por esta sola vez los días y plazos señalados por la ley á las operaciones electorales y modificar la división de colegios para las elecciones de Ayuntamientos en cuanto lo exija la aplicación de lo dispuesto en el artículo 42, referente al numero de concejales que puede votar cada elector.

2ª Se aplicará esta ley á la provincia de Puerto Rico, con arreglo á las disposiciones contenidas en el artículo 89 de la Constitución de la Monarquía.

Madrid, 2 de Octubre de 1877.-El ministro de la Gobernación, Francisco Romero Robledo.

Para entender mejor la ley y su disposición en el escrito.

<i>Título I</i>	<i>Capítulo primero</i>	<i>Art.1 á Art.10</i>
	<i>Capítulo segundo</i>	<i>Art. 11 á Art.16</i>
	<i>Capítulo tercero</i>	<i>Art.17 á Art.23</i>
	<i>Capítulo cuarta</i>	<i>Art.24 á Art.28</i>
<i>Título II</i>	<i>Capítulo primero</i>	<i>Art.29 á Art.33</i>
	<i>Capítulo segundo</i>	<i>Art.34 á Art.63</i>
	<i>Capítulo tercero</i>	<i>Art.64 á Art.70</i>
<i>Título III</i>	<i>Capítulo primero</i>	<i>Art.71 á Art.89</i>
	<i>Capítulo segundo</i>	<i>Art.90 á Art.96</i>
	<i>Capítulo tercero</i>	<i>Art.97 á Art.111</i>
	<i>Capítulo cuarto</i>	<i>Art.112 á Art.121</i>
	<i>Capítulo cinco</i>	<i>Art.122 á Art.131</i>
<i>Título IV</i>	<i>Capítulo primero</i>	<i>Art.132 á Art.153</i>
	<i>Capítulo segundo</i>	<i>Art.154 á Art.168</i>
<i>Título V</i>	<i>Capítulo primero</i>	<i>Art.169 á Art.178</i>
	<i>Capítulo segundo</i>	<i>Art.179 á Art.198</i>
<i>Título VI</i>	<i>Capítulo único</i>	<i>Art.199 á Art.203</i>

Las paginas en el libro original comprende de la 7 a la 129 ambas inclusivas.

REAL DECRETO DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1909

Sobre descentralización administrativa
“Gaceta del 16; rectificado el 17.

Deroga todas las disposiciones de carácter administrativo encaminadas á interpretar los preceptos de la ley Municipal vigente, para cuyo cumplimiento se tendrán sólo presentes el texto de sus artículos y las reglas que para su ejecución contiene este Real decreto.

EXPOSICIÓN

Señor: La evidente necesidad de fortificar la vida local y de buscar en las entrañas mismas de la sociedad gérmenes de la fuerza y de poder que levantando el nivel general del país den nueva savia á la Nación y al Estado, viene desde hace tiempo sugiriendo á cuantos hombres han ocupado el Poder público la conveniencia de descentralizar los organismos locales, á fin de que la iniciativa individual, acomodándose á las condiciones especiales de las diferentes regiones del territorio, produzca aquellos vivificadores efectos sin los cuales la vida pública languidece y la acción directiva del Estado se mengua y esteriliza falta de contenido.

Por eso desde 1883 se han ido repitiendo los esfuerzos para llevar á la práctica estas nobles aspiraciones, que fueron allá en el fondo de nuestra historia la base más segura del poder nacional. Porque fueron grandes nuestros Municipios lo fue también nuestra historia, porque ellos tuvieron vida propia se formaron aquellas grandes fuerzas sociales y se templaron aquellos vigorosos caracteres que, aun después de muertas las franquicias municipales, engendraron la epopeya del siglo XVI.

Pero por una parte la inestabilidad de los Gobiernos, por otra la corta duración de los Parlamentos y siempre las preocupaciones con que las guerras coloniales absorbieron la atención del país, hicieron que aquellos propósitos no llegaran nunca á realización, por lo cual el escepticismo en la acción del Gobierno y la desconfianza en la sinceridad de los políticos han ido retrayendo de las corporaciones municipales de España á las gentes más capacitadas. Pero la necesidad subsiste cada vez más apremiante, y la frialdad se aumenta con la inutilidad de las tentativas de modo que las promesas que se hicieran no serían creídas, y la presentación de los proyectos no bastarían á remediar el daño. Pudo creerse un momento que el de reforma de la Administración local, con tanta extensión discutido y con tanto estudio preparado, vendría al fin á satisfacer la general expectación; pero la dificultad parlamentaria engendada por haber extendido á la organización provincial, dentro de la cual surgen cuestiones aún no estudiadas en España, hizo que el proyecto referente á la vida municipal, al cual tanta devoción y estudio aplicó el Parlamento, quedase en tal estado.

Se hace por ello más interesante aprovechar el resultado de los debates y recoger las enseñanzas en ellos prodigadas, de modo que al menos en esta parte, el interés público se vea atendido, y el esfuerzo del Parlamento se traduzca en algún hecho práctico.

Al efecto el ministro que suscribe, convencido cada vez más íntimamente de los beneficios que la descentralización administrativa puede reportar y de los resultados bienhechores que las iniciativas locales están llamadas á ejercer en la vida nacional, han buscado y creído encontrar un medio práctico é inmediato de satisfacer en parte los anhelos del país y atender los propósitos del Parlamento restableciendo la integridad de la ley Municipal de 1877, que, inspirada en los proyectos que la precedieron, y representando en cierto modo las síntesis de las aspiraciones de los partidos,

Ley Municipal

contiene principios vigorosos de libertad y de respeto á las iniciativas locales, que hubieran sido completamente fecundos á no haberse atrofiado y desvirtuado por una serie de disposiciones administrativas que, encaminadas á fines políticos de los Gobiernos á la sazón encargados de los destinos públicos, han venido á secar en su origen el manantial abundante y rico de la vida local.

Esta idea apareció en la discusión antes referida, y en más de una ocasión se formuló como transacción entre aspiraciones distintas y como medio práctico de conseguir desde luego los resultados que se perseguían.

Por otra parte, la labor del Parlamento en los dos últimos años no puede ser desconocida ni quedar postergada: si así fuera, el escepticismo que ya corroe nuestra sociedad política pudiera hacerse endémico, y el remedio que nuevas legislaciones ofrecieran vendría á estrellarse contra el escaso vigor que va quedando en las clases populares, que, olvidadas en el fondo de nuestras provincias, se sienten condenadas á la impotencia ó entregadas al caciquismo.

Un esfuerzo sincero aplicado al restablecimiento de esta ley, y una conducta del Gobierno consagrada en un todo á la aplicación de los principios que la informan, puede ser, si con perseverancia se mantiene, remedio, no sólo eficaz, sino inmediato, que es hoy lo más importante, del estado social y político en que se encuentra la vida municipal.

A este fin se encamina las disposiciones del adjunto, disposiciones en su conjunto sencillas y puestas en su redacción al alcance de todo el mundo, y cuyo único propósito es el desenvolvimiento del cuerpo de doctrina de la ley de 1877, que sólo necesita atmósfera espacio y tiempo para lograrlo, libre de la asfixia que le produce la presión del Poder central, más atento, por desgracia, á las exigencias del momento que á las grandes aspiraciones de la vida nacional.

Pero todos estos propósitos serían inútiles y vendrían á estrellarse contra las prácticas viciosas de nuestra Administración, sí el Gobierno no diera el ejemplo del más escrupuloso respeto á las facultades que en la ley se reconocen á los municipios y Ayuntamientos.

A este fin se encamina el artículo 27 del proyecto, en el cual se establece la limitación consiguiente á las facultades que al arbitrio ministerial concede el artículo 19 de la ley Provincial.

Por último, como la condición geográfica del territorio nacional produce sensibles é inevitables diferencias entre sus distintas regiones, entiende el ministro que suscribe que, además de las excepciones que las leyes establecen respecto á las Provincias Vascongadas y Navarra el artículo 28 prescribe á los gobernadores de las provincias Baleares y Canarias la Obligación de visitar anualmente todas y cada una d las islas que forman el territorio confiado a su jurisdicción, disponiendo para la última de ellas una residencia alternativa y con igual proporción d tiempo dentro del año en los dos grandes centros de población del archipiélago, con el doble objeto de ajustarse al espíritu de la disposiciones votadas por el Congreso de los diputados al examinar el proyecto de reforma de la administración local y el de conservar integra la unidad provincial de aquel territorio.

Fundado en estas consideraciones, el ministro que suscribe, de acuerdo con sus compañeros, tiene el honor de someter á la aprobación de V.M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid, 15 de Noviembre de 1909.-Señor: A.L.R.P. de V.M. Segismundo Moret y Prendergast

REAL DECRETO (1)

De acuerdo con mi Consejo de ministros, y á propuesta del presidente del mismo, ministro de Gobernación:

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1º. A fin que la ley Municipal vigente sea cumplida y observada en toda la pureza de sus principios, y especialmente en cuanto afecta la competencia propia de los Ayuntamientos y á las facultades en ellos definidas para las Corporaciones municipales, quedan derogadas todas las disposiciones de carácter administrativo encaminadas á interpretar los preceptos de dicha ley, para cuyo cumplimiento se tendrán tan sólo presentes el texto de sus artículos y las reglas que para su ejecución contiene este Real decreto.

Cuando las derogaciones de la ley Municipal vigente hayan sido hechas por leyes especiales, ó bien existieran contratos legalmente sancionados, el Gobierno, oyendo al Consejo de Estado, resolverá en cada caso lo más procedente.

Artículo 2º. En consecuencia del artículo anterior, lo prevenido en el 7º de dicha ley Municipal vigente ó sea, cuando se refiere á la formación de los expedientes sobre creación, segregación y supresión de Municipios y términos municipales, será la exclusiva competencia de los Ayuntamientos, y la resolución de las Diputaciones provinciales.

Los acuerdos de las Diputaciones serán ejecutivos cuando fueren adoptados de conformidad con los interesados.

En caso de disidencia, la aprobación será objeto de una ley.

Las facultades que dicho artículo 7º reconoce á las Diputaciones provinciales no pueden entenderse nunca transferidas á las Comisiones provinciales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, siempre que se trate de la segregación de términos municipales de una á otra provincia se procederá con arreglo á lo dispuesto en el artículo 3º de la ley Provincial.

Artículo 3º. En armonía con lo prevenido en el artículo 21 de la ley Municipal, los acuerdos que adopten las Diputaciones provinciales al resolver los recursos que se establecen ante las mismas sobre reclamaciones referentes al empadronamiento pondrán término á la vía gubernativa, no procediendo, por tanto, recurso de alzada ante este Ministerio.

Artículo 4º. Cuando los gobernadores hayan de nombrar concejales interinos, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 46 de la ley Municipal vigente, será condición imprescindible que señalen en cada nombramiento el concejal á quien haya de sustituir el interino.

Artículo 5º. En armonía con lo prevenido en los artículos 45, 47 y 48 de la ley Municipal, los acuerdos que adopten los Ayuntamientos respecto á declaración de vacantes se estimarán de la sola y exclusiva competencia municipal.

En su virtud quedará terminada la vía gubernativa con las providencias que dicten los gobernadores, los cuales se limitarán á corregir infracciones de la ley cuando las hubiere.

(1) Véase el Real decreto d 7 d Julio de 1911, que se inserta á continuación, por el que se modifican las disposiciones del que se anota referentes á la tramitación de los recursos contencioso-administrativos y se restablece el estado de derecho anterior.

Ley Municipal

La providencia gubernativa no afectará nunca al fondo del asunto, limitándose á señalar á los Ayuntamientos el precepto de la ley infringido, á fin de que acuerden de nuevo, dentro de sus facultades, lo que estimaren procedente.

Las providencias gubernativas serán siempre motivadas, y su texto deberá publicarse integro inmediatamente en el Boletín Oficial de la provincia.

Contra la providencia del gobernador sólo procederá el recurso contencioso ó la reclamación judicial, según los casos.

Artículo 6º. Mientras otra disposición legal no se dictare, se consideran vigentes las contenidas en el Real decreto de 24 de Marzo de 1891, dictado para suplir las deficiencias de la ley vigente acerca del procedimiento á que habrán de sujetarse las reclamaciones que se establecen sobre elecciones municipales, sorteo de concejales, incapacidad de los proclamados y alegaciones excusas por motivos anteriores á la elección (1).

Se entenderá, sin embargo, modificado el último apartado del artículo 9º de dicho Real decreto en el sentido de que será obligatorio para el ministro de la Gobernación resolver en el plazo de sesenta días todas las reclamaciones que se hubieren presentado á fin de que en ningún caso el solo lapso del tiempo deje firme el acuerdo apelado.

Las excusas que los concejales aleguen por causas sobrevenidas con posterioridad á la toma de posesión se suscitarán y resolverán por el Ayuntamiento. Estas resoluciones habrán de adoptarse en el plazo máximo de treinta días. Contra ellas cabrá el recurso de alzada ante la Comisión provincial, cuyo recurso deberá interponerse en los diez días siguientes al acuerdo. Las comisiones provinciales dictarán su resolución en el término de treinta días, y aquélla pondrá término á la vía gubernativa. Los interesados podrán hacer uso en caso del recurso contencioso ante el Tribunal provincial.

Artículo 7º. Los acuerdos referentes á la constitución d los Ayuntamientos serán de igual modo susceptibles de recurso ante los gobernadores al solo efecto de corregir las infracciones de la ley que se hubieren cometido; pero manteniéndose la competencia municipal en su integridad en lo que se refiere al fondo de los acuerdos recorridos. Contra las providencias de los gobernadores sólo procederá, como queda señalado en el artículo 5º, recurso contencioso ante el Tribunal ó la reclamación judicial, según los casos (2).

Artículo 8º. El nombramiento y separación de los alcaldes de barrio serán de competencia exclusiva de los alcaldes presidentes, conforme á lo dispuesto en el artículo 58 de la ley, sin que contra dicho nombramiento proceda recurso alguno ante el Ministerio de la Gobernación.

Artículo 9º. Es igualmente incompetente el Ministerio de la Gobernación para conocer de los recursos contra los nombramientos de vocales asociados y la designación de los mismos en sus respectivas secciones, á que se refieren los artículos 68, 69 y 70 de la ley.

Los acuerdos de las Diputaciones provinciales resolviendo las reclamaciones á que se contrae el artículo 67 de la citada ley pondrán término á la vía gubernativa.

Artículo 10º. De acuerdo con lo afirmado en el artículo 1º de este decreto, no procederá nunca recurso de alzada ante el Ministerio de la Gobernación contra las providencias que dicten los gobernadores, ni aun á título de corregir supuestas infracciones legales, en todos aquellos asuntos que por la ley Municipal vigente están declarados de la sola y exclusiva competencia de los Ayuntamientos, y muy especialmente en los que se expresan á continuación:

(1) Véase en las disposiciones complementarias.

(2) Los acuerdos referentes á la constitución de los Ayuntamientos no son susceptibles de impugnación en vía contenciosa, pues si bien es cierto que lo autoriza el artículo que anotamos, el artículo 1º de la ley que regula la jurisdicción contenciosa no los comprende. (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala tercera, de 22 de Diciembre de 1911).

Ley Municipal

Primero. Establecimiento y creación de servicios municipales referentes al arreglo y ornato de la vía pública, comodidad é higiene del vecindario, fomento de sus intereses materiales y morales y seguridad d las persona y propiedades, á saber:

1° Apertura y alineación de calles y plaza y de toda clase de vías de comunicación.

2° Empedrado, alumbrado y alcantarillado.

3° Surtido de aguas.

4° Paseos y arbolados.

5° Establecimientos balnearios, lavaderos, casas de mercado y mataderos.

6° Ferias y mercados.

7° Instituciones de instrucción y servicios sanitarios.

8° Edificios municipales, y en general todo género de obras públicas necesarias para el cumplimiento de los servicios, con sujeción á la legislación especial de Obras públicas.

9° Vigilancia y guardería.

Segundo. Policía urbana y rural, ó sea cuando tenga relación con el buen orden y vigilancia de los servicios municipales establecidos, cuidado de la vía pública en general, y limpieza, higiene y salubridad del pueblo.

Tercero. Administración municipal, que comprende el aprovechamiento, cuidado y conservación de todas las fincas, bienes y derechos pertenecientes al Municipio y establecimiento que de él dependan, y la determinación, repartimiento, recaudación, inversión y cuenta de todos los arbitrios é impuestos necesarios para la realización e los servicios municipales.

Es obligación de los Ayuntamientos la composición y conservación de los caminos vecinales, teniéndose para ello en cuenta los conciertos hechos por las Diputaciones provinciales con el Ministerio de Fomento en lo que se refiere á la construcción, conservación ó reparación d dichos caminos.

En cuanto á los caminos rurales, los Ayuntamientos obligarán á los interesados en el mismos á su reparación y conservación.

Para lograr tan útiles objetos, acordarán los medios en junta de asociados para los vecinales, y en junta de interesados para los rurales.

Los gobernadores velarán por el cumplimiento de esta parte tan interesante de la Administración, en virtud de las facultades que les confiere la ley Provincial.

Artículo 11°. *Deben entenderse asimismo como de la sola y exclusiva competencia de loa Ayuntamientos las siguientes materias:*

Servidumbres públicas, como caminos, veredas, abrevaderos, riegos, setos vivos para el fomento del arbolado, y cuantas de materia análoga existan ó se creen dentro del término municipal.

Deslindes de fincas entre el Ayuntamiento y particulares.

Aprovechamientos comunales.

Mancomunidad entre Ayuntamientos.

Administración, custodia y conservación de todas las fincas, bienes y derechos de los pueblos, é instituciones de beneficencia.

Artículo 12°. Contra los acuerdos de los Ayuntamientos en los asuntos señalados en los dos artículos anteriores sólo procederá el recurso que otorga el 171 de la ley Municipal, tramitándose el expediente con arreglo á lo dispuesto en el 174 y sin perjuicio de lo que preceptúa el 175.

Las providencias que dictaren los gobernadores en tales expedientes causarán estado, y sólo podrán ser reclamadas en la vía contenciosa, aun cuando se alegue la existencia de vicios ó defectos en el procedimiento, ya sean esenciales, ya no lo sean, y produzcan ó no la nulidad de lo actuado.

Ley Municipal

Cuando alguno de dichos asuntos se refiera á urbanización, apertura de vías, alcantarillado, conducción de aguas, paseos y edificios ó materia análoga que afectare á un plan general ó parcial de reforma interior de poblaciones, si estas fueren mayores de 30.000 almas, la tramitación y resolución de tales expedientes se ajustará á lo prevenido en los preceptos de la ley de 18 de Marzo de 1895 sobre la reforma interior y saneamiento de grandes poblaciones y á la ley especial de Ensanche de Madrid y Barcelona de 26 de Julio de 1892 y poblaciones á ella acogida por las disposiciones vigentes (1).

Artículo 13º. Será de la competencia exclusiva de los Ayuntamientos el nombramiento y separación de todos los funcionarios municipales, á excepción de los agentes de vigilancia municipal y vigilantes de Consumos que usen armas, los cuales serán de la exclusiva competencia del alcalde.

Contra los acuerdos que se adopten acerca de este particular procederá el recurso ante el gobernador de la provincia, el cual se limitará en la providencia que dictare á corregir las infracciones legales que existieren, pro sin juzgar del fondo del asunto. Con la resolución del gobernador quedará terminada la vía gubernativa.

Artículo 14º. No son tampoco susceptibles de recurso ante el Ministerio de la Gobernación las providencias gubernativas que se dictaren en las materias siguientes:

A) Pago de haberes por suspensiones de secretarios, contadores y demás empleados dependientes de los Ayuntamientos, declaradas ilegales por la autoridad superior.

En el caso á que este apartado se refiere, cuando cualquier empleado del Municipio hubiese sido separado ilegalmente de su cargo y esta resolución fuera revocada por la autoridad competente, los gobernadores dejarán expedita al reclamante, sin perjuicio d los recursos administrativos que procedan, la acción civil correspondiente ante los Tribunales ordinarios.

Esta acción podrá ejercitarse contra los que hubieren acordado indebidamente la suspensión ó cesantía, exigiéndoles el pago de los haberes devengados durante el periodo de suspensión, y las indemnizaciones de daños y perjuicios que en derecho correspondan.

B) Los expedientes de defraudación del impuesto de pesas y medidas, con arreglo á lo prevenido en el artículo 10 del Real decreto de 7 de Junio de 1891 (2).

C) Las cuentas de la gestión de los depositarios y agentes de la Recaudación municipal, respecto de los expedientes de descubiertos, alcances y débitos, sin perjuicio de las facultades que en su caso correspondan al Tribunal de Cuentas del Reino.

D) Las cuentas municipales cuando los gastos no excedan de 100.000 pesetas y hayan sido aprobadas conforme á lo dispuesto en el artículo 165 de la ley de 2 de Octubre de 1877.

E) Las reclamaciones sobre el pago de dietas á los comisionados nombrados para formar de oficio las cuentas municipales.

Artículo 15º. Los Ayuntamientos, como representantes legales del Municipio, tendrán capacidad jurídica para contratar y obligarse, establecer y explotar obras ó servicios públicos, adquirir, reivindicar, poseer ó enajenar bienes de todas clases y ejercer acciones civiles, criminales y contencioso-administrativas, sin otras limitaciones que las establecidas en los artículos 84, 85 y 86 d la ley Municipal vigente.

(1) Las dos leyes que se citan se insertan en las disposiciones complementarias.

(2) Véase en las disposiciones complementarias.

Ley Municipal

Tanto el Ministerio de la Gobernación como los gobernadores de las provincias se limitarán al otorgar las autorizaciones que dichos artículos requieren á corregir simplemente las infracciones de ley, si las hubiere. Tales autorizaciones deberán concederse ó negarse en el plazo improrrogable de treinta días.

Transcurrido este término, se estimarán concedidas.

No necesitarán los Ayuntamientos solicitar las autorizaciones á que los artículos antes citados se refieren cuando se trate de adquirir por los Ayuntamientos inmuebles, derechos reales y títulos de la Deuda pública; pero será preciso solicitarlas en el caso de enajenación y permuta de bienes inmuebles no comprendidos en las dos reglas primeras del artículo 35 de la ley Municipal. También serán precisas cuando se trate de las mismas enajenaciones ó permutas con relación á derechos reales y títulos de la Deuda público.

Los recursos que se entablaren acerca de los acuerdos municipales en esta materia deberán serlo ante los gobernadores, cuyas providencias pondrán término á la vía gubernativa, y serán recurribles ante los Tribunales contenciosos ó podrán ser objeto de otras acciones ante los Tribunales ordinarios si existiese lesión de derecho de carácter civil ó materia punible que castigar.

Artículo 16°. Los Ayuntamientos podrán aceptar libremente legados, herencias y mandas por disposición testamentaria, é igualmente donativos, sin más limitaciones que las contenidas en el artículo 85 de la ley Municipal.

Artículo 17°. La contratación de servicios de carácter municipal, mientras otra cosa no se dispusiere legalmente, se regirá por la instrucción de 24 de Enero de 1905, con la consiguiente reforma (1):

Las subastas simultaneas á que se refiere su artículo 7° serán precisas sólo en el caso de que el tipo señalado ascienda á 300.000 pesetas.

Cuando el importe del servicio exceda á dicha cantidad, será necesario la subasta doble en la Corporación interesada y en la Dirección general de Administración.

Los acuerdos que adopten los Ayuntamientos en los que se refiere á contratación de servicios municipales se considerarán ejecutivos, por afectar á asuntos propios de la competencia municipal.

Contra estos acuerdos podrá recurrirse ante el gobernador civil de la provincia en la forma general que la ley Municipal autoriza para los demás acuerdos de los Ayuntamientos. En virtud de lo que queda preceptuado se considera derogado cuando se consigna en la instrucción antes citada sobre este particular.

Las providencias de los gobernadores pondrán término á la vía gubernativa sin que de ellas quepa recurso ante el Ministerio, ni aun alegando para fundarle exceso de atribuciones ú omisión de éstas en que los gobernadores hubieren incurrido al dictar sus resoluciones.

Artículo 18°. Será igualmente de la competencia exclusiva de los Ayuntamientos la formación de las Ordenanzas municipales de policía urbana y rural, sin más limitaciones que la establecida en el artículo 76 de la ley Municipal. El acuerdo de la Diputación provincial á que dicho artículo se refiere no podrá nunca sustituirse, ni á título de urgencia, por la Comisión provincial.

Artículo 19°. Cuando los gobernadores hagan uso de las facultades que les conceden los artículos 98 y 184 d la ley Municipal vigente para imponer multas á los alcaldes y concejales, no podrán rebasar la escala establecida en los mismos, ni aplicar para hacerlas efectivas los medios que concede el párrafo 2° del artículo 22 de la ley Provincial vigente.

(1) Véase en las disposiciones complementarias.

Ley Municipal

Artículo 20°. Se considerará asimismo de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos la elección de sus secretarios, en el cumplimiento de lo previsto en los artículos 122 y 123 de la ley vigente. La suspensión y separación de dichos funcionarios se sujetará á lo dispuesto en el artículo 124 de la misma ley.

Artículo 21°. En la aplicación del párrafo último del artículo 136 de la ley Municipal la intervención de los gobernadores se limitará á la calificación de los impuestos, recargos ó arbitrios propuestos en el caso del párrafo 4°, extendido hoy á todos los Ayuntamientos del Reino por el artículo 16 de la Ley de Presupuestos de 21 de Julio de 1878.

Si considerase el gobernador que no existe extralimitación en aquellos con arreglo al párrafo 4° del artículo 84 de la Constitución del Estado, los aprobará desde luego, dando cuenta al Ministerio de la Gobernación de haberlo hecho.

Para dictar ese acuerdo el gobernador deberá consultar al delegado de Hacienda, y después de oído éste, si su dictamen no fuera favorable, remitirá el expediente al Ministerio para que éste proceda con arreglo á lo dispuesto en el último párrafo del referido artículo 136.

La resolución aprobatoria del gobernador será ejecutiva.

Artículo 22°. Lo dispuesto en el artículo anterior no empece al recurso de agravios que el artículo 140 de la ley reconoce á todos los interesados en materia de arbitrios ó impuestos municipales de cualquiera naturaleza.

Artículo 23°. La intervención de los gobernadores en materia de presupuestos municipales se limitara exclusivamente á lo dispuesto en el artículo 130 de la ley Municipal. En su virtud, y en el caso de que aquellos existieran las extralimitaciones legales á que dicho artículo se refiere, los gobernadores devolverán los presupuestos al Ayuntamiento de que se trate, al exclusivo objeto de que éste delibere y vote de nuevo con arreglo á la ley, en el sentido y en la forma que con toda libertad estimare más conveniente á sus propios y peculiares intereses.

Contra el acuerdo gubernativo aprobando presupuestos municipales no se admitirá ni tramitará e en el Ministerio de la Gobernación otro recurso que el que entablaren las Juntas municipales.

En este caso se cumplirán estrictamente los plazos que señala el precepto legal antes citado.

Artículo 24°. Los alcaldes y los gobernadores cuidarán bajo su más estrecha responsabilidad de no suspender acuerdos municipales sino en los casos taxativamente previstos en los artículos 169 y 170 de la ley Municipal.

Artículo 25°. Dependiendo de la publicidad de los acuerdos municipales el ejercicio de los derechos que la ley concede á los agraviados por los mismos, todos los Ayuntamientos, sea cualquiera su vecindario, serán responsables del retraso ú omisión en que incurrieran en el cumplimiento del artículo 109 de la ley vigente, y esta responsabilidad será exigible con arreglo al artículo 180 y siguientes de la misma. Los gobernadores cuidarán á su vez bajo su propia responsabilidad del cumplimiento exacto de este servicio.

Artículo 26°. (1) El recurso contencioso á que se refiere este Real decreto se sustanciará ante los Tribunales contenciosos provinciales por los trámites siguientes:

El recurso se entablará en el término de diez días, á contar desde la notificación administrativa, ante la autoridad que hubiere dictado la resolución que ponga término á la vía gubernativa.

Dicha autoridad remitirá el expediente al Tribunal contencioso en el Término de tercero día, contando desde la interposición del recurso.

1) El Real decreto de 7 de Julio de 1911, que se inserta á continuación, deja sin efecto las disposiciones contenidas en el artículo que se anota, restableciendo el estado de derecho anterior en cuanto á la sustanciación de los recursos contencioso-administrativos.

Ley Municipal

Recibido el expediente en el Tribunal provincial, acordará éste ponerlo de manifiesto para instrucción de las partes por un término que no excederá de cinco días hábiles, durante los cuales podrán pedir éstas el recibimiento á prueba.

Si el tribunal lo considerara procedente, accederá á ella por un término que no excederá de cinco días para proponer y de quince para practicar la propuesta y admitirla.

Transcurridos los términos de prueba, se pondrán las practicadas de manifiesto á las partes por tres días.

Al terminar este plazo, ó el de cinco cuando no se hubiese pedido ó denegado el recibimiento á prueba, se señalará inmediatamente día para la vista, y, celebrada ésta con ó sin asistencia de las partes, y aunque éstas no se hubiesen personado, fallará el Tribunal en el fondo dentro de los tres días siguientes.

Artículo 27º. Como consecuencia y complemento de los artículos que preceden, el Gobierno ajustará á las disposiciones de este decreto el uso que estime oportuno hacer de las facultades que le concede el artículo 19 de la ley Provincial.

Artículo 28º. Será obligación de los gobernadores de las provincias de Baleares y Canarias la visita anual á todas y cada una de las islas que forman los respectivas archipiélagos. Mientras las leyes no dispongan otra cosa, el gobernador de Canarias residirá alternativamente y con igual proporción de tiempo, dentro del año, en Santa Cruz de Tenerife ó en Las Palmas de Gran Canaria.

El delegado de esta isla ejercerá las funciones de secretario cuando el gobernador resida en ellas; y en su ausencia, todas aquéllas que en él delegue el propio gobernador.

Dado en Palacio á 15 de Noviembre de 1909.-ALFONSO.- El presidente del Consejo de ministros, ministro de la Gobernación, Segismundo Moret.

Las páginas en el libro original comprenden de la página 132 a 157, ambas inclusive.

REAL DECRETO DE 7 DE JULIO DE 1911

EXPOSICIÓN

Señor: El Real decreto de 15 de Noviembre de 1909 respondió á la sentida necesidad, reclamada además muy insistentemente por la opinión pública, de mantener la más provechosa descentralización administrativa, por los resultados bienhechores que las iniciativas de las Corporaciones populares están llamadas á ejercer en la vida local, como también al restablecimiento de la integridad de la ley Municipal vigente, que contiene principios vigorosos de libertad y respeto á la acción peculiar de los Ayuntamientos dentro de su propia y reconocida competencia; propósitos todos dignos del mayor elogio, y que el ministro que tiene honra de suscribir es el primero en reconocer y sancionar.

Ante consideraciones apremiantes que obligan á respetar en toda su eficacia preceptos taxativos de la ley y reglamentación de observancia obligatoria en cuanto al procedimiento contencioso se refiere, por haberlo así declarado además la jurisprudencia promulgada por la Sala correspondiente del Tribunal Supremo, se hace precisa la reforma de dicha Real disposición sólo en cuanto con este particular se relaciona, imponiéndose por ello y como obligada consecuencia restablecer el estado de derecho anterior en determinados actos, que por afectar á la organización y funcionamiento de los Ayuntamientos no pueden quedar sometidos á recursos ordinarios contenciosos provinciales de tramitación reglamentada, cuando de la providencia de los gobernadores se trata, sin agotar antes todas las garantías de resolución convenientes, hasta tanto se sancionan las leyes de reforma y nueva organización municipal que el Gobierno se propone con toda brevedad someter á la deliberación d las Cámaras.

Por las razones expuestas el ministro que suscribe se permite someter á Vuestra Majestad el siguiente proyecto de decreto.

Madrid, 7 de Julio de 1911.-Señor: A los R.P.de V.M., Antonio Barroso y Castillo.

REAL DECRETO

De acuerdo con mi Consejo de ministros, y á propuesta del de la Gobernación,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. En cumplimiento de la ley y reglamento vigentes que regulan el procedimiento contencioso administrativo, todos los recursos de esta clase relacionados con el Real decreto de 15 de Noviembre de 1909 se sustanciarán en lo sucesivo en la forma y plazos ordinarios previstos en la legislación especial de referencia, quedando modificadas, en cuanto para ello sea necesario, las disposiciones de aquel Real decreto y restablecido el estado de derecho anterior.

Dado en Palacio á 7 de Julio de 1911.-ALFONSO.-El ministro de la Gobernación. Antonio Barroso y Castillo.- (Gaceta de 8 de Julio.)

REAL DECRETO DE 24 DE MARZO DE 1891, SOBRE EMPADRONAMIENTO VECINAL, ELECCIONES MUNICIPALES Y TOMA DE POSESIÓN DE LOS CONCEJALES.

De acuerdo con el Consejo de ministros, á propuesta del ministro de la Gobernación,
En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1º. Los Ayuntamientos continuarán formando los empadronamientos y efectuando las rectificaciones de los mismos en la forma y plazos establecidos en los capítulos II y III, título I de la ley Municipal vigente.

Mientras el Gobierno no dicte nuevas disposiciones sobre el modo y forma de llevar el empadronamiento, se considerarán supletorias las de los artículos 17 al 19 y 21 al 25 del reglamento aprobado por el Consejo de Estado para la ejecución de la ley de 1870, puesta en vigor por Real orden de 6 de Mayo de 1871.

Los gobernadores de provincias cuidarán muy especialmente de reclamar el resumen clasificado del número de habitantes de cada término municipal, que por su conducto ha de remitirse todos los años á la Diputación provincial respectiva, exigiendo responsabilidad á los Ayuntamientos que dejaren transcurrir el último mes de cada año económico sin remitirlo á la Diputación, conservando en su poder copia literal.

Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 párrafo segundo, de la ley Municipal, cuando haya de tener efecto la rectificación del Censo general de electores los alcaldes de los pueblos de más de 400 vecinos, ala publicar el día 10 de Abril las listas que ordena el artículo 12 de la ley de 26 de Junio de 1890, cuidarán de que en las listas 1ª y 3ª se contenga una casilla más, donde se exprese el carácter de elegible ó no elegible para cargos concejiles que corresponda á cada elector con arreglo á las prescripciones del artículo 41 de la citada ley Municipal.

Las Juntas municipales y las provinciales del Censo electoral y las Audiencias territoriales concederán y resolverán todas las reclamaciones que sobre este particular se formulen, en los mismos plazos y á tenor de los demás requisitos y trámites que prescribe la referida ley Electoral para la rectificación anual del Censo.

En lo sucesivo el libro del Censo electoral y las listas definitivas de electores en los pueblos de más de 400 vecinos contendrán una casilla adicional en que se exprese si cada elector tiene carácter de elegible para cargos municipales.

Artículo 3º. Hecha la proclamación de concejales en la forma que dispone el artículo 50 del Real decreto de 5 de Noviembre de 1890, y recibida en la Junta municipal del Censo el acta á que se refiere el artículo 52, si hubiere empate, el Ayuntamiento procederá inmediatamente en cada distrito al sorteo entre los concejales presuntos, y el resultado del mismo con la lista de los definitivamente elegidos en Municipio, se expondrá al público en el mismo día, en la parte exterior del local, en el sitio destinado á la publicación de edictos.

La exposición al público tendrá lugar por espacio de ocho día.

Artículo 4º. Los electores del término municipal podrán presentar por escrito ante el Ayuntamiento las reclamaciones que crean procedentes sobre la nulidad de la elección, y en su caso del sorteo, y

Ley Municipal

sobre la incapacidad de los proclamados, durante los dichos día de exposición al público que se mencionan en el artículo anterior.

Durante ese mismo período y otros ocho días más podrán los elegidos presentar también los documentos que aleguen en su defensa y las excusas que estuvieren fundadas en haber sido senadores ó diputados á Cortes, diputados provinciales ó concejales en los dos años precedentes.

Las excusas fundadas en la edad ó en impedimento físico podrán presentarse en cualquier tiempo.

Artículo 5º. Al día siguiente de finalizado el plazo que determina el artículo anterior los alcaldes elevarán el expediente de reclamaciones y el electoral del término municipal á la Comisión provincial respectiva, entregándose en la Administración de correos o estafeta más cercana bajo sobres cerrados y sellados, y recogiendo el correspondiente recibo.

Los administradores los remitirán inmediatamente, certificados, á los presidentes de las Comisiones provinciales.

Cuando se trate de capitales de provincia, la entrega de los expedientes en al Secretaria de la Diputación se hará constar también bajo recibo.

La negligencia de los alcaldes en la remisión de los expedientes en el plazo señalado será corregida con multas de 50 á 100 pesetas.

Sin perjuicio de esta multa, la Comisión provincial, tan luego como note la falta, deberá disponer, también bajo su responsabilidad, que inmediatamente se recojan los expedientes por comisionado especial, á costa del alcalde negligente, á tenor de lo dispuesto en el artículo 8º del citado Real decreto de 5 de Noviembre de 1890.

Artículo 6º. La Comisión provincial una vez recibidos los expedientes, resolverá dentro del término de quince días todas las reclamaciones, protestas y excusas formuladas, debiendo publicar sus acuerdos, á más tardar dentro del quinto día, en el Boletín Oficial de la provincia sin perjuicio de cuidad que se notifiquen á los interesados en la forma prevenida por las disposiciones administrativas vigentes.

Artículo 7º. Los vocales de las Comisiones provinciales, salvo el caso de fuerza mayor, serán responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, incurriendo en una multa de 100 á 250 pesetas cada uno de aquellos si para el día 20 de Diciembre, como plazo máximo, no hubieren resuelto los expedientes electorales de todas clases.

Transcurrido este día sin haberse resuelto dichos expedientes, la Comisión provincial será requerida en debida forma por el gobernador para el cumplimiento de este servicio público, notificándole la multa en que nuevamente incurre cada uno de sus vocales, á razón de 20 pesetas por cada día de retraso en la solución, y dando inmediatamente cuenta al Gobierno, á los efectos de los artículos 132 y siguientes de la ley Provincial y 382 y 416 del código penal.

Artículo 8º. Cuando por causas extraordinarias los expedientes de reclamaciones y protestas electorales no hubieran sido resueltos para el día en que haya de los elegidos tomarán posesión de sus cargos, á reserva de lo que por la Comisión provincial se resuelva, y entendiéndose la declaración de nulidad en los actos administrativos que hubiera llevado á efecto la Corporación.

Artículo 9º. Los acuerdos de las Comisiones provinciales en materia de validez ó nulidad de elecciones municipales y demás actos con ellas relacionados, así como sobre la capacidad ó incapacidad y excusas de los elegidos, serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho de los interesados para apelar ante el Ministerio de la Gobernación dentro del término de diez días, según dispone el artículo 146 de la ley Provincial.

El recurso de apelación se presentará á la Comisión provincial ó al gobernador de la provincia, como presidente de la misma, quien dentro del término de tercero día lo remitirá al Ministerio con

Ley Municipal

todos los antecedentes que formen el expediente. La alzada se resolverá definitivamente y en última instancia en los sesenta días siguientes al de su ingreso en el mismo.

Artículo 10°. Pasado el plazo de los sesenta días señalado en el último párrafo del artículo anterior sin que se hubiere dictado resolución alguna, se considerarán como definitivos los acuerdos adoptados por las Comisiones provinciales, y se devolverán los expedientes al gobernador, para que éste á su vez los remita y se archiven en los respectivos Ayuntamientos.

Artículo 11°. En ningún caso ni por razón alguna, después de la época y plazo de ocho días señalados en los artículos 3° y 4°, no podrán entablarse ni admitirse por el Ayuntamiento reclamaciones de los electores sobre validez ó nulidad de la elección ó el sorteo, ni sobre la capacidad ó incapacidad de los elegidos por causas que puedan afectarles al tiempo de su elección ó por motivos que se expresan en el artículo 132 de Real decreto de 5 de Noviembre de 1890.

Las que se formulen por causas de incapacidad sobrevenidas después de la elección se incoarán en la misma forma y plazos establecidos en los artículos precedentes.

Artículo 12°. Cuando algún concejal hubiere sido elegido en condiciones de incapacidad ó incurriere en ella después de elegido, aun cuando no se haya suscitado reclamación alguna, el Gobierno podrá ordenar la instrucción de expediente especial en depuración de este extremo, cuyo expediente se suscitará con audiencia del interesado é informe de la Comisión provincial, resolviéndose por el gobernador de la provincia.

El acuerdo que se dicte no será ejecutivo si el interesado acudiera en alzada al Ministerio de la Gobernación dentro del término de quince días; contados desde el siguiente al de la notificación de aquél.

Estas alzadas deberán resolverse necesariamente en el plazo máximo de sesenta días desde su ingreso en dicho Ministerio.

Artículo 13°. Los Ayuntamientos se constituirán en la época y forma que preceptúa la ley orgánica. Los concejales electos presentarán sus certificaciones credenciales, expedidas por la Junta de escrutinio general en la Secretaría del Ayuntamiento, tres días antes por lo menos de aquel en que deba tener lugar la constitución. Los que dejaren de cumplir este requisito, ó que no asistiesen el día señalado por la ley para constituirse la Corporación sin acreditar la causa justa de su ausencia, incurrirán en la multa que señale el gobernador, con arreglo al artículo 124 de la ley Municipal.

Los concejales electos que reincidan en esta falta y dieren lugar por ello á que la Corporación no se constituya en el día que para el efecto se le cita, incurrirán en el doble multa que expresa este artículo.

Sí por tercera vez y previa nueva citación dejasen de concurrir impidiendo que el Ayuntamiento pueda constituirse, se considerarán vacantes sus cargos, cubriéndose éstos interinamente por el gobernador en individuos que reúnan las condiciones legales, hasta tanto que aquellos se provean por elección en la forma y tiempo que establecen las disposiciones vigentes, sin perjuicio de dar conocimiento los Tribunales de justicia de la resistencia al desempeño de funciones públicas á los efectos de los artículos 383 y 416 del Código penal.

Artículo 14°. Si por cualquier motivo no se hubiese nombrado el nuevo Ayuntamiento para el primer día del primer mes del año económico, se seguirá el del año anterior hasta que la elección se verifique y haya tomado posesión el nuevamente nombrado.

Las paginas en el libro original comprende de la página 161 a 172 ambas inclusive.

LEY DE 18 DE MARZO DE 1895 SOBRE REFORMA INTERIOR Y SANEAMIENTO DE GRANDES POBLACIONES

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino; a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales.

Artículo 1º. Se declaran comprendidas en los artículos 2º y 11º de la ley de 10 de Enero de 1879 las obras de saneamiento y mejora interior de las poblaciones que cuenten con 30.000 ó más almas. Estos proyectos podrán ser iniciados por Ayuntamientos, por Sociedades legalmente constituidas ó por particulares.

Artículo 2º. Las expropiaciones necesarias para las obras comprendidas en el artículo anterior se registrarán por las prescripciones de las leyes de 10 de Enero de 1879 y 26 de Junio de 1892, y por las de la presente ley en cuanto completen, reformen ó deroguen las anteriores.

Artículo 3º. Cuando los Ayuntamientos proyecten hacer estas obras, para atender á ellas, luego que sea aprobado su proyecto, podrán acordar la contratación de los empréstitos que estimen necesarios ó crear los arbitrios ó recursos que juzguen más oportunos, guardando siempre las formalidades establecidas por la leyes.

Artículo 4º. Serán parte legítima en el expediente que se forme para la ejecución de estas obras y tendrán derecho á ser indemnizados por la expropiación:

Primero. Los que según el registro de la propiedad, ó en su defecto según el padrón de riqueza, sean propietarios ó al menos poseedores legítimos de las fincas que hubieren de ser objeto de la expropiación.

Segundo. Los que tengan sobre dichas fincas inscrito ó anotado en el Registro de la propiedad algún derecho real.

Tercero. Los arrendatarios que tengan inscrito ó anotado su derecho en el Registro de la propiedad.

Cuarto. Los comerciantes é industriales que por espacio de diez años consecutivos lleven ejerciendo su comercio é industria en el mismo local.

Fuera de los enumerados en el cuatro párrafos anteriores nadie podrá reclamar contra el expropiante en los expedientes á que esta ley se refiere; Pero conservarán los que se crean perjudicados todas las acciones contra quien corresponda, con arreglo á derecho.

Artículo 5º. Cuando los que según el artículo anterior deban ser parte legítima en el expediente no gocen de la plenitud de sus derechos civiles, serán representados por los que con arreglo á las leyes estén autorizados para suplir su falta de capacidad. Al efecto, si para contratar válidamente necesitasen por razón de su estado autorización especial, se entenderá concedida ésta con las condiciones siguientes:

Primera. Que el expediente se hagan observar las prescripciones de la presente ley; y

Segunda. Que las cantidades que hubieren de ser producto de la expropiación se depositen ó empleen con arreglo á derecho.

Ley Municipal

Artículo 6º. Cuando la finca ó derecho real que haya de expropiarse se halle en litigio, se considerará como parte legítima en el expediente á quien esté en posesión de la misma finca ó derecho, y en su defecto al administrador judicial, y el precio d la expropiación se pondrá por el expropiante á disposición del Tribunal que entienda en le litigio. Los desconocidos ó ausentes de ignorado paradero serán representados por el ministerio fiscal. El Estado, las Provincias y los Municipios, por sus bienes propios, estarán representados por quienes tienen este derecho según las leyes vigentes.

Artículo 7º. Cuando para la regulación ó formación de manzanas convenga suprimir algún patio, calle ó trozo de ella, serán expropiadas las fincas que tengan fachada ó luces directas sobre las mismas calles ó patios, si los propietarios no consienten en la desaparición de las luces ó fachadas.

Artículo 8º. Las zonas laterales ó paralelas á la vía pública sujetas á expropiación por el artículo 47 de la ley de 10 de Enero de 1879 tendrán un fondo ó latitud que no podrá exceder de 50 metros ni ser menor de 20.

Artículo 9º. Es obligación de los concesionarios de las obras á que esta ley se refiere expropiar las parcelas menores de cinco metros de fondo. En todo lo demás referente á parcelas se observará lo prevenido por la ley de 17 de Junio de 1864.

Artículo 10º. Las expropiaciones autorizadas por esta ley se harán en absoluto, esto es, con inclusión de los derechos de toda clase que afecten directa ó indirectamente al d la propiedad, de modo que, hecha la expropiación de la finca afectada, aquellos derechos no revivirán por ningún concepto, en los nuevos solares que se formen, aun cuando el todo ó parte de ellos proceda de la misma finca.

Artículo 11º. El valor de lo que haya de expropiarse para la ejecución de las obras proyectadas será fijado con arreglo á lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 12º. No son objeto de esta ley los perjuicios que las obras á que la misma se refiere causen resultado inmediato de la expropiación forzosa. La reclamación de estos perjuicios no pueden producir el efecto de suspender el curso del expediente de expropiación.

Artículo 13º. Cuando por virtud d alguno de los proyectos á que esta ley se refiere se procediera á nuevas construcciones en la zona expropiada los propietarios de las fincas nuevas no tributarán en este concepto y por territorial durante los primeros veinte años por mayor suma que la que en conjunto estaba impuesta á las fincas que se encontraban en pie de adjudicarse la concesión, más si fuere menor el tipo de tributación que se acordase durante ese tiempo, le será aplicado dicho beneficio. Los Ayuntamiento no podrán imponer á las nuevas edificaciones derecho de licencia de obras ni otros arbitrios que graven los materiales de construcción ó la apertura y primer destino de los nuevos edificios.

Artículo 14º. Se declaran exentas del impuesto de derechos reales y traslación de bienes las adquisiciones de fincas sujetas á la expropiación forzosa y las primeras enajenaciones de los solares que resulten.

Artículo 15º. El papel sellado que se emplee en todo el expediente instruido con arreglo á esta ley en sus justificaciones reclamaciones que surjan de su aplicación, libros de actas del Jurado y certificaciones que expida al Registro de la propiedad, será de 10 céntimos de peseta el pliego, y de una peseta en todos los demás casos en que la ley de Timbre prevenga el uso del papel sellado.

TÍTULO II
De los proyectos

Artículo 16°. El Ayuntamiento, sociedad legalmente constituida ó particular que pretenda formar un proyecto de obras de los comprendidos en esta ley, solicitará, con un Memoria explicativa del mismo, la necesaria autorización del ministro de la Gobernación. Si el ministro de la Gobernación

lo entendiase procedente, otorgará la autorización necesaria, con la cual, y en su virtud, el solicitante quedará autorizado para traer el expediente, y siempre á su costa, los documentos indispensables y para hacer reconocimientos necesarios.

Artículo 17°. Todo proyecto de saneamiento ó mejora interior den las poblaciones á que esta ley se refiere contendrá por duplicado los siguientes documentos:

A) Primero. Memoria descriptiva.

Segundo. Planos.

Tercero. Pliego de condiciones facultativas y económicas.

Cuarto. Presupuesto.

B) Primero. Relación completa de todos los bienes y derechos cuya expropiación total ó parcial sea necesaria, con expresión de todas las circunstancias necesarias para bien determinarlos. Respecto de los edificios se acompañarán plantas y alzados.

Segundo. Valoración de todos y cada uno de los mismos bienes y derechos.

Tercero. Valoración de las vías públicas que han de desaparecer.

Cuarto. Valoración de las vías públicas que han de resultar de la realización del proyecto, con inclusión de todos los servicios públicos de las mismas vías.

Quinto. Tasaciones periciales, con arreglo á las bases de esta ley, de todas y cada una de las expropiaciones que hayan de valorarse en cumplimiento de los números precedentes.

Artículo 18°. Para las valoraciones y tasaciones periciales que hayan de hacerse con arreglo á lo prevenido en el artículo anterior se traerán al expediente y tendrán en cuenta los documentos siguientes:

Para la valoración y tasación de las fincas ó solares:

Primero. Certificación de la Comisión de evaluación ó de la Administración provincial, según los casos, que exprese el valor y renta declarada, el liquido imponible, la cuota impuesta y el nombre del que aparezca como propietario. Esta certificación comprenderá el período de los diez años anteriores al de la fecha del proyecto.

Segundo. Certificación del Registro de la propiedad en que se haga constar el nombre del propietario ó del poseedor del inmueble, el título por virtud del cual tiene aquel derecho, el precio en el cual lo adquirió ó le fue adjudicado, la fecha de la respectiva anotación ó inscripción, el valor con que por ella figura, con conceptos constituidos de este valor, las cargas que le afectan y los derechos que le favorecen.

Tercero. Reconocimiento facultativo del estado de vida del inmueble.

Para la valoración y tasación de los derechos reales: certificación del Registro de la propiedad en que se hagan constar todas las circunstancias de la anotación ó inscripción vigente. Para la valoración y tasación de los derechos de los arrendatarios: certificación del Registro de la propiedad en que se acrediten todas las circunstancias de la anotación é inscripción del contrato respectivo.

Para la valoración y tasación d los derechos de los comerciantes ó industriales en su caso: certificación ó información bastante á acreditar el ejercicio de su comercio ó industria por diez años consecutivos en el mismo local.

Ley Municipal

Artículo 19°. Las certificaciones que por virtud de lo prevenido en el artículo anterior expidan los registradores de la propiedad devengarán en concepto de honorarios dos pesetas por pliego cuando no excediere de 100.000 pesetas el valor del inmueble de referencia, tres pesetas si no pasare de 500.00, y cuatro pesetas si fuere de 500.000 en adelante.

Artículo 20°. Las tasaciones periciales de lo que haya de expropiarse se harán con sujeción á las siguientes reglas:

Edificios y solares.

Se clasificarán en categorías diversas por el sitio que ocupen y por el estado de vida que acuse.

Las categorías por sitios serán:

Primera. Calles de primer orden y calles de segundo orden con vuelta á calles de primer orden.

Segunda. Calles de segundo orden y calles de tercer orden con vuelta á calles de segundo orden.

Tercera. Calles de tercer orden.

Las plazas se clasifican por su superficie y por la categoría de las calles que á ellas afluyan.

Las categorías por estado de vida serán:

Primera. De nueva construcción ó vida entera.

Segunda. De dos tercios de vida.

Tercera. De un tercio de vida.

dentro de estas clasificaciones, y teniendo en cuenta los datos suministrados por los documentos que se citan en el artículo 18, se harán las respectivas tasaciones entre los siguientes limites:

A) Primera categoría por sitio, del 3 1/3 por 100 al 5 por 100; segunda categoría por sitio, del 5 por 100 al 6 ½ por 100; tercera categoría por sitio, del 6 ½ por 100 al 8 por 100.

B) Primera categoría por estado de vida, del 80 al 100 por 100 del valor del sitio; segunda categoría por estado de vida; del 60 al 80 por 100 del valor del sitio; tercera categoría por estado d vida, del 40 al 60 por 100 del valor del sitio. En las poblaciones en que no hubiese Ordenanzas municipales ó no existiese la precedente clasificación de calles, se atenderá las circunstancias especiales de las localidades respectivas y se tendrán en cuenta la situación que los edificios ocupen respecto de los centros de vida de la población, el de las calles de ingreso y de fachada, los materiales de construcción, el estado de las fábricas y el emplazamiento de los solares. En los mismos casos se tasarán los edificios teniendo en cuenta los datos traídos al expediente y entre los limites del 3 ½ al 8 por 100, y los solares con arreglo al tipo medio de las ventas que se hayan realizado de los sitios similares de la misma zona en el último quinquenio.

Derechos reales.- Serán capitalizados y abonados en la forma y por los tipos autorizados por el uso en la localidad respectiva.

Derechos de los arrendatarios.- Serán abonados con un 5 por 100 de los alquileres pagados, si éstos excedieren de diez años.

Derechos de los comerciantes é industriales.- Serán abonados con un 10 por 100 sobre los alquileres que hayan pagado en los últimos diez años consecutivos que lleven en sus establecimientos, y con un 5 por 100 sobre los alquileres de cada diez más que aparezcan establecidos en el mismo local, hasta los cincuenta años como máximum.

En todas las tasaciones periciales se comprenderá, además de lo ya valorado, una partida por daño y perjuicios de la expropiación y otra del 30 por 100 de afección.

TÍTULO III
Del procedimiento.

Artículo 21°. Cuando las obras á que se refiere esta ley sean promovidas por Sociedades legalmente constituidas ó por particulares, sus proyectos serán presentados al Ayuntamiento respectivo para que sigan después los trámites ordinarios.

Antes de ser expuesto al público el proyecto, el solicitante de su aprobación consignará en la Caja general de Depósitos ó en la Sucursal que corresponda, á disposición del gobernador de la provincia, 10 centésimas por 10 del importe total del presupuesto, destinado al pago de los gastos que se originen por dietas de los jurados, documentación, anuncios y demás diligencias de procedimiento que los ocasionen.

Artículo 22°. Presentado el proyecto en la Secretaría del Ayuntamiento cuando hubiese sido formado por Sociedad legalmente constituida ó por particular, ó autorizado tan sólo por la Corporación municipal cuando procediere de la iniciativa de ésta, se expondrá al público por espacio de treinta días, durante los cuales se admitirán todas las reclamaciones ú observaciones que por escrito se presenten sobre cualquiera de los aspectos dl proyecto y de los elementos que le formen; se pasarán el proyecto y las reclamaciones á informe de los arquitectos municipales por otro plazo igual y practicada esta diligencia, informarán sucesivamente el Ayuntamiento y la Junta de asociados, en el plazo de quince días cada uno.

Artículo 23°. Practicadas las anteriores diligencias y dentro del quinto día, el alcalde elevará el expediente instruido, con todos los documentos é informes de que queda hecho mérito, al gobernador de la provincia. El gobernador de la provincia en término de quince días, publicará en el Boletín Oficial respectivo las expropiaciones que se proyecten y sus respectivas tasaciones, y requerirá individualmente á cada uno d los interesados que con arreglo á las prescripciones de esta ley tengan derecho á indemnización para que se declaren ó no conformes con las tasaciones que de sus respectivos bienes ó derechos hubiesen hecho. Los interesados requeridos manifestarán por escrito en la misma diligencia ó por especial solicitud, y en el plazo de quince días contados desde que les fue hecho el requerimiento, si se conforman ó no con las respectivas tasaciones. Las notas de no conformidad se unirán al expediente. Las notas de conformidad y las reclamaciones que se hagan en el mismo sentido pasarán al estudio y fallo del Jurado creado por esta ley, formando para cada una de estas notas y reclamaciones la correspondiente pieza separada con todos los antecedentes que obren en el expediente y que puedan ilustrar la tasación respectiva. Recibidas del Jurado las piezas separadas que se sometieron á su resolución para fallar las notas de no conformidad y las reclamaciones hechas contra las tasaciones, y unidas al expediente, el gobernador lo pasará á informe de la Comisión provincial por término de diez días; evacuando este informe, el mismo gobernador dará el suyo en igual plazo, y hecho todo esto elevará el expediente al Ministerio de la Gobernación.

Artículo 24°. El ministro d la Gobernación, previos los informes de la Junta consultiva de Urbanización y de Obras del Consejo de Estado en pleno, otorgará ó denegará su aprobación al proyecto y á las expropiaciones que en él se consignen como necesarias, y á las tasaciones que cuenten con la conformidad de los interesados, ó el fallo del jurado en su caso. La respectiva Real orden comprenderá detallada y ordenadamente todas las resoluciones necesarias. Contra ella procede la vía contencioso-administrativa.

TÍTULO IV
Del jurado.

Artículo 25°. Se crea un Jurado especial encargado de estudiar y fallar en primera instancia las tasaciones que sin la conformidad de los interesados se hicieran de los bienes y derechos cuya expropiación se repute necesaria para la realización de los proyectos á que se refiere esta ley.

Artículo 26°. Se constituirá nuevo jurado para conocer en cada proyecto de saneamiento ó mejora interior de población.

Artículo 27°. El nombramiento y constitución del Jurado se hará en los días designados por esta ley para recoger las notas de no conformidad y la s reclamaciones que se hicieren contra las tasaciones que se incluyen en los proyectos.

Artículo 28°. El Jurado se compondrá en las poblaciones de más de 100.000, del alcalde ó de quien haga sus veces, como presidente; cuatro arquitectos, un comerciante, un industrial y dos abogados elegidos á la suerte de entre los que estén matriculados por los respectivos citados conceptos, y de cinco propietarios elegidos de la misma forma de entre los 200 primeros contribuyentes por tal concepto en la población, siendo dos de ellos designados por la Asociación de Propietarios, si la hubiere; y en las que no contaren 100.000 almas, del mismo alcalde ó quien haga de sus veces, como presidente, y de tres arquitectos, un comerciante, un industrial, un abogado y tres propietarios elegidos en la forma antes explicada, de los cuales uno será de la referida Asociación de Propietarios, en donde exista. Cuando no hubiere de las condiciones y posiciones explicadas personas bastantes para constituir el Jurado, se tomarán de las posiciones y condiciones análogas á las apuntadas. Para cubrir las vacantes legales se nombrarán otros tantos en igual forma que los jurados propietarios.

Artículo 29°. El sorteo de los jurados se verificará antes en el Ayuntamiento de la localidad, en el salón destinado á sus sesiones, y previo anuncio publicado con antelación de ocho días en el Boletín Oficial de la provincia y en los sitios de costumbre.

Artículo 30°. No podrán ser jurados los interesados en el expediente respectivo y que con arreglo á las prescripciones de esta ley tengan el concepto de parte en el mismo. Serán motivos de incapacidad ó de excusa en este Jurado los mismos reconocidos por la ley para la constitución del Jurado en lo criminal. Son también aplicables á este caso las disposiciones dictadas para aquél sobre recusaciones.

Artículo 31°. Es irrenunciable el cargo de jurado.

Artículo 32°. El jurado de menos edad ejercerá las funciones de secretario. Si el secretario renunciase su cargo, será sustituido por el que le siga en edad. El secretario tendrá por suplente siempre el jurado que le siga en edad. Las designaciones de secretario y de suplentes se harán en la primera reunión que el Jurado celebre.

Artículo 33°. Los jurados tendrán por cada sesión que celebre, y cualquiera que sea la duración de esta, 15 pesetas en las poblaciones menores de 100.000 almas y 25 pesetas en las demás poblaciones.

Artículo 34°. En cada sesión que el jurado celebre señalará los asuntos que ha de ver en la siguiente. En listas expuestas al público se determinarán los asuntos que han de verse en cada sesión. Las sesiones serán públicas, y se verificarán en el salón de actos del Ayuntamiento

Artículo 35°. Todo jurado tendrá derecho á pedir, para su instrucción, que se aplace la resolución del asunto puesto á la orden del día para la sesión siguiente; pero en ésta habrá de resolverse necesariamente el asunto aplazado.

Ley Municipal

Artículo 36°. El Jurado, luego que tenga en su poder un expediente, citará á los interesados en él y les requerirá para que en el término de diez días, contados desde el requerimiento, aleguen y prueben cuando crean conveniente á su derecho.

Artículo 37°. Unidas las alegaciones y prueba de los interesados á sus respectivos expedientes, el Jurado les citará para una vista pública y dictará en el término de tercero día, á contar desde el que se verifique ésta, el fallo que crea procedente.

Artículo 38°. Los acuerdos del Jurado se tomarán por mayoría absoluta. El voto dl presidente decidirá los empates. Los jurados no podrán excusarse de votar y tendrán derecho de formular votos particulares. Las resoluciones del Jurado serán enviadas al gobernador de la provincia, con el expediente respectivo, en el término de quince días.

Artículo 39°. Las resoluciones del Jurado se consignarán en un libro de actas foliado, sellado con el del Ayuntamiento y rubricado por dos jurados en todas sus hojas. En la primera hoja se hará constar, por diligencias firmadas por el presidente, los dos jurados que rubrican y el secretario, el número de hojas útiles del libro y la circunstancia de estar cumplimentados los requisitos precedentes. Cada acta será firmada por todos los jurados asistentes,. El libro será archivado en el Ayuntamiento cuando el Jurado termine su cometido.

Artículo 40°. Las resoluciones del Jurado serán motivadas, se notificaran á los interesados en el término de tercero día, y se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en los sitios destinados para los anuncios municipales.

Artículo 10°. Las resoluciones del Jurado son reclamables en alzada para ante el gobernador de la provincia en el plazo de cinco días, contados desde la notificación precedente.

Artículo 42°. El Jurado terminará su cometido en el plazo de sesenta días, contados desde su constitución. Su última sesión será destinada á la presentación, examen y aprobación de sus propias cuentas.

Artículo 43°. El secretario del Jurado expedirá, á petición de parte interesada y en el papel sellado determinado por la ley común, pero sin exacción de derecho y en término de tercero día, certificaciones visadas por el presidente de las resoluciones que hubiese adoptado.

Artículo 44°. Las dietas de los jurados y los gastos de impresión, anuncios y demás exigidos por la tramitación de los expedientes serán autorizados por el secretario del Jurado y visados por su presidente. El presidente del jurado pasará estas cuentas al gobernador de la provincia para que autorice su pago á cargo del depósito constituido con arreglo al artículo 21,. El gobernador d la provincia cuidará también de liquidar este depósito y devolver al autor el sobrante, si lo hubiese.

TÍTULO V De las subastas.

Artículo 45°. Aprobado un proyecto por el ministro de la Gobernación, el ministro lo devolverá integro en el plazo de diez día al alcalde, y éste en otro plazo de diez días anunciará su contratación en pública subasta por término de sesenta días.

Artículo 46°. Los que quieran tomar parte en la subasta consignarán en la Caja general de Depósitos ó en la Sucursal correspondiente, á la orden del Ayuntamiento, el depósito de 10 centésimas por 100 del importe total del presupuesto.

Artículo 47°. La subasta se verificará ante el Ayuntamiento y en el local que tuviere destinado á los actos de esta clase.

Ley Municipal

Artículo 48°. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales en el acto de la subasta, se señalará media hora para recibir de los firmantes de aquéllas las mejoras que quisieran hacer, y la adjudicación se hará en definitiva á la proposición que resulten más beneficiosa.

Artículo 49°. El Ayuntamiento recibirá las reclamaciones y protestas que se hicieren en el acto de la licitación. El alcalde unirá estas reclamaciones y protestas al acta de licitación, y con ella las elevará por conducto del gobernador de la provincia al ministro de la Gobernación dentro de los cinco días siguientes, al en que se hubiere verificado.

El ministro de la Gobernación, con audiencia del Consejo de Estado en pleno, otorgará ó denegará la aprobación de la subasta en los cinco días siguientes al de haber recibido informado el expediente. La resolución del ministro de la Gobernación será notificada á los interesados y publicada en la Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de la provincia. Contra las resoluciones del ministro de la Gobernación procede el recurso contencioso-administrativo.

Artículo 50°. Los autores de proyectos comprendidos en esta ley, si fueren aprobados por el ministro y sujetos á subasta, tendrán en esta el derecho de tanteo.

TÍTULO VI

De la ejecución de las obras.

Artículo 51°. El concesionario de las obras otorgará en los treinta días siguientes á la aprobación de la concesión, y á la orden del Ayuntamiento, el depósito definitivo del 5 por 100 del importe total del presupuesto en sustitución del provisional de 10 centésimas por 100, que le será devuelto, y otorgará la correspondiente escritura pública para asegurar con el depósito citado el cumplimiento de todas las obligaciones de la concesión. Si no fuese autor del proyecto, abonará los gastos, derechos y honorarios del mismo á su autor, y en todo caso los gastos de la precedente escritura y sus copias para las partes contratantes. Si el concesionario no cumplierse con alguna de estas obligaciones, perderá su depósito provisional de 10 centésimas 100.

Artículo 52°. Las expropiaciones serán pagadas necesariamente en el plazo de sesenta días, contados desde el mismo que se autorice la escritura que habrá de otorgarse para la realización de las obras necesarias, y siempre antes de realizar la expropiación, á no convenirse otra cosa entre el expropiante y el expropiado, en cuyo caso habrá de cumplirse lo que se conviniere. Si alguno de los acreedores se negase á recibir el importe de la indemnización que le corresponda por tener recurso pendiente ó por otro motivo legal, se consignará dicho importe en la Caja general de Depósitos ó en la Sucursal que corresponda hasta la terminación del incidente.

Artículo 53°. El Ayuntamiento tiene el derecho de inspeccionar las obras y de reclamar su exacto cumplimiento.

Artículos adicionales.

Primero. Cuando el Ayuntamiento lo solicite y lo autorice el ministro de la Gobernación, las disposiciones de esta ley serán aplicadas al saneamiento y mejora interior de poblaciones que no cuenten 30.000 almas.

Segundo. Los que tuviesen en curso de aprobación proyectos de saneamiento y mejora de los sujetos para lo sucesivo á las prescripciones de esta ley podrán someterlos á las mismas con los consiguientes beneficios, si desistiesen de la anterior tramitación legal.

Tercero. El Gobierno dictará las disposiciones oportunas para que en las poblaciones de más de 30.000 almas, á que esta ley se refiere, no se dé á las calles por motivo de alineación menos

Ley Municipal

anchura que la que tienen en la actualidad aunque la anchura no sea igual en toda la extensión de algunas de esas calles.

Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á 18 de Marzo de 1895. YO LA REINA REGENTE .- El ministro de la Gobernación, Trinitario Ruiz y Capdepón.

Las paginas en el libro original comprende de la 172 a 198 ambas inclusive.

LEY DE 26 DE JULIO DE 1892

ENSANCHES DE MADRID, BARCELONA Y POBLACIONES Á ELLA ACOGIDA.

Artículo 1º. Los ensanches de poblaciones de Madrid y Barcelona se regirán en lo sucesivo por la presente ley. Quedará derogada para ambos ensanches la ley de 22 de Diciembre de 1876.

Las disposiciones de la ley común sobre expropiación forzosa sólo podrán ser aplicadas en el ensanche en los casos no previstos por la presente ley y con el carácter de supletorias.

Artículo 2º. Se declaran obras de utilidad pública sin necesidad de los requisitos que para ello previene la ley de 10 de Enero de 1879 las que se refieren á apertura de calles, plazas, mercados, paseos, desvío de cauces y todas las demás obras que tengan por objeto el desarrollo del ensanche de Madrid y Barcelona.

Artículo 3º. Se mantiene la división en zonas de ensanche de Madrid en la forma actualmente establecida; se llevará cuenta separada de los ingresos y gastos correspondiente á cada una.

Artículo 4º. Se consideran legalmente abiertas como si para ello hubiese concurrido expreso acuerdo del Ayuntamiento sobre apertura é insistencia, todas las calles, plazas ó trayectos parciales en cuya explanación ó urbanización se hayan invertido hasta la fecha de la presente ley fondos del presupuesto especial del ensanche. En las mismas condiciones se considerará el llamado foso ó paseo de ronda del ensanche de Madrid, aun cuando en él no se hubiere hecho obra alguna de urbanización.

Para resolver las cuestiones sobre indemnizaciones de inmuebles que antes de ahora hubieren sido ocupados sin los requisitos legales para dichas calles, plazas ó trayectos se intentará la avenencia con los propietarios. A los que cedan gratuitamente la mitad del terreno que el Ayuntamiento haya ocupado para dichas vías se les reconocerá además de otras compensaciones, el derecho al interés de un 4 por 100 anual de la cantidad en que resulte valorada la otra mitad desde la fecha de la

Ley Municipal

ocupación hasta el pago. En defecto de avenencia se procederá con arreglo á lo que dispone el artículo 22, pero incluyendo y computando en la indemnización el mismo 4 por 100 anual por el tiempo en que hubiere estado desposeído el propietario. Si dentro de seis meses subsiguientes á la promulgación de esta ley no se hubiere iniciado el expediente para legitimar las ocupaciones efectuadas antes de ahora sin los requisitos legales, ó si el expediente se paralizase por igual espacio de tiempo, cualquiera que sea el motivo, se podrán exigir todas las responsabilidades contraídas por el Ayuntamiento ó por sus individuos, y el propietario perderá todo el derecho al expresado interés del 4 por 100 anual.

Artículo 5º. Para ejecutar obra de nueva explanación ó urbanización de calle, plaza ó trayecto parcial de dichas vías será necesario que, cumpliendo los artículos 19 y 20, con arreglo á las disposiciones de esta ley, quede expedita la ocupación de los terrenos necesarios.

El Ayuntamiento tendrá el derecho de expropiar la totalidad de la finca ó fincas que ocupen parcialmente la calle, plaza ó trayecto cuya apertura hubiese acordado si los dueños se niegan á ceder gratuitamente la mitad del terreno destinado á estas vías.

También tendrá el Ayuntamiento derecho á expropiación respecto de la parcela edificable del propietario ó los propietarios que se menguen á hacer en interés público ó común las mismas concesiones que otorguen otros terratenientes interesados en la vía que se intente abrir ó en la manzana cuyos solares se intenten regularizar, siempre que estos terratenientes representen más de la mitad del área que haya de ocuparse para la obra.

Artículo 6º. Será de cargo de los fondos del ensanche, y se considerará de interés preferente, el importe de las obras de su urbanización, las cuales comprenderán la apertura de calles, plazas ó trayectos que comuniquen y unan la población antigua con la moderna de aquél, la red de alcantarillado, la de instalación de agua, el afirmado y empedrado, las aceras, el alumbrado en las calles y plazas de las manzanas de casa contiguas á la población del interior y á la parte del ensanche en que se hayan establecido estos servicios ó en cuyas calles ó trozos existan edificaciones que comprendan, cuando menos, una longitud de 200 metros en cada una de las aceras.

También se satisfarán de los mencionados fondos las obras que tengan por objeto oponer defensas al mar y robarle terreno; las que sirvan para impedir las avenidas de los ríos, rieras y torrentes, proporcionando seguridad al mayor número de interesados, y todas las demás obras que tengan por objeto restablecer algún otro servicio de interés general.

Se podrá conceder igual preferencia á la apertura y urbanización de las vías públicas que propusieran los particulares, si de esta propuesta resultaran beneficiados los fondos especiales del ensanche.

Artículo 7º. El Ayuntamiento elegirá cinco concejales que, bajo la presidencia del alcalde, constituirán una Comisión especial encargada de entender en todos los asuntos propios del ensanche. Formarán igualmente parte de esta Comisión dos propietarios nombrados por la Asociación ó Asociaciones de los mismos que, legalmente constituidas existan en Madrid y Barcelona, y tres propietarios del ensanche, que en Madrid será uno por cada zona, elegidos por sorteo entre los cien mayores contribuyentes por territorial en el mismo ensanche.

El sorteo se verificará en sesión pública municipal, y no será válida la designación que recaiga en quien durante seis años anteriores haya desempeñado el cargo de concejal.

La aceptación del cargo de vocal de la clase de propietarios en la Comisión de Ensanche incapacita para ser elegido concejal durante cuatro años siguientes á su desempeño.

Estos vocales no tomarán parte en las deliberaciones referentes á sus propios asuntos, y su cargo será incompatible con cualquier otro que disfrute sueldo de la Provincia ó del Municipio.

Ley Municipal

La Comisión de Ensanche se renovará al propio tiempo que las demás permanentes del Ayuntamiento, y los concejales que formen parte de ella no podrán ser reelegidos para dicha Comisión sino cuatro años después de haber desempeñado el mismo cargo.

Artículo 8º. Compete á la Comisión entender y proponer al Ayuntamiento en cuantas reclamaciones se produzcan relativas al ensanche y en todo lo que al mismo se refiera, siendo apelables las resoluciones de la Corporación municipal, por el conducto ordinario, ante el señor ministro de la Gobernación, el cual resolverá después de haber oído a la Sección de Arquitectura de la Real Academia de San Fernando.

Artículo 9º. La Comisión propondrá asimismo con la debida anticipación los presupuestos ordinario, adicional y extraordinario del ensanche, informará sobre la cuenta anual, inspeccionará la inversión de fondos, entenderá en todos los asuntos de personal, alineaciones, obras, construcciones y los demás que son peculiares á su constitución, dando cuenta al Ayuntamiento.

Artículo 10º. Propondrá en el término de tres meses desde la promulgación de esta ley, pudiendo el Gobierno prorrogarlo por otros tres si existe justa causa, la solución que estime procedente, y el Ayuntamiento acordará dentro de otro plazo igual, y de la misma manera prorrogable, sobre todas las cuestiones pendientes acerca de ocupaciones ya efectuada de inmuebles, ó acerca de expropiaciones iniciadas entes de ahora, ateniéndose rigurosamente la Comisión para sus propuestas y el Ayuntamiento para sus resoluciones á la prioridad en la ocupación ó en la incoación de los expedientes. Respecto de los que se entablen en lo sucesivo, deberá guardarse el mismo turno riguroso de prioridad.

En iguales plazos se propondrá y resolverá lo necesario para el desarrollo de las obras de alcantarillado, alumbrado, afirmado, conducción de aguas potables y demás de urbanización.

Artículo 11º. Para el cumplimiento de las obligaciones á que se refiere el artículo anterior podrán los respectivos Ayuntamientos contratar empréstitos, cuyos intereses y amortización no podrán exceder del 70 por 100 del promedio de ingresos realizados en el quinquenio precedente. En las poblaciones que no hayan tenido durante cinco años presupuesto especial del ensanche el 70 por 100 se regulará por los ingresos efectivos del año ó los años transcurridos. Estos empréstitos no podrán ser gravados con ningún impuesto extraordinario.

Artículo 12º. También compete á la Comisión, á efectos de lo dispuesto en el artículo 5º, proponer al Ayuntamiento la apertura de calles y la insistencia en su apertura, debiendo la Corporación resolver en el término de veinte días desde que se le interese.

La negligencia en el cumplimiento de lo preceptuado anteriormente será causa para imponer en cada caso, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 183 d la ley Municipal, un multa de 125 peseta á cada uno de los concejales que no estuvieren en uso de su licencia ó dispensados del ejercicio de su cargo por motivo justificado.

Artículo 13º. Par atender á las obligaciones del ensanche se concede á los respectivos presupuestos especiales de Madrid y Barcelona.

Primero. El importe de la contribución territorial que durante treinta años deba satisfacer cada una de las fincas comprendidas en la zona general del mismo, deduciendo en cada año para el Estado una suma igual á la que percibía por aquel concepto en el año económico anterior al en que ambos ensanches comenzaron á disfrutar del expresado recurso.

Segundo. Los recargos ordinarios municipales durante igual periodo de treinta años.

Tercero. Un recargo extraordinario de 4 por 100 de la riqueza imponible sobre el cupo de la contribución territorial que satisfagan los edificios comprendidos en el ensanche.

Cuarto. El importe de las parcelas ó terrenos de la procedencia municipal que por virtud del plano del ensanche, y con arreglo á las leyes, se han de agregar á solares edificables.

Ley Municipal

Quinto. La cantidad anual que de fondos generales del Municipio fije el Ayuntamiento en sus presupuestos para subvenir á las necesidades del ensanche, debiendo tener en cuenta para su cuantía la importancia de éstas y la situación del Tesoro municipal, armonizado entre sí las dos cosas.

Artículo 14. El recargo extraordinario será exigible á cada finca durante veinticinco años, desde la fecha en que cada una haya comenzado ó deba comenzar á contribuir por territorial.

El período de treinta años de aplicación del cupo de la territorial á los presupuestos de ensanche de Madrid y Barcelona se contará: para as fincas existentes, desde el día mismo en que termine el período de veinticinco años señalados por los artículos 3º y 19 de la ley de 22 de Diciembre de 1876; y para las que después de la expresada fecha hayan quedado ó queden comprendidas en al legislación especial del ensanche, desde que cada una deba tributar por aquel concepto.

Se satisfarán con el presupuesto del ensanche las cantidades necesarias para el personal técnico y administrativo que preste sus servicios en el mismo.

Artículo. 15º. Los Ayuntamientos, bajo su responsabilidad, cuidarán de que los recursos que se conceden para dotar el presupuesto especial de ensanche no queden efectos como garantía de obligación alguna que no tenga por objeto el inmediato, directo y exclusivo beneficio de la zona respectiva.

Artículo 16º. El presupuesto y la cuenta anual del ensanche se formarán y aprobarán con sujeción á las mismas reglas que el presupuesto y cuentas municipales generales.

Artículo 17º. Será de cuenta del presupuesto general municipal el entretenimiento y conservación de los servicios y obras de cada calle, plaza ó paseo del ensanche desde que con los fondos especiales de éste se hay hecho la instalación de los servicios ú obras.

Son siempre cargo de dicho presupuesto general los gastos del derribo de las murallas ó tapias que circundaren la población antigua, los de nuevas murallas ó fosos de circunvalación del ensanche, los de paseos públicos y de ronda ú otras vías generales existentes con anterioridad á la publicación en la Gaceta del decreto autorizando el ensanche, y todos los demás que por su naturaleza deban reputarse hechos especialmente en beneficio d la población interior.

Si la obra fuese d las que redundan tanto en beneficio de la población del interior como el ensanche, fijará el Ayuntamiento la proporción en que debe afectar á los respectivos presupuestos.

Artículo 18º. Al contratar los empréstitos se podrán emitir tantas series de obligaciones cuantas sean las zonas en que éste dividida la general del ensanche, debiendo invertirse indefectiblemente el producto de cada serie en los gastos de la zona respectiva.

Los ingresos de cada una de éstas responderán especial y exclusivamente al pago de intereses y amortización de las obligaciones de su serie.

Artículo 19º. A los efectos del artículo 5º, y para tratar sobre cesión de la mitad de terrenos para vía pública y sobre la valuación de la otra mitad, se convocará á todos los propietarios de terrenos necesarios para la obra que tengan amillaradas sus fincas y cuyo domicilio fuese conocido, á una reunión que será presidida por el alcalde ó el concejal en quien delegue, y á la cual será citada la Comisión de Ensanche. Para que sea válida la reunión, la citación á dichos propietarios se hará de modo que conste que éstos ó sus representantes autorizados la han recibido; y, además, la convocatoria ser publicará con quince días de antelación en los periódicos oficiales de la provincia. Los acuerdos de la reunión solamente serán obligatorios para los que con su voto contribuyan á adoptarlos, según el acta firmada por los asistentes, á quienes, si la pidieran se entregará copia antes de recoger su firma.

Si alguno de los propietarios que en el acta formal parezcan como votantes de un acuerdo tuviera reclamación que hacer por vicios de la resolución ó de la Junta, habrá de entablarla dentro de los ocho días siguientes, pasados los cuales quedará ejecutoriado dicho acuerdo.

Ley Municipal

Artículo 20°. En el caso de no concurrir á la reunión propietarios ó representantes de la mitad á más del terreno necesario para la obra, se citará para una segunda en el plazo de treinta días observando las mismas formalidades que para la primera, y los que asistan deliberarán y acordarán.

En las reuniones á que se refieren este artículo y el anterior se podrá también deliberar y acordar sobre renuncia de los propietarios á su derecho de percibir la indemnización antes de ser ocupadas sus fincas.

Artículo 21°. Al aprobar el Ayuntamiento los acuerdos de la Junta de propietarios sobre los dos puntos expuestos la Corporación municipal acordará en el mismo acto la insistencia en la apertura de la calle, plaza, paseo ó trayecto parcial de que se trate.

Artículo 22°. Cuando por cualquier motivo se hubiera de proceder á la expropiación para la apertura de una calle, dicha expropiación se tramitará y consumará con arreglo á la ley de Expropiación forzosa si así lo pidiere el interesado, con las modificaciones que contienen los dos artículos siguientes.

En los demás casos se incoará por el Ayuntamiento el oportuno expediente, constituyéndolo con el documento que acredite la disconformidad, las certificaciones del Registro de la propiedad y demás documentos que ambas partes estimen convenientes, todo lo cual se remitirá al gobernador de la provincia, que lo complementará con los justificantes dl importe de la contribución territorial cuando la indemnización verse sobre edificios, la última escritura del solar ó de la finca, que el propietario deberá presentar y los demás datos que dicha autoridad estime oportuno reunir.

Así ultimado el expediente, se dará vista á los peritos, del Ayuntamiento y del propietario para que formulen sus respectivos dictámenes, decidiendo sobre ellos el gobernador. Para la valuación gubernativa se tendrá en cuenta, si el propietario se hubiere negado á la cesión gratuita de la mitad del terreno utilizable para vía pública, el valor que la propiedad tuviera antes de realizarse la apertura de la calle, plaza ó trayecto.

Artículo 23°. Cuando la Administración usará la facultad de ocupar el inmueble mediante depósito del importe de la indemnización según el dictamen del perito del propietario, el rédito abonable á éste será tan sólo el 4 por 100 anual de la cantidad en que definitivamente se regule la indemnización por el tiempo que transcurra hasta el pago desde la ocupación de la finca.

Artículo 24°. Serán computadas y satisfechas al expropiado las construcciones, plantaciones, mejoras y labores realizadas hasta la aprobación definitiva del proyecto para cuya realización sea necesario en todo ó en parte el inmueble.

También se computarán y abonarán aunque se realicen después si fueran de reconocida necesidad para conservar el inmueble ó continuar la aplicación y el uso á que estaba destinado.

Aprobado la proyecto, si el propietario desea hacer de su finca construcciones, lo pondrá en conocimiento de la Comisión de Ensanche á fin de que ésta, dentro del plazo improrrogable de un mes, pueda iniciar la expropiación de la parte comprendida en el proyecto, ó la total en su caso, con arreglo al último párrafo del artículo 5° de la presente ley. Transcurrido otro mes sin haber acordado el Ayuntamiento que se proceda á la expropiación parcial ó total, el propietario podrá construir en la parte edificable de sus finca sin que el Ayuntamiento le suscite dificultad alguna. Terminadas las construcciones, si el valor de las mismas excede del duplo de la indemnización que corresponda por la parte del inmueble destinado á vía pública, el propietario tendrá derecho á que la expropiación se formalice y consume sin demora y á un 4 por 100 anual de la cantidad que la indemnización importe desde la fecha en que se hubiere dado fin á las construcciones hasta que se verifique el pago.

Artículo 25°. Se declara que los que aparezcan en el Registro de la propiedad como dueños ó tengan inscrita la posesión, así como también el Estado, los tutores y protutores y las Corporaciones ó personas que tienen impedimento legal para vender los bienes que usufructúan ó administran,

Ley Municipal

quedan autorizados para ceder la porción de terreno destinada a vía pública en el ensanche en cambio de la condonación de que se hace mérito en esta ley, para convenir en su caso el precio de cualquiera expropiación, y para nombrar peritos y practicar las demás diligencias que fueran necesarias.

Podrán en su consecuencia, celebrar con los Ayuntamientos y con los demás propietarios interesados en el establecimiento de las nuevas vías todos los contratos que estimen convenientes sobre particulares relacionados con esta ley.

Si por su edad ó por otra circunstancia estuviere incapacitado para contratar el propietario de un terreno, se entenderá el Ayuntamiento con la persona que tenga su representación legal.

Si la propiedad estuviere en litigio y hubiese el demandante obtenido anotación preventiva en el Registro de la propiedad, el alcalde pasará comunicación al Juzgado ó Tribunal que conozca del asunto para que se haga saber á las partes la obligación en que están de manifestar ante dicho Juzgado ó Tribunal, y en término del tercer día, su conformidad con que se proceda á la avenencia con el Ayuntamiento, según lo preceptuado en la presente ley, ó de someterse á la expropiación forzosa.

Para uno ú otro caso se nombrará por el juzgado ó Tribunal correspondiente un procurador distinto de los del pleito, que, representando los derechos reconocidos y presuntos sobre la cosa litigiosa, actuará bajo las instrucciones judiciales en el expediente administrativo y en todas sus incidencias.

Si los litigantes se negasen á verificar la expresada manifestación ó no estuvieran conformes, se optará necesariamente por la expropiación forzosa, con arreglo á los trámites de esta ley; y tanto en este caso como en el de avenencia no se procederá por el Ayuntamiento á ocupar la finca en que el resultado de las diligencias administrativas, previo examen del expediente, haya sido aprobado judicialmente, oyendo á las partes y al ministerio fiscal.

Si el pleito terminase por sentencia firme ó por convenio definitivo antes que el expediente de expropiación forzosa ó voluntaria, cesará el procurador judicial en sus funciones, y el Ayuntamiento se entenderá para lo restante con quien resulte dueño de la cosa que fue objeto del litigio, siempre que haya entrado en posesión de la misma.

Cuando no sea conocido el propietario de un terreno ó se ignore su paradero, le hará saber el Ayuntamiento el acuerdo que haya tomado para formar la plaza ó abrir la calle que haya de ocupar parte de él por medio del Boletín Oficial de la provincia y de la Gaceta de Madrid, donde se publicarán dos edictos con treinta días de intervalo.

Si dentro de treinta días, á contar desde la publicación del último de estos edictos, nada expusiere ante el Ayuntamiento por sí ó por persona debidamente autorizada, se procederá á la expropiación, representando por todos los trámites de la misma el ministerio fiscal al propietario desconocido ó ausente. Depositada á disposición del Juzgado de primera instancia para el derecho habiente la cantidad en que se hubiere estimado en definitiva la indemnización, quedará expedita la ocupación del inmueble.

No teniendo el interesado inscrita su finca en el Registro de la propiedad en condiciones tales que la inscripción sea de dominio y eficaz contra tercero, ó siendo de las personas que no tienen libre facultad para vender los terrenos de cuya expropiación se trate, se depositará en la Caja general de Depósitos cualquiera cantidad que deba recibir, y no podrá disponer de ella sino con mandamiento judicial, previa la seguridad que deba dar con arreglo á las leyes á favor de sus menores ó representantes, ó de los terceros que puedan presentarse ejercitando cualquier derecho, á pesar de la inscripción del Registro de la propiedad.

Artículo 26º. Las transmisiones de la propiedad de los edificios que se construyan en la zona de ensanche sólo devengarán en favor de la Hacienda durante los seis primeros años la mitad de los

Ley Municipal

derechos que correspondan por disposición general, á contar para cada inmueble desde la fecha en que comience á tributar por territorial.

Artículo 27º. Los expedientes comenzados antes de 1º de Junio de este año para ocupar ó expropiar inmuebles se registrarán por la ley de Ensanche de 1876 si los interesados optasen por ella.

Los expedientes de la misma índole que se incoen en adelante se ajustarán á la presente ley, aunque la obra esté proyectada, aprobada ó iniciada con anterioridad.

Los demás expedientes que estén en tramitación serán ultimados adaptándolos en cuanto fuese posible á las reglas marcadas en esta ley.

Artículo 28º. A las empresas y particulares que cedan gratuitamente la totalidad de los terrenos necesarios para una calle, plaza, paseo ó trayecto parcial costeando además los desmontes, construyendo las alcantarillas, y estableciendo los servicios de aceras, pavimentos y alumbrado, se les condonará el importe de la contribución territorial y recargos municipales ordinario y extraordinario que hubiese de satisfacer sus fincas en la vía de que se trate por el tiempo y en la forma que el Ayuntamiento determine, con aprobación del Gobierno en Consejo de ministros.

A los propietarios ó Empresas que cediendo gratuitamente la totalidad del terreno de su pertenencia destinado á vía pública costearan algunos de aquellos servicios, se les condonarán los recargos ordinario y extraordinario correspondientes á sus respectivas fincas por el número de años que el Ayuntamiento acuerde, con aprobación del ministro de la Gobernación.

Al propietario que sólo ceda gratuitamente el terreno para vía pública se le condonará en la propia forma prescrita para el caso anterior el recargo extraordinario por el número de años que el Ayuntamiento determine, siempre que la cesión llegue á la mitad de lo que le pertenezca en la vía de que se trate.

Artículo 29º. El Ayuntamiento de Madrid presentará por duplicado al Ministerio de la Gobernación dentro del plazo de seis meses desde la publicación de esta ley los estudios de alineación y rasantes para el plano definitivo del ensanche, tomando por base el anteproyecto aprobado en 1860 y las modificaciones propuestas en 1884.

En igual plazo se presentarán las reformas parciales y ampliaciones que en el plano general de ensanche de Barcelona, aprobado en 1857, se hayan introducido y carezcan de aquel requisito.

Aprobados que sean dichos estudios y reformas, oído al parecer de la Sección de Arquitectura de la Real Academia de San Fernando, no podrán variarse los respectivos planos generales sin oír antes á la mencionada Sección de Arquitectura, al Ayuntamiento y á los propietarios á quienes interese.

El Gobierno publicará su resolución en la Gaceta de Madrid.

Artículo 30º. El Gobierno de S.M.- oído el Consejo de Estado en pleno, podrán aplicar las disposiciones de la presente ley á las poblaciones que se encuentren en circunstancias análogas á Madrid y Barcelona.

Artículo 31º. El ministro de la Gobernación, dentro del término de tres meses contados desde la publicación de esta ley, dictará un reglamento en armonía con las disposiciones que en ella se consignan.

En el libro original esta ley ocupa las páginas 198 a 220 ambas inclusive.

ARTÍCULO 10 DEL REAL DECRETO DE 7 DE JUNIO DE 1891

Las defraudaciones del impuesto sobre el uso de pesas y medidas legales serán castigadas administrativamente por el alcalde mediante un juicio verbal en que serán partes el regidor sindico, el arrendatario del impuesto, si lo hubiere, ó en su defecto, el empleado denunciante si se recaudase por administración, y denunciado como defraudador.

La penalidad consistirá en el pago de los derechos defraudados y en una multa que no podrá exceder del Limite establecido en el artículo 77 de la ley Municipal.

Dicha penalidad recaerá sobre el obligado al pago del impuesto; pero la multa será extensiva á quien, hallándose establecido el arbitrio por el Ayuntamiento, hubiere alquilado sus instrumentos de pesar y medir, ó prestado este servicio con útiles distintos de los del arrendatario y sin el permiso escrito de éste.

Contra el fallo administrativo del alcalde no cabrá otro recurso que el de alzada, que deberá interponerse ante el gobernadores por conducto del alcalde en término de diez días, cuya autoridad habrá de resolverlo en un plazo de veinte días, oyendo á la Comisión provincial.

El pago de los derechos defraudados se hará siempre en metálico.

El 50 por 100 del importe de la multa impuesta como penalidad se abonará en metálico al denunciador, y el otro 50 por 100 se hará efectivo en papel especial de multas municipales donde el Ayuntamiento lo hubiere adquirido de la Hacienda, ó en su defecto, en el de pagos al Estado.

REAL DECRETO DE 24 DE ENERO DE 1905

Instrucción para la contratación de servicios provinciales y municipales.

Artículo 1º. Los contratos que celebren las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos para toda clase de servicios, obras, ventas y arrendamientos, y en general todos aquellos que hayan de producir gasto ó ingreso en fondos provinciales ó municipales, se celebrarán por remate, previa subasta pública, verificándose siempre las licitaciones por medio de pliegos cerrados, y sujetándose las proposiciones que en ellas se hagan al modelo prescrito para cada caso.

Se exceptúan únicamente de las formalidades de subasta los contratos que se enumeran en los artículos 40 y 41.

Artículo 2º. Las Diputaciones y Ayuntamientos formarán los proyectos, los pliegos de condiciones facultativas y económicas y los presupuestos de las obras ó servicios, ó fijarán el precio que haya de servir de tipo para la subasta, ateniéndose á lo que en cada caso y según la naturaleza del contrato prevengan las leyes ó disposiciones vigentes; poniendo especial cuidado cuando se trate de vías de comunicación ó de cualquiera otra clase de obras en cumplir lo prevenido en las disposiciones que se hallen vigentes en lo relativo á zonas marítimas y militar de costas y fronteras.

Ley Municipal

Si las obras de referencia se hallaren enclavadas dentro de algún de dichas zonas, ó en su desarrollo se internasen en la zona ó la cruzasen, á todo proyecto de obras deberá acompañarse documento fehaciente en que se haga constar por la autoridad superior militar de la provincia que pueden aquéllas emprenderse por no dificultar el plan general de defensa.

Por ningún concepto las Corporaciones podrán dividir la materia de contratación en partes ó grupos con el fin de que la cuantía no llegue á la precisa para la celebración de la subasta ó concurso cuando se trate de objetos de una misma clase y de obras para un servicio.

Artículo 3º. Cuando el contrato haya d obligar á la Diputación ó Ayuntamiento al pago de alguna cantidad, no podrá anunciarse la subasta si no hay en el presupuesto ordinario el crédito suficiente para verificarlo, ó sin que haya sido previamente formado y aprobado el presupuesto extraordinario que para ello sea preciso.

La anterior prohibición respecto á los anuncios de las subastas no comprende á los créditos para los servicios de los establecimientos de beneficencia por que, siendo obligatorios dichos servicios, los aludidos créditos, así como los demás referentes á servicios también obligatorios, tienen siempre por ministerio de la ley su consignación en los presupuestos ordinarios de las Diputaciones y de los Ayuntamientos, y en su virtud ostentan el carácter de aprobados.

Si el contratante fuere un Ayuntamiento y los pagos hubiesen de verificarse con fondos dl presupuesto ordinario durante el ejercicio de varios presupuestos, las condiciones en que se fijen las épocas y cantidades habrán de ser aprobadas antes de anunciarse la subasta, con arreglo á las disposiciones vigentes sobre el particular.

Artículo 4º. Cuando la subasta sea para contratos que necesiten para su validez la aprobación provincial, del gobernador de la provincia ó del Gobierno, los pliegos de condiciones habrán de ser previamente aprobados por la Corporación ó autoridad á quien corresponda autorizar el contrato. Las Corporaciones y autoridades provinciales habrán de resolver dentro de un plazo de quince días, y el Gobierno dentro de treinta, contratos desde el siguiente á la fecha de la remisión del proyecto, que se hará constar en el expediente de subasta. Si transcurrieren respectivamente estos plazos sin que haya recaído resolución, se tendrán por aprobados los pliegos de condiciones remitidos y podrá anunciarse la subasta, siendo válido en cuanto se ajusten á ellos el contrato que se celebre.

En todos los casos á que se refiere este artículo la Corporación contratante, dentro de los ocho días siguientes á la formalización del contrato con el rematante, remitirá una copia certificada del mismo á la Corporación ó autoridad que expresa ó tácitamente haya aprobado los pliegos de condiciones, la cual, si no encontrare conforme aquél con éstos, dictará la resolución que proceda y exigirá á el individuo de la Corporación contratante á quienes sea imputable la falta la responsabilidad en que haya incurrido, sin perjuicio del derecho del rematante para reclamar de los mismos la indemnización de perjuicios á que haya lugar si se anulase el contrato.

Artículo 5º. Toda subasta se anunciará con treinta días, por lo menos, de anticipación, por medio de anuncios que permanecerán constantemente expuestos al público durante ese plazo en los lugares que las diputaciones ó Ayuntamientos tengan ordinariamente destinados para la fijación de edictos y anuncios, cuidando de renovarlos si fuera necesario.

Estos anuncios se publicarán necesariamente en todos los casos en el Boletín Oficial de la provincia, y también en la Gaceta de Madrid cuando exceda de 50.000 pesetas el gasto ó ingreso total que haya de producir el contrato, pudiendo además publicarse en periódicos no oficiales de gran circulación cuando sea conveniente, á juicio de la Corporación contratante.

Este cuidará, bajo su responsabilidad, de que los anuncios debidos queden fijados y publicados antes de los treinta días anteriores al señalado para la subasta, y hará constar el cumplimiento de este requisito por medio de certificación puesta en el expediente de subasta, ó uniendo á éste un ejemplar de los periódicos oficiales en que se inserte el anuncio.

Ley Municipal

Cuando el importe del contrato exceda de 5.000 pesetas las Diputaciones y los Ayuntamientos podrán acortar el plazo de que trata este artículo, pero sin que nunca baje de diez días.

Artículo 6º.- Las subastas para contratos provinciales se celebrarán en la capital de la provincia, bajo la presidencia del gobernador ó del diputado de la comisión provincial en quien delegue, con asistencia siempre de otro diputado designado por la Diputación.

Las de contratos municipales se celebrarán en la capital del término, bajo la presidencia del alcalde ó del teniente concejal en quien delegue, con la asistencia siempre de otro concejal designado por el Ayuntamiento.

El secretario de la Corporación podrá asistir para dar fe del acto cuando el importe del contrato no exceda de 15.000 pesetas; pero si no pudiese asistir personalmente, y en todos los casos en que el importe del contrato exceda en aquella cantidad, la subasta habrá de celebrarse necesariamente ante notario, á no ser que no le hubiere en el pueblo ó que los que hubiere se incapaciten después de anunciada la subasta; en cuyo caso, como asimismo en el que no se presentare el notario designado, ó su sustituto, al ser la hora señalada para la subasta, se celebrará ésta, levantándose acta administrativa de todo lo ocurrido por el presidente, que la firmará en unión de los demás que constituyan la Mesa y de aquellos otros, en su caso, á que se refiere la regla 13 de los artículos 17 y 18 de esta instrucción. Esta acta quedará unida al expediente de subasta, y de ella deberán expedirse las certificaciones que sean necesarias ó se exijan.

La no asistencia del notario ó del sustituto, ó la de otra cualquiera de las personas que deban asistir al acto de la subasta, se entenderá siempre que es sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiesen haber incurrido por no justificar debidamente la expresada falta de asistencia.

Artículo 7º. Siempre que el total de ingreso ó gasto que haya de producir el contrato exceda de 125.000 pesetas habrán de celebrarse dos subastas simultáneas (1): una en el lugar donde resida la Corporación interesada, y del modo prevenido en el artículo anterior, y otra en Madrid, en la Dirección general d Administración, bajo la presidencia del funcionario que designe el ministro de la Gobernación, asistido de un auxiliar de la Sección ó Negociado correspondiente y del notario que al efecto haya sido designado, debiendo procederse con arreglo á lo prevenido en el artículo anterior en el caso de que al ser la hora señalada para la subasta no se presente el notario ó su sustituto á dar fe del acto.

Artículo 8º. (2) En los pliegos de condiciones se consignará necesariamente:

Primero. El tipo ó precio que haya de servir de base para la subasta y el modelo de proposición, expresando la forma en que hayan de hacerse las mejoras con relación al tipo señalado.

Segundo. La fianza provisional que habrán de constituir los licitadores para concurrir á la subasta, y la definitiva que haya de prestar el rematante, teniendo en cuenta lo prevenido en el artículo 12.

Tercero. Las obligaciones que contraiga ó derechos que adquiera el rematante.

Cuarto. Las obligaciones que contraiga ó derechos que adquiera la Corporación interesada.

Quinto. Las multas que puedan imponerse al rematante y las responsabilidades en que incurra por falta de cumplimiento de lo estipulado, determinando la acción que haya de ejercitar la Corporación contratante sobre las garantías y los medios por que se haya de compeler al rematante á cumplir sus obligaciones y á que resarza los perjuicios que irroge.

Sexto. Los casos en que el rematante pueda pedir aumento ó disminución de precio ó rescisión del contrato, ó la advertencia de que éste se hace á riesgo y ventura para el rematante, sin que por ninguna causa pueda pedir alteración dl precio ó rescisión.

(1) Reformado por el artículo 17 del Real decreto de 15 de Noviembre de 1909.

(2) Véase la Real orden de 7 de Febrero de 1906, que se inserta á continuación, por la cual se aclara el artículo que se anota y el 23.

Ley Municipal

Séptimo. La sumisión á los Tribunales del domicilio de la Corporación interesada que sean competentes para conocer en las cuestiones que puedan suscitarse.

Octavo. La obligación del rematante de pagar los anuncios, honorarios devengados y suplidos adelantados por el notario ó notarios que autoricen la subasta, escrituras, y en general toda clase de gastos que ocasionen la subasta y formalización del contrato.

Noveno. El nombre dl Letrado ó letrados designados por la Corporación contratante para el bastanteo de poderes á que se refiere el artículo 15.

Décimo. El haber transcurrido el plazo de que se trata el artículo 29, expresando las reclamaciones producidas y lo resuelto respecto á las mismas por la Corporación contratante, por el Gobierno de la provincia ó por el Ministro de la Gobernación en su caso, ó la declaración de no haberse producido ninguna de aquéllas.

Undécimo. Cuando las subastas se refieran á la ejecución de obras en los pliegos de condiciones habrá de consignarse necesariamente la obligación del rematante, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto de 20 de Junio de 1902, de realizar un contrato con los obreros que hayan de ocuparse en la obra. En este contrato habrá de ocuparse en la obra. En este contrato habrá de quedar precisamente estipulado la duración del mismo, los requisitos para su denuncia ó suspensión, el número de horas de trabajo y el precio del jornal. Para prevenir el incumplimiento de este precepto por parte de las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos, dichas Corporaciones remitirán, siempre que se trate de realización de obras, al gobernador de la provincia respectiva, los pliegos de condiciones para la subastas que no sean dobles y simultáneas, con arreglo al artículo 7º, de esta instrucción. El gobernador las aprobará siempre que conste en los mismos la obligación que queda expresada; si se hubiere omitido, negará la aprobación, sin la que no podrán anunciarse ni celebrarse las subastas. En caso de que las Corporaciones referidas omitan remitir al gobernador los pliegos expresados y anunciasen y celebrasen alguna subasta de la de referencia sin la aprobación de aquella autoridad, ésta usará de los medios legales á su alcance para exigir las debidas responsabilidades.

En todos aquellos contratos para ejecución de obras que hayan de celebrarse por administración, sin necesidad de la previa subasta, según para el caso se preceptúa en esta instrucción, se dará cuenta por las Corporaciones interesadas al gobernador de la provincia de haberse celebrado el contrato especial que queda preceptuado. Toda infracción dará motivo á las consiguientes responsabilidades.

Duodécimo. Cuando la subasta se refiera á cualquiera servicio que tenga por objeto llenar necesidades permanentes deberá consignarse la condición de que en término del contrato se entenderá este prorrogado hasta que, realizadas dos subastas dentro de los plazos señalados en el artículo 29 al objeto de contratarle nuevamente, sin que en ella hubiese rematante, se halle la Corporación en las condiciones de que tata el apartado 5º el artículo 41 para obtener la excepción reglamentaria.

Decimotercero. Si la subasta fuese para contrato de duración mayor de un año, deberá consignarse, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 30, haberse acordado por la Diputación provincial ó por la Junta municipal, según sea provincial ó municipal la Corporación contratante, la distribución de la cuantía del contrato en el número de presupuestos anuales necesarios.

Artículo 9º. El anuncio habrá de contener los pliegos de condiciones del contrato siempre que la cuantía total de éste exceda de 50.000 pesetas.

Si no excediere, bastará que se haga la designación del sitio en que estén de manifiesto, así como las Memorias, modelos, presupuestos, planos y demás objetos ó datos cuyo conocimiento sea necesario para la debida inteligencia de las condiciones, expresándose además el objeto de la subasta, el lugar, el día y la hora en que haya de celebrarse, la autoridad que deba presidir el acto, el tipo de subasta, el modelo á que hayan de ajustarse las proposiciones, y el plazo y lugares en que podrán presentarse

Ley Municipal

éstas; las condiciones y depósito provisional que exijan á los licitadores, expresando siempre la cantidad líquida á que este último ascienda; la fianza definitiva que haya de prestar el rematante; la duración del contrato y la época ó plazos en que hayan de verificarse los pagos ó hay de prestarse el servicio ó realizarse la obra que sea objeto del mismo; el nombre del letrado ó letrados designados por la Corporación contratante para el bastanteo de poderes de que hable el artículo 15, y el haber transcurrido el plazo fijado por el artículo 29, expresando las reclamaciones producidas y lo resuelto respecto á las mismas por la Corporación contratante, por el Gobierno de la provincia, por el Ministerio de la Gobernación ó por el Tribunal correspondiente de la jurisdicción contencioso-administrativa, según casos.

Cuando se trate de anuncios de subastas cuyo objeto sea la realización de obras, cuyo objeto sea la realización de obras, contendrá la manifestación d hallarse consignada en los pliegos de condiciones la obligación del concesionario respecto de realizar el contrato con los obreros.

Artículo 10º. Los pliegos de condiciones y documentos originales estarán siempre n siempre de manifiesto en poder de la Corporación contratante, y en los casos á que se refiere el artículo7º, se podrán de manifiesto copias de los mismos autorizadas por el secretario de aquélla, en la Dirección correspondientes del Ministerio de la Gobernación, haciéndolo así saber en los anuncios.

Artículo 11º. No podrán ser contratistas:

Primero. Los que con arreglo á las leyes civiles carezcan de capacidades para contratar por sí, sin intervención de otra persona.

Segundo. Los que se hallen procesados criminalmente, si hubiere recaído contra ellos auto de prisión, ó los meramente procesados por delitos de falsificación, estafa, robo, hurto y demás que supongan ataque á la propiedad.

Tercero. Los que estuvieren fallidos ó en suspensión de pagos ó con sus bienes intervenidos.

Cuarto. Los que estuvieren apremiados como deudores al Estado ó á cualquier Provincia ó Municipio en concepto de segundos contribuyentes.

Quinto. Los que hayan sido inhabilitados administrativamente para tomar á su cargo servicios ú obras públicas por falta de cumplimiento á contratos anteriores.

Sexto. En los contratos que celebren los Ayuntamientos, los concejales, el secretario, contador y empleados dependientes del Ayuntamiento contratante, los diputados provinciales, secretario, contador y depositario de la Provincia respectiva; y en los contratos que celebren las Diputaciones, los diputados provinciales, el secretario, el contador, depositario y empleados de la Diputación contratante.

Artículo 12º. Los licitadores que concurran á toda clase de subastas para contratos provinciales ó municipales deberán constituir previamente en depósito, como fianza provisional, la cantidad expresada en los anuncios, que habrá de corresponder al 5 por 100 del importe ó valor total de lo que sea objeto del contrato, y el rematante prestará la fianza definitiva que se hay señalado, la cual no podrá bajar del 10 por 100 ni exceder del 20 por 100 del mismo importe ó valor total de lo que sea objeto del contrato.

Cuando la materia de éste sea un servicio continuado cuya duración exceda de un año, el depósito previo para tomar parte en la subasta y la fianza definitiva que ha de prestar el rematante serán el 5 por 100 y el 10 por 100, respectivamente, de la cantidad anual que la Corporación contratante haya de satisfacer ó percibir por el servicio de que se trate.

Si el contrato tiene por objeto la cobranza de un contingente provincial, el tipo de la subasta, que, como en todos los contratos de servicios continuados de duración mayor de un año, ha de ser el importe de una anualidad, se fijará sacando el promedio de lo recaudado por el concepto durante el último quinquenio; y las fianzas á que se refiere el segundo párrafo de este artículo se determinarán con relación á lo que importe un trimestre de la anualidad fijada para el tipo de la subasta.

Ley Municipal

No será necesaria la fianza definitiva en los contratos de compra ó venta al contado, ni tampoco en los de venta á plazos que efectúen las Corporaciones provinciales ó municipales, siempre que el inmueble quede afecto en garantía de la Corporación que enajena para responder del importe de los plazos vencidos ó por vencer, hasta el completo pago de la cosa vendida.

Las fianzas habrán de constituirse en metálico ó en valores ó signos de crédito del estado, la Provincia y el Municipio, y también en los créditos reconocidos y liquidados de que habla el artículo 13, y por el tipo y en la forma y condiciones que dicho artículo 13 establece.

Artículo 13º.- Los efectos públicos de cargo del Estado se admitirán en la fianza provisionales y definitivas, sean los que fueren aquellos, al precio de cotización oficial del día en que se constituya la fianza.

Cuando alguna Diputación provincial ó Ayuntamiento tenga emitidas obligaciones, láminas ó algún otro valor ó signo de crédito representativo de deuda que sea de su exclusiva cuenta, admitirá éstos por todo su valor nominal en las fianzas provisional y definitiva de los contratos que intente celebrar ó celebre.

Las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos admitirán además en las fianzas expresadas los créditos reconocidos y liquidados á favor de los acreedores directos de las expresadas Corporaciones, siempre que estén consignados en sus respectivos presupuestos aprobados y sean dichos acreedores los que hayan de constituir las fianzas como postores ó rematantes en las indicadas subastas.

Cuando la fianza definitiva se halle constituida en efectos públicos de cargo del Estado, los rematantes podrán retirar el exceso ó habrán de reponer la diferencia siempre que el precio de cotización de los efectos depositados sufra durante el contrato un aumento ó disminución que exceda del 5 por 100 respecto al del día en que se haya constituido la fianza.

Si debiendo reponer no lo hicieron dentro de los diez días requeridos para ello, la Corporación contratante podrá dar por rescindido el contrato, con los efectos del artículo 24.

Siempre que las fianzas se hallen constituidas en efectos públicos ó en cualquiera de los valores ó signos de crédito expresados, se facilitarán al rematante los medios de percibir los intereses que devenguen.

Los efectos públicos ó valores en que se hay constituido la fianza podrán ser sustituidos en todo ó en parte por metálico ó por otros efectos públicos ó valores, apreciándolos siempre del modo prevenido en este artículo.

Artículo 14º. Los depósitos provisionales para optar á las subastas podrán hacerse en la Caja de la Corporación contratante, en la general de Depósitos ó en sus sucursales, cualquiera que sea el punto en que se celebre la subasta; pero si se ofreciesen dudas sobre la autenticidad del resguardo, no se hará la adjudicación definitiva del remate hasta tanto que se desvanezcan.

Las fianzas definitivas de los rematantes habrán de situarse, de cualquiera de los modos indicados, dentro de la provincia á que corresponda la Corporación contratante, pudiendo exigir dichos rematantes para constituir la expresada fianza que al efecto se tome en cuenta el depósito provincial que hubiesen constituido.

Cuando las fianzas se constituyan en efectos públicos de cargo del Estado y en la Caja de la Corporación contratante habrá de acompañarse la póliza de adquisición de aquellos.

Artículo 15º. A toda subasta podrán concurrir los interesados por sí ó representados por otra persona con el poder correspondiente para ello, declarando bastante, á costa del licitador, por un letrado que l Corporación contratante designe.

Artículo 16º. Siempre que con arreglo á lo dispuesto en el artículo 7º haya que celebrar la subasta doble y simultáneamente ante la Corporación interesada y ante la Dirección general de Administración en el Ministerio de la Gobernación el anuncio de la subasta deberá remitirse sin

Ley Municipal

fijar en él el día y hora en que aquélla haya de tener lugar, dejando en blanco en el espacio suficiente á tal designación, que se hará por el Centro directivo antes citado.

Artículo 17º. En la celebración de las subastas en que el gasto ó ingreso total que haya de producir el contrato no exceda de 25.000 pesetas se observarán las siguientes reglas:

Primera. El acto dará principio en el día, hora y sitio designado en los anuncios, constituyéndose la Mesa del modo prevenido en el artículo 6º.

Segunda. Inmediatamente se dará lectura de este artículo, del anuncio de la subasta y de los pliegos de condiciones, si no se hubiesen insertado en él.

Tercero. Terminada la lectura de estos documentos, el presidente declarará abierta la licitación por un plazo de media hora, y advertirá á los concurrentes que durante él pueden pedir las explicaciones que estimen necesarias sobre las condiciones de la subasta; en la inteligencia de que, pasado el plazo y abierto el primer pliego, no se dará explicación alguna.

Cuarta. Durante el expresado plazo de media hora los licitadores entregarán al presidente bajo sobre cerrado los pliegos que contengan sus proposiciones, y en el anverso del citado sobre deberá hallarse escrito lo siguiente: “ Proposición para optar á la subasta de ...” (y á continuación el objeto de la misma).

El presidente los recibirá, señalando cada pliego con el número que le corresponda por el orden de presentación, y los dejará sobre la mesa á la vista del público.

Quinta. Dentro de los referidos pliegos deberá hallarse, el resguardo que acredite la constitución de la fianza provisional, y la cédula de vecindad del licitador. Cuando un licitador presente más de pliego bastará que en cualquiera de los que presente acompañe estos dos últimos documentos.

Sexta. Una vez entregados al presidente los pliegos no podrán retirarse por ningún motivo.

Séptima. Cinco minutos antes de expirar el plazo de media hora se anunciará en alta voz por un alguacil ó portero, de orden de presidente, que falta sólo ese tiempo para terminar el plazo de admisión de pliegos, y al expirar la media hora el presidente lo declarará terminado.

Octava. Inmediatamente el presidente abrirá el primer pliego presentado y dará lectura en alta voz á la proposición en él contenida, y sucesivamente abrirá y leerá los demás por el orden de numeración que se les haya dado al presentarlos.

Novena. En el acto mismo de la apertura el presidente declarará desechadas las proposiciones que no fueren acompañadas del resguardo de depósitos y de la cédula de vecindad del licitador, fuera del caso previsto en la regla 5ª, y las que no se ajustasen al modelo, siempre que las diferencias puedan producir, á su juicio, duda racional sobre la persona del licitador, sobre el precio ó sobre el compromiso que contraiga, sin que, en caso de existir esa duda, deba admitirse la proposición, aunque el licitador manifieste que está conforme con que se entienda redactada con estricta sujeción al modelo.

Décima. Terminada la lectura de todos los pliegos presentados, el presidente adjudicará provisionalmente el remate al autor de la proposición más ventajosa entre las admitidas.

Undécima. Si entre las admitidas hubiese dos ó más proposiciones iguales más ventajosas que la restantes, se hará la adjudicación provisional del remate a favor de aquel cuyo pliego tenga el número más bajo.

Duodécima. Hecha la adjudicación provisional, el presidente devolverá sus cédulas de vecindad á todos los licitadores, tomando nota de la fecha y número de la de cada uno, y unirá al expediente de subasta todos los resguardos de depósito y todas las proposiciones presentadas, incluso las que hubiere declarado desechadas, sin más excepción que las correspondientes á los licitadores que estén conformes en que queden desechadas sus proposiciones, los cuales podrán recogerlas en el acto, con los resguardos de depósito correspondientes, entendiéndose que renuncian con esto á todo derecho á la adjudicación definitiva del remate.

Ley Municipal

No obstante, el presidente podrá entregar al notario autorizante del acto, para su custodia, el resguardo ó resguardos de depósito provisional de que se ha hecho mérito, los cuales no podrán ser devueltos por dicho notario á los interesados sin orden previa del presidente de la Corporación provincial ó municipal, según sea una ú otra ante quien se haya celebrado la subasta de referencia.

Décimatercera. Todo lo que ocurra se consignará por el notario ó secretario autorizante en el acta de la subasta, según sea un ú otro el que autorice, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 6º, en cuya acta se hará constar necesariamente el número total de proposiciones el número total de proposiciones presentadas, con los precios y nombres de los licitadores, con la expresión de las admitidas y desechadas, las causas por que hayan sido desechadas, éstas, expresándose que licitadores se han conformado con la declaración, recogiendo sus proposiciones y resguardos, las protestas ó reclamaciones que sólo en cuanto á infracciones de las reglas y preceptos establecidos por esta instrucción, á partir de la fecha del anuncio de la subasta en los periódicos oficiales y en cuanto al acto mismo de la subasta, se hubieren hecho durante ella, y la declaración del presidente respecto á la adjudicación provisional.

Esta acta, que habrá de extenderse sin levantar la sesión, será leída en alta voz por el actuario, y adicionadas á continuación las protestas ó reclamaciones que sobre su contenido hicieren los concurrentes, será firmada por las personas que constituyan la Mesa y los reclamantes que quisieren, y autorizada por el actuario.

Artículo 18º. Para la celebración de las subastas en que el gasto ó ingreso total que haya de producir el contrato exceda de 25.000 pesetas se observarán las siguientes reglas:

Primera. El plazo en que podrán presentarse los pliegos de proposición, teniendo en cuenta que según el párrafo 1º del artículo 5º debe toda subasta anunciarse con treinta días cuando menos de antelación, será: desde el día siguiente al en que se publique el anuncio en el Boletín Oficial de la provincia respectiva hasta el anterior al en que haya de celebrarse la licitación en aquellas que con arreglo á lo dispuesto en el párrafo 2º del expresado artículo 5º sólo han de anunciarse en dicho Boletín Oficial; y desde el día siguiente al en que se publique el anuncio en la Gaceta de Madrid hasta el referido día anterior al en que haya de celebrarse la licitación en aquellas otras en que, además de en el Boletín Oficial, han de insertarse también en al Gaceta de Madrid, con sujeción á lo dispuesto en el citado párrafo 2º del artículo 2º del artículo 5º de esta instrucción.

Las horas en que durante el mencionado plazo podrán presentarse los pliegos de proposición serán las que señale al efecto la Corporación contratante para los que se presenten en sus oficinas; y en el caso de doble y simultánea subasta, las que designe además la Dirección general de Administración para los pliegos que se depositen en dicho Centro directivo.

Segunda. A todo pliego de proposición deberá acompañar por separado el resguardo que acredite la constitución del depósito provisional prevenido para tomar parte en la subasta, siendo rechazado en el acto de la entrega todo pliego cuyo resguardo respectivo no se ajuste á lo preceptuado en el último párrafo del artículo 12 de esta instrucción.

Tercera. Los referidos pliegos de proposición deberán entregarse bajo sobre cerrado, á satisfacción del presentador, á cuyo efecto podrá lacrar, precintar ó adoptar cuantas medidas de seguridad estime necesarias á su derecho en todos y cada uno de los sobres en que encierre su proposición; y en el anverso del que contenga y encierre todos los demás deberá hallarse escrito y firmado por el licitador lo siguiente: "Proposición para optar á la subasta de ..." (y á continuación el objeto d la misma).

En el reverso, y cruzando las líneas del cierre, se hará constar por el presentador y por el funcionario que reciba el pliego, bajo la firma de ambos, que el pliego se entrega intacto, ó las circunstancias que para su garantía juzgue conveniente cada una de las dos citadas personalidades

Ley Municipal

consignar, pudiendo ambas además hacer concurrir al acto de la entrega y recepción del pliego los testigos que tengan por conveniente.

Como quiera que de la entrega y recepción del pliego ha de extenderse necesariamente el oportuno recibo, que por lo que en él ha de consignarse tendrá el carácter de certificación, el presentador, en el acto de la entrega del pliego y del resguardo del depósito provisional, entregará también el timbre correspondiente que con arreglo á la ley de este impuesto haya de colocarse en el mencionado recibo certificación. Si el presentador no facilite el referido timbre, no se admitirá en modo alguno el pliego.

Cuarta. En la Sección correspondiente de la Dirección general de Administración y en la oficina que al efecto designen las Corporaciones provinciales y municipales se llevará un libro registro especial para el de los pliegos de proposición que con arreglo á las reglas anteriores pueden presentarse, haciéndose constar en el asiento el día y la hora de la entrega, el número de sellos de lacre que contenga, con expresión del color de los mismos, y el nombre y domicilio del presentador, á cuyo efecto exhibirá su cédula personal corriente; pudiendo consignarse además todas aquellas circunstancias que el presentador exija ó el funcionario que efectúe la recepción crea conveniente para la mejor identificación y seguridad del pliego.

Verificando el mencionado asiento, se señalará el pliego con el número de orden que le corresponda respecto á los presentados para la subasta á que se refiera, y se entregará del mismo y del resguardo del depósito provisional al interesado, aunque éste no le pidiese, el oportuno recibo á que alude el último párrafo de la regla 3ª. En dicho recibo deberán hacerse constar cuantas circunstancias constituyan el asiento verificado en el libre de registro, con expresión siempre del número de orden que haya correspondido al pliego respecto á los presentados para la subasta de que se trate en las oficinas en que se efectúe la entrega.

Los expresados recibos se librarán en las Diputaciones provinciales y en los Ayuntamientos por el jefe, ó el empleado que haga sus veces, de la oficina designada al efecto para la recepción d los pliegos, y en la Dirección general de Administración, por el jefe, ó el empleado que le sustituya, del Negociado en que radiquen los asuntos de subasta.

Quinta. Una vez entregado y admitido el pliego no podrá retirarse; pero podrá presentar varios del mismo licitador, dentro del plazo y con arreglo á las condiciones expresadas, sin acompañar nuevo resguardo de depósito provisional.

Sexta. Los pliegos de proposición que en su caso sean presentados en la Dirección general de Administración serán conservados, en unión de sus resguardos de depósito provisional, por el jefe de la Sección correspondiente de dicho Centro directivo en la caja de valores que al efecto deberá existir en el despacho que ocupe en la expresada Dirección general; y los que se presenten ante la Corporación contratante, ya sea ésta provincial ó municipal, serán conservados en la caja respectiva, bajo la responsabilidad del ó de los funcionarios encargados por las leyes Provincial y Municipal de la custodia de los fondos.

Al efecto, una vez entregado por el jefe de la oficina á que se refiere el último párrafo de la regla 4ª de este artículo el recibo del pliego y resguardo presentados, el expresado funcionario exhibirá á la persona ó personas bajo cuya custodia ha de conservarse el pliego el libro de registro de éstos, haciéndoles á la vez entrega del de proposición presentado, con su correspondiente resguardo de depósito provisional, y dichas personalidades, después de confrontar lo que aparezca y resulte del pliego y resguardo con lo expresado en el asiento respectivo en el libro de registro, se harán cargo de los citados documentos, consignando en dicho libro al pie del mencionado asiento el oportuno recibí, en la siguiente forma: Recibí para su custodia el pliego y resguardo á que se refiere este asiento.

Ley Municipal

Séptima. Desde el momento en que termine el plazo de presentación de pliegos para cualquier subasta de las á que se refiere este artículo se librará á quien lo solicite, por el jefe de la oficina correspondiente que determina el último párrafo de la regla 4ª, certificación del número de pliegos presentados, con expresión de sus números de orden, fecha de su presentación, nombre de los licitadores y demás circunstancias, firmas y contraseñas que reúnan y contengan los referidos pliegos.

Para que pueda expedirse la certificación aludida será necesario que el peticionario la solicite durante horas hábiles de oficina en el Centro del cual se interese, y que al hacerlo presente con arreglo á la ley de este impuesto, sin cuyo requisito no podrá ser librada en modo alguno la expresada certificación.

En el caso de demora en la expedición de esta certificación, ó cuando cualquier personalidad lo crea conveniente, podrá requerir notario público que dé fe de los detalles y circunstancias que hubiera de contener la certificación á que se refiere esta regla, á cuyo efecto resguardos, pliegos de proposición presentados para la subasta y libros de registro de éstos serán exhibidos al notario.

Octava. Llegado el día y hora señalados para la subasta, se constituirá la Mesa, dándose principio al acto por la lectura del anuncio de aquélla y del presente artículo. Terminada dicha lectura, el presidente exhibirá al notario autorizante del acto todos los pliegos presentados, en unión de sus resguardos de depósito provisional, acompañados de certificación expedida por el funcionario á que se refiere el último párrafo de la regla 4ª, y visada por aquel ó aquellos bajo cuya custodia han sido conservados, comprensiva de los pliegos presentados y resguardos que les acompañen, fecha de la presentación y número asignado á cada uno, así como el nombre de los licitadores y de cuantos datos y circunstancias consten en el asiento para la debida identificación de cada pliego.

A seguida el presidente invitará á los concurrentes al acto á que efectúen, si lo desean, el oportuno recuento y reconocimiento de los pliegos, compulsándolos en su caso con lo que resulte de los respectivos asientos del libro de registro de los mismos, consignándose en el acta las protestas ú observaciones que se formulen y lo acordado respecto á las mismas por el presidente, ó que, efectuado el expresado requerimiento, no se formulo protesta ni observación alguna.

Hecho el anterior requerimiento, y contestadas y resueltas en su caso las dudas que se formulen, el presidente manifestará á continuación que se va á proceder á la apertura de los pliegos, declarando que, una vez abierto el primero no se admitirá protesta ni observación de ningún género ni se dará explicación alguna que interrumpa el acto.

Llegado este caso, el referido presidente procederá á la apertura por orden correlativo de numeración de los pliegos presentados, dando lectura en alta voz á la proposición en ellos contenida.

Novena. Terminada la lectura de cada proposición, el presidente declarará desechadas las que no se ajusten al modelo, siempre que las diferencias puedan producir, á su juicio, duda racional sobre la persona del licitador, sobre el precio ó sobre el compromiso que contraiga, sin que en el caso de existir esa duda deba admitirse la proposición, aunque el licitador manifieste que está conforme con que se entienda redactada con estricta sujeción al modelo.

Décima. Verificada la lectura de todos los pliegos presentados, el presidente adjudicará, provisionalmente el remate al autor d la proposición más ventajosa entre las admitidas; pero haciendo constar, si la subasta fuese doble y simultanea, que la referida adjudicación provisional la efectúa sin perjuicio del resultado que ofrezca la doble subasta que simultáneamente se verifica.

Décimoprimera. La undécima del artículo 17.

Décimasegunda. Hecha la adjudicación provisional, el rematante exhibirá su cédula personal al notario ó secretario autorizante del acto, y se unirán al expediente de subasta todos los resguardos de depósito y todas las proposiciones presentadas, incluso las que hubiesen sido desechadas, sin

Ley Municipal

más excepción que las correspondientes á los licitadores que estén conformes con que queden desechadas sus proposiciones, los cuales, por sí ó por medio de sus representantes, podrán recogerlas en el acto, con los resguardos de depósito correspondientes, entendiéndose que renuncian con esto á todo derecho á la adjudicación definitiva del remate.

No obstante, el presidente podrá entregar al notario autorizante del acto, para su custodia, el resguardo ó resguardos de depósito provisional de que se ha hecho mérito, los cuales no podrán ser devueltos por dicho notario á los interesados sin orden previa de la Dirección general de Administración, si la subasta fuese celebrada ante dicho Centro directivo, ó del presidente de la Corporación provincial ó municipal, según sea una ú otra ante quien se haya celebrado la subasta de referencia.

Décimatercera. La décimatercera del artículo 17.

Décimacuarta. En el caso de doble y simultanea subasta se remitirá á la mayor brevedad por la Dirección general de Administración á la Corporación contratante testimonio notarial de la expresada acta ó certificación del acta administrativa que en su caso previene al artículo 6º (1).

Dirección general de Administración por el testimonio notarial ó acta administrativa á que se refiere la regla anterior, procederá á hacer desde luego la adjudicación provisional.

Artículo 19º. Dentro de los cinco días siguientes al de la celebración de cualquier subasta podrán acudir por escrito ante la Corporación interesada todos los licitadores cuyas proposiciones hayan

Décimoquinta. Si en el mismo caso de doble y simultanea subasta resultasen igualmente ventajosas las proposiciones de dos rematantes provisionales, tendrá derecho de preferencia el autor de la proposición presentada ante las autoridades á que se refiere el artículo 6º. En su consecuencia, la Corporación contratante, al tener conocimiento del resultado de la subasta celebrada ante al sido admitidas ó que no se hayan conformado con tenerlas por desechadas, exponiendo lo que tengan por conveniente sobre el acto de la subasta, sobre la capacidad jurídica de los demás licitadores y sobre lo que crean que deba resolverse respecto á la adjudicación definitiva.

Expirado el plazo de los cinco días que señala el artículo anterior en las subastas que no excedan de 125.000 pesetas, y en las que fueren dobles y simultáneas después de recibido el testimonio del acta d la celebrada en Madrid, pero siempre después de transcurrir el plazo de los cinco días mencionados, la Corporación interesada resolverá lo que estime procedente sobre la validez ó nulidad del acto de la subasta; y si declarase valido el acto, hará la adjudicación definitiva del remate al autor de la proposición más ventajosa entre las admitidas ó entre las desechadas que hubieren debido admitirse con arreglo á los anuncios y á las disposiciones de esta instrucción, y acordará que se devuelvan todos los resguardos de depósito á los licitadores, conservando sólo el correspondiente al rematante; pero cualquier licitador que se creyese perjudicado con el acuerdo de adjudicación definitiva podrá apelar de dicho acuerdo, conforme se expresa en el artículo 32 de esta instrucción

Las Corporaciones provinciales y municipales, en el caso de que la subasta sea doble y simultánea, telegrafiarán necesariamente á la Dirección general de Administración terminado que sea el acto, como á su vez deberá hacerlo el expresado Centro directivo á la Corporación contratante respectiva, el resultado de la subasta, debiendo igualmente dar conocimiento las Diputaciones y Ayuntamientos á la Dirección general referida, en término de segundo día, de las fechas en que se haya acordado la adjudicación definitiva del remate y de la en que haya constituido el rematante la fianza definitiva para responder de su compromiso.

(1). Redactado conforme á la Real orden de 17 de marzo de 1906.

Ley Municipal

Artículo 21°. Hecha la adjudicación definitiva, se requerirá inmediatamente al rematante para que dentro del término de diez días presente el documento que acredite haber constituido la fianza definitiva, y, constituida ésta, citará al rematante para que en el día de que se señale concurra á otorgar la escritura ó a formalizar el contrato

Artículo 22°. Los contratos que con arreglo á esta instrucción han de celebrarse mediante subasta ó concurso se consignarán en escritura pública cuando el gasto ó ingreso total que hayan de producir á la Corporación contratante exceda de 15.000 pesetas.

Los de menor cuantía, si la escritura pública no fuese necesaria para su inscripción en el Registro de la propiedad ú otros efectos, quedarán formalizados entregando al rematante una certificación en que se inserten los pliegos de condiciones, el acta de la subasta y el acuerdo sobre la adjudicación definitiva del remate, la cual será cotejada por el rematante, que confirmará su recibo y su conformidad en el expediente de subasta.

Artículo 24°. Si el rematante no presentase la fianza definitiva, ó no concurriese al otorgamiento de la escritura ó formalización del contrato, ó no llenase las condiciones que sean precisas para ello dentro de los plazos señalados y de una prórroga que sólo podrá concederse por causa justificada, sin que en ningún caso pueda ésta exceder de cinco días, se tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante.

Los efectos de esta declaración serán:

Primero. El pago de todos los gastos a que hubiere ocasionado la subasta.

Segundo. Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia entre el primero y segundo remate si éste fuese menos beneficioso para la Corporación interesada.

Tercero. Que satisfaga también el primer rematante todos los perjuicios que hubiere recibido la Corporación por la demora.

Cuarto. Que en caso de no presentarse licitadores y haber de hacerse la obra ó servicio por la administración, sea de cuenta del primer rematante el perjuicio que de este resulte, que se regulará y fijará en expediente en que aquél sea oído.

Estas responsabilidades se harán efectiva hasta donde alcance de la fianza provisional ó definitiva que tuviese prestada el rematante, que le será siempre retenida; y si la fianza no fuese suficiente, de los demás bienes del rematante, administrativamente y por la vía de apremio.

Si hecha la liquidación de aquellas responsabilidades excediese de su importe la fianza, le será devuelto el exceso.

Artículo 25°. Los rematantes podrán ceder y traspasar válidamente los derechos que nazcan del remate, siempre que no esté prohibida la transferencia ó cesión por las leyes ó disposiciones que regulen la naturaleza del contrato ó por las condiciones consignadas en los pliegos que hayan servido de base para la subasta; pero en todos los casos será preciso que el nuevo contratista reúna las condiciones y preste las garantías exigidas al rematante, y que la Corporación interesada asienta á la cesión ó transferencia, haciéndolo así constar por acuerdo que se consignará en el expediente de subasta.

Artículo 26°. Las subrogaciones y cesiones de los derechos del rematante podrán hacerse por comparecencia ante la Corporación interesada hasta el momento del otorgamiento de la escritura ó formalización del contrato, después sólo podrán hacerse por medio de escritura pública, aunque el contrato entre la Corporación y el cedente hubiese formalizado sin ella.

Artículo 27°. En todos los casos habrá de ser una la persona ó entidad que tenga el remate, y serán indivisibles para la Corporación las obligaciones y los derechos que de él se deriven, sin que mientras subsista el contrato pueda reconocerse personalidad más que en el rematante ó su apoderado para cuando se refiera á los efectos del contrato.

Ley Municipal

Artículo 28°. El hecho de presentar ó formular una proposición en el acto de la subasta constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato si le fuera definitivamente adjudicado, que el consignado en el artículo 20.

La Corporación contratante sólo queda obligada por la adjudicación definitiva.

Artículo 29°. Las Corporaciones provinciales y municipales, dentro de los tres primeros días en que empiece á correr el último trimestre de la duración del contrato que esté vigente cuando la cuantía de éste no requiera la doble y simultánea subasta, y con un mes más de antelación en el caso de que el acto haya de ser doble y simultáneo, acordarán las condiciones de la subasta y la celebración de la misma; y después de obtenida en su caso, la aprobación á que se refiere el artículo 8° para los contratos relativos á ejecución de obras, darán publicidad á los mencionados acuerdos en el Boletín Oficial de la provincia, y por medio de edictos en los sitios que ordinariamente tengan destinados al objeto, pudiendo hacerlo también en los periódicos que tengan por conveniente, expresando que durante los plazos de diez días, si la subasta que se intenta celebrar no excediera de 125.000 pesetas, ó de veinte si por exceder de dicha cantidad hubiese de verificarse doble y simultáneamente, podrán presentarse las reclamaciones que se quisieran; advirtiendo que pasado dicho plazo no será atendida ninguna de las que se produzcan.

También procederán á dicha publicidad cuando se trate de subastas cuyo fin no haya sido objeto de contratación anterior. Para la expresada publicidad se atenderán á los plazos anteriormente marcados, computados con relación á la fecha en que intenten celebrar el contrato.

Las reclamaciones que se produzcan á consecuencia d la publicidad que queda prevenida se resolverán por las respectivas Corporaciones interesadas, siendo los acuerdos que éstas adopten reclamables con arreglo á lo establecido en el artículo 32 de esta instrucción.

Una vez que con arreglo á las leyes sean firmes los acuerdos sobre la celebración de la subasta de que se trate, las Corporaciones citadas procederán en término de cinco días á la publicación de los pliegos de condiciones y del anuncio señalando el día, sitio y hora en que haya de tener lugar el acto, si fuese uno sol; y en caso de requerir el doble y simultáneo, en el dicho plazo de cinco días elevarán los documentos referentes á la subasta á la Dirección general de Administración, á fin de que el mencionado Centro directivo fije el día y hora en que haya de verificarse.

La Dirección general de Administración deberá corregir los defectos de que pudieran adolecer los proyectos, pliegos de condiciones y anuncios de las subastas que hayan de ser dobles y simultaneas, y en tal caso los devolverá á la Corporación provincial ó municipal que intente la celebración de aquélla, expresando los defectos y la forma en que hayan de ser subsanados, ó reclamará los documentos que al efecto sean necesarios, negando la celebración de la subasta siempre que no se subsanen los defectos aludidos.

Si los expresados documentos no adoleciesen de defecto alguno, ó subsanados éstos en su caso, la Dirección general cuidará de remitir el anuncio á la Gaceta de Madrid para su inserción, y lo comunicará á la Corporación contratante para que pueda insertarse á su vez , con conocimiento del día y hora señalado, en el Boletín Oficial de la provincia.

En el caso de no haber rematante dichas Corporaciones señalarán la segunda subasta, ó elevaran los documentos á la citada dirección en el plazo máximo de cinco días, y en otro igual pedirán la excepción reglamentaria de la subasta á que se refiere el apartado 5° del artículo 41, si tampoco resultase adjudicado el servicio en la segunda licitación.

Artículo 30°. Las Corporaciones provinciales, al sacar á subasta los servicios todos que tengan por objeto llenar necesidades permanentes, pueden señalar para la duración del respectivo contrato plazo mayor de un año, acordándose por la Diputación la oportuna distribución de la cuantía total del contrato en el número necesario de los futuros presupuestos ordinarios.

Ley Municipal

En el caso de que un contrato dure más de un año , y, en su consecuencia afecte á otros tantos presupuestos, será obligatoria la consignación en cada en cada presupuesto ordinario, mientras el contrato dure, de la cifra que según lo estipulado haya de pagarse anualmente debiéndose por este Ministerio corregir en tiempo oportuno las omisiones, bien á instancia de parte, ó bien por propio conocimiento que de las mismas tuviese conocimiento que de las mismas tuviese. Cuando queda prevenido y advertido en los párrafos anteriores de este artículo es aplicable á los Ayuntamientos, con sujeción al artículo 42 de esta instrucción respecto á la autoridad de quien tiene que solicitar le excepción de subasta, pudiendo contratar por más de un año, con la condición que exige el párrafo 3º del artículo 3º, y derivándose de los contratos de duración mayor que un año la obligación de consignar en los futuros presupuestos la cifra oportuna; debiendo los gobernadores de provincia, con arreglo al Real decreto de 19 d Febrero de 1901, corregir en los mismos las omisiones que respecto al particular contengan, bien á instancia de parte, bien por propio conocimiento que de aquellas tengan, al efectuar la revisión que de los mencionados presupuesto encomienda á su autoridad la ley Municipal.

Artículo 31º. Anunciada que sea toda subasta, con señalamiento del día y hora en que haya de verificarse, no podrá ser suspendida sino por virtud de acuerdo de la Corporación contratante.

Artículo 32º. Incumbe al Tribunal correspondiente de la jurisdicción contencioso-administrativa, después de apurada la vía gubernativa, el conocimiento de las cuestiones que se susciten acerca del cumplimiento ó incumplimiento de los preceptos de esta instrucción, exceptuando los taxativamente expresados en la misma.

También le incumbe , previo el requisito de estar apurada la vía gubernativa, el de las contiendas que versen acerca de los contratos ya realizados, bien con motivo de cuando se trate de la rescisión y nulidad de los mismos y sobre indemnización de perjuicios.

Cuando se trate de Diputaciones provinciales, el recurso de alzada contra los acuerdos de las mismas deberá entablarse ante el Ministerio de la Gobernación, si procediese ante el Gobierno, según lo que determina el artículo 87, en relación con el 79 de la ley Provincial.

Si procede, el Ministerio resolverá según previene el artículo 86 de la ley citada, y la Real orden pondrá término á la vía gubernativa; si entablado el recurso el Ministerio viese el acuerdo reclamado no es de los á que refiere el artículo 87 antes citado, se limitará á declarar su incompetencia para conocer sobre el fondo del asunto y remitirá al reclamante al Tribunal correspondiente. Esta declaración deberá hacerla en el término de dos meses, á contar, deducidos los días inhábiles, desde la fecha en que haya tenido entrada el recurso.

Tratándose de Ayuntamientos, todos los recuerdos de los mismos referentes á la materia de esta instrucción serán apelables ante los gobernadores de provincia en el plazo fijado por la ley Municipal, y pondrán término á la vía gubernativa las providencias de los mismos, las cuales deberán dictarse con arreglo á lo establecido por la ley Municipal y por la Real de carácter general dictada por el Ministerio de la Gobernación en 25 de junio de 1906; esto es, resolviendo sobre el fondo del recurso cuando haya infracción de aquella ley ú otras especiales y cuando el recurso verse sobre infracción de las cláusulas de un contrato.

Cuando por disposiciones del Gobierno ajenas á la voluntad de las partes contratantes se imposibilite en todo ó en parte el cumplimiento de las condiciones de un contrato provincial ó municipal, los recursos que por las cuestiones que respecto al caso se susciten pueden interponerse procederán ante el Ministerio de la Gobernación.

Podrá formularse recurso de alzada ante el mismo Ministerio por exceso de atribuciones ó omisión del uso de éstas en que incurran los gobernadores en sus resoluciones relativas á los extremos que contienen esta instrucción.

Ley Municipal

Son también apelables ante el repetido Ministerio las providencias de dichas autoridades referentes á las declaraciones que están atribuidas por el artículo 42 de esta instrucción.

Ningún contrato celebrado por la Corporaciones provinciales ó municipales podrá someterse á juicio arbitral ni á otra jurisdicción que la competente en cada caso con arreglo á las leyes, salvo lo dispuesto en el artículo 2º del artículo 1º del Real decreto de 20 de Junio de 1902 respecto al contrato especial con los obreros cuando se trate de la ejecución de obras.

Artículo 33º. Queda integrado en esta instrucción cuando dispone el Real decreto de 19 de Febrero de 1901 sobre débitos municipales á particulares. En su virtud, los gobernadores de provincia cuidarán de que tenga exacto cumplimiento, debiendo los mismos en primer término ajustarse á lo prevenido en el artículo 1º de dicha disposición, bajo la responsabilidad establecida en su artículo 7º.

Cuando un contratista no estuviere al corriente en el percibo de los pagos que con arreglo al contrato debe satisfacer la Corporación y reclamase de ésta le entrega de lo adeudado, la Corporación acordará lo que tenga por conveniente en el plazo máximo de treinta días, contados desde el siguiente al en que fue presentada la reclamación. Contra este acuerdo y dentro de otro plazo igual, contado á partir de la fecha siguiente á la de notificación del acuerdo, procederá recurso de alzada ante el gobernador de la provincia.

Si esta autoridad condenare al pago, cumplirá lo dispuesto, según los casos, en los artículo 8º y 4º del Real decreto de 19 de Febrero de 1901. La providencia del gobernador sobre el recurso á que se viene haciendo referencia será apelable en el plazo de diez días ante el Ministerio de la Gobernación, previo el requisito que establece el mencionado Real decreto de 19 de Febrero de 1901 en su artículo 8º cuando el Ayuntamiento sea el recurrente.

Queda en vigor por lo que á esta instrucción respecta cuando se previene en el Real decreto de 23 de Diciembre de 1902 sobre ordenación de pagos para Diputaciones provinciales y Ayuntamientos.

En los contratos referentes á los servicios de limpieza y alumbrado de las poblaciones, si el arrendatario respectivo intentase suspender el servicio, fundado en falta de pago por la Corporación municipal determinada dicha falta por las condiciones del contrato referentes á la cuantía del precio, fechas de su entrega y demás extremos relativos á la obligación de pagar, no podrá llevar á cabo la suspensión sin previo aviso al Ayuntamiento con treinta días cuando menos de antelación, entendiéndose que este aviso debe darse indefectiblemente, haya ó en el contrato la cláusula de suspensión; no pudiendo nunca cesar el servicio hasta después de transcurridos los expresados treinta días, por lo menos, desde la fecha del aviso, ni aun en el caso de que medio causa en el contrato fijando un plazo menor, ó cualesquiera otras condiciones y circunstancias que no sean las que quedan determinadas para la repetida suspensión del servicio por falta de pago.

El aviso de suspensión deberá darse por escrito, a al oficina receptora entregará el correspondiente recibo, aunque el interesado no lo exigiese.

Dado el aviso, el alcalde, bajo su responsabilidad, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la Corporación, así como del gobernador sise tratase de la capital de una provincia.

El gobernador, en este caso, adoptará las medidas oportunas á fin de prevenir cualquier alteración del orden público ó peligro para la salud pública por la carencia del servicio respectivo de los dos que se mencionan, respetando los derechos y obligaciones nacidos del contrato.

Si se tratase de Ayuntamientos de poblaciones que no sean capital de provincia, el alcalde, también inmediatamente y bajo su responsabilidad procederá del modo que queda indicado, dando cuenta al gobernador.

Si por la Corporación ó autoridades de la misma ó por el gobernador de la provincia se pretendiese compeler al contratista acreedor á continuar el servicio después de expirado el plazo á que se hace referencia sin que la Corporación hubiese satisfecho su débito en totalidad ó en la parte que

Ley Municipal

previamente hubiese convenido con el contratista, procederá la queja ante el gobernador si la queja motivase la Corporación municipal ó autoridades de la misma, y ante el ministro de la Gobernación si tuviese por causa actos de aquella autoridad.

Artículo 34°. La Corporación contratante podrá acordar la rescisión del contrato en cualquier tiempo de la duración del mismo por faltar el rematante á las condiciones estipulada, y en tal caso una vez apurada la vía gubernativa, procede impugnar la resolución recaída en al vía contenciosa.

El rematante podrá solicitar igualmente le rescisión del contrato por faltar la Corporación á lo estipulado en el mismo.

De la resolución que dicta la Corporación contratante, que deberá ser acordada dentro de los treinta días siguientes al solicitarse la rescisión, procederá, una vez agotada la vía gubernativa, impugnar en lo contencioso-administrativo a la resolución recaída.

Artículo 35°. en todos los casos en que la Corporación contratante acuerde ó el rematante pida la rescisión corresponderá á aquélla declarar si ha de quedar en suspenso el contrato ó ha de continuar en vigor hasta que la cuestión de rescisión sea definitivamente resuelta, y su declaración será ejecutiva, sin que contra ella pueda interponerse recurso alguno.

Artículo 36°. Las multas é indemnizaciones á que dieren lugar los rematantes se harán efectivas gubernativamente:

De las cantidades en metálico ó en efectos que hubieren consignado en fianza; y

De los demás bienes de los rematantes.

En la ejecución y venta de bienes de los bienes del rematante para hacer efectivas aquellas responsabilidades se procederá por los tramites de la vía administrativa d apremio.

Cuando la fianza esté constituida en efectos públicos y el rematante haya de perderla ó abonar de ella alguna cantidad, se venderán con intervención de agente de Bolsa, los que sean necesarios para cubrir la suma en metálico en que consista la fianza ó que deba abonar el rematante, y el sobrante, si lo hubiere, continuará depositado ó se devolverá al rematante, según proceda.

Artículo 37°. El rematante habrá de completar la fianza siempre que se extraiga una parte de ella á fin de hacer efectivas las multas é indemnizaciones.

Si á los diez días de haber sido requerido para que complete la fianza no lo hubiese hecho de alguno de los modos admitidos, se declarará rescindido el contrato, con los efectos del artículo 24.

Artículo 38°. Terminado el contrato y no habiendo responsabilidades exigibles, se devolverá la fianza al rematante.

Sin embargo, si antes de terminar el contrato y en el caso de que la Corporación contratante adeudase al contratista mayor cantidad que la depositada por éste para responder de su compromiso como fianza definitiva, y dicha deuda haya de abonarse en totalidad pasado un plazo mayor que el señalado como garantía, entonces podrá devolverse al contratista la fianza definitiva., quedando siempre á salvo el derecho de la Corporación, si el rematante diese lugar á multas é indemnizaciones, para reintegrarse de ésta de la cantidad adeudada; y si no fuese suficiente, de los demás bienes del contratista, en la forma que preceptúa el artículo 36.

Si para las prestaciones de alguno de los servicios que se contraten fuese necesaria la construcción de obras y la adquisición de máquinas ó material determinado, podrá devolverse la fianza definitiva al contratista al funcionar después de inaugurado oficialmente el servicio, siempre que las obras construidas al efecto y todo material empleado y de reserva quede en garantía del cumplimiento del contrato.

Artículo 39°. Se abonarán al rematante, ó por éste, intereses á razón del 5 por 100 anual por demora en los pagos siempre que éstos se retrasen más de dos meses, sin perjuicio de lo que se haya convenido respecto á que el retraso en los pagos pueda ser causa de rescisión del contrato.

Ley Municipal

Artículo 40°. Los contratos que, previo, los requisitos que las leyes establezcan, intenten celebrar las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos referentes al arrendamiento y adquisición de inmuebles, se verificarán mediante concurso, excepto aquellos que se hallen comprendidos en los casos 2° y 3° del artículo 41.

También se verificarán por concurso las adquisiciones y alquileres de bienes inmuebles.

Para los concursos de que se trata las Corporaciones provinciales y municipales las redactarán los pliegos de condiciones, especificando todas las que ha de reunir la cosa objeto del concurso, así como las necesidades que haya de satisfacer, y fijarán el plazo, que no podrá ser menor de treinta días, durante el cual puede presentarse proposiciones.

El pliego de condiciones, con el anuncio del concurso, se publicará necesariamente en el Boletín Oficial de la provincia respectiva y en la Gaceta de Madrid, pudiendo también hacerlo en otros periódicos no oficiales.

Celebrado el concurso, la Corporación contratante acordará respecto á las proposiciones presentadas, eligiendo la más conveniente con arreglo á las condiciones establecidas.

Quedan exceptuados los concursos de la simultaneidad exigida para las subastas que excedan de 125.000 pesetas.

Artículo 41°. No es necesaria la subasta ni el concurso.

Primero. Para los contratos que celebren las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos de aquellas poblaciones sean ó no capitales de provincia, que cuenten un número mayor de 7.000 habitantes, cuando hayan de producir un ingreso ó gasto total que no exceda de 2.000 pesetas, ni para los que celebren los demás Ayuntamientos que cuenten 2.000 habitantes, cuando el ingreso ó gasto total no haya de exceder de 1.000, ni para los otros Ayuntamientos menores de 2.000 habitantes, cuando el ingreso ó gasto no pase de 500 pesetas.

Segundo. Para los contratos sobre objetos cuyo productor ó vendedor disfrute privilegio de invención de introducción, circunstancia que se justificará en cada caso.

Tercero. Para los que versen sobre objetos determinados de que no haya más que un poseedor.

Cuarto. Para los relativos á formación de proyectos, planos ó cualesquiera otros estudios análogos en que sean necesarios conocimientos científicos de determinada carrera., á no ser que la Corporación acuerde especialmente el concurso, en cuyo caso se verificará éste con arreglo á lo dispuesto en el artículo 40.

Quinto. Para los que se verifiquen después de celebradas al efecto dos subastas ó concursos bajo el mismo tipo y condiciones, siempre que en ellas no se hubiere presentado licitadores, y siempre también que el precio y las condiciones del contrato no sean menos favorables á la Corporación que el tipo y la condiciones que hayan servido de base á las referidas subastas ó concursos.

Sexto. Para los que sean de tan extraordinaria urgencia, nacida de circunstancias imprevistas, que no haya tiempo para llenar los tramites exigidos en las subastas ó concursos.

Artículo 42°. En los casos del artículo anterior, con excepción del primero, deberá proceder la declaración de excepción hecha por el gobernador de la provincia cuando se trate de contratos municipales, ó si fueren provinciales, por el Ministerio de la Gobernación, y sin ella no será válido el contrato que se celebre, siendo personalmente responsables de los perjuicios que irroguen los concejales ó los diputados provinciales que acuerden la celebración del contrato ó lo aprueben.

Los expresados gobernadores de provincia no harán declaración alguna de excepción de subasta ó concurso en los asuntos que con arreglo á las leyes necesiten la autorización del Gobierno, sin que ésta haya sido previamente concedida.

Artículo 43°. El ministro de la Gobernación y los gobernadores de provincia negarán las autorizaciones de excepción de subasta que se soliciten por las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos si notaren infracción en el artículo 29, y acordarán lo procedente para depurar y

Ley Municipal

hacer efectivas las responsabilidades por la infracción y por el hecho de quedar desprovistos los servicios.

Artículo 44°. La excepción del requisito de subasta después de verificadas dos licitaciones en las condiciones exigidas por el apartado 5° del artículo 41 no implica que forzosamente las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos hayan de prescindir de llevar á cabo otras subastas ulteriores para realizar el servicio mediante nuevas condiciones que faciliten la concurrencia d licitadores.

En el caso de que las fluctuaciones de los precios corrientes en el mercado imposibilitasen la adquisición por administración de alguno ó varios artículos al precio que sirvió de tipo á las subastas procederá que dichas Corporaciones provinciales ó municipales soliciten autorización para adquirir administrativamente el ó los artículos de que se trate, al precio ó á los precios corrientes del mercado, ínterin se llega á la contratación. del servicio mediante nueva subasta.

Para esta nueva subasta ha de preceder el oportuno acuerdo, fijándose el nuevo tipo que las circunstancias aconsejen. Dicho acuerdo deberá adoptarse en el plazo máximo de diez días después de la última subasta, procediéndose dentro de tres, á partir de la fecha del acuerdo, á hacer el anuncio con arreglo á las disposiciones pertinentes de esta instrucción.

Artículo 45°. Cuando, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 42, se solicite excepción de subasta para algún contrato de los comprendidos en los apartados 2° y 5° del artículo 41, deberá acompañarse á la petición certificación en forma de la patente ó privilegio si el asunto fuese de los comprendidos en el citado apartado 2° del artículo 41, y los Boletines Oficiales en, que se insertaron los anuncios de las subastas y testimonio de las actas de su resultado si fuese de los que comprende el apartado 5° del mismo artículo 41.

Si la declaración de excepción se solicitare para adquirir algunos artículos al precio corriente del mercado, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 44, deberá acompañarse, además de los documentos exigidos para los contratos á que se refiere el apartado 5° del artículo 41, en el mercado respecto al artículo ó artículos que se trate, con expresión de la diferencia existente entre estos precios y los que sirvieron de tipo á las subastas, y certificación de haberse acordado la celebración de nueva licitación dentro del plazo marcado al efecto en el citado artículo 44.

Artículo 46°. A partir de la fecha de esta instrucción no podrán ser prorrogados los contratos provinciales y municipales, una vez llegados el día de su terminación con arreglo á las condiciones bajo las cuales se realizaron.

Artículo 47°. Son aplicables como supletorias á las subastas, concursos y contratos que celebren las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos las disposiciones que regulan las de la Administración general del Estado, en cuanto no se opongan á lo prevenido en esta instrucción.

Artículo 48°. Las disposiciones de esta instrucción no se aplicarán á los contratos que se rijan por las leyes especiales en que se exija el trámite de subasta ó concurso.

Ley Municipal

REAL ORDEN DE 7 DE FEBRERO DE 1906.

Aclara los artículos 8º y 23 de la instrucción sobre la contratación de servicios provinciales y municipales.

Se resuelve: 1º Que, de acuerdo con la regla 8ª del artículo 8º, y artículo 23 del Real decreto instrucción de 24 d Enero último sobre contratación provincial y municipal, los contratistas de servicios provinciales ó municipales sólo tienen la obligación de satisfacer los gastos de la subasta que le fue adjudicada.

2º Que las corporaciones provinciales ó municipales están obligadas á satisfacer todos los gastos de las subastas que se declaren desiertas, con arreglo igualmente á los artículos 8º y 28 de la referida instrucción.

3º Que asimismo las expresadas Corporaciones están obligadas á satisfacer los derechos de inserción en los periódicos oficiales de todas las subastas que resulten desiertas, por no haber motivo que aconseje la excepción de este pago.

4º Que debe recordarse que las Corporaciones son las que deben abonar en primer término todos los gastos de la subastas inexcusablemente, á reserva de reintegrarse cuando exista rematante de los gastos ocasionados por la subasta en que hubo postor.

En el libro original esta ley ocupa las páginas 222 a 285 ambas inclusive.

REAL ORDEN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1909.

Sobre la proclamación de candidatos en las elecciones municipales.

Se resuelve.

1º En armonía con lo prevenido en el apartado 3º del artículo 7º del Real decreto de 9 de Septiembre último, una vez convocada una elección municipal, general ó parcial, los secretarios de los Ayuntamientos remitirán á los presidentes de las Juntas municipales del Censo, en el plazo improrrogables de cinco días, certificación comprensiva de los nombres y apellidos de todos aquellos que hayan sido concejales y no hayan fallecido en el plazo anterior de veinte años, haciendo constar el distrito y fechas en que fueron , á fin de que las referidas Juntas los tengan presente al formularse las propuestas de proclamación de candidatos, no siendo, por tanto, impedimento para acordar la falta de certificación especial que justifique la condición de concejal ó exconcejal, si consta incluido el proponente en la expedida con carácter general por el secretario del ayuntamiento y visada por el alcalde.

2º otra certificación igual será expuesta al público en los sitios de costumbre dentro del mismo plazo improrrogable de cinco días, y bajo la responsabilidad de los alcaldes y secretarios, á fin de que aquellos exconcejales que no figuren incluidos en ella debiendo estarlo puedan reclamar en tiempo la certificación especial que acredite su derecho á ser proclamados candidatos.

3º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Electoral, los exconcejales que no figuren en las certificaciones de carácter general por haber sido elegidos en épocas anteriores al plazo de veinte años que aquéllas comprenden tienen perfecto derecho á que justifiquen ese derecho

Ley Municipal

por medio de certificaciones especiales expedidas por los secretarios de los Ayuntamientos y visadas por los alcaldes.

4º La infracción de estos preceptos será castigada como infracción electoral, con arreglo al artículo 75 de la Ley Orgánica vigente.

En el libro original esta ley ocupa las páginas 286 a 287 ambas inclusive.

Real orden de 12 de Octubre de 1910 **Higiene municipal**

Ilmo. Sr. : Visto el proyecto d bases generales para la redacción de los reglamentos de Higiene formulado por el Real Consejo de Sanidad;

Considerando que las mencionadas bases responden cumplidamente al criterio que informa la instrucción general de sanidad y facilitarán la redacción por las Juntas provisionales y municipales de los respectivos reglamentos y que se refieren señaladamente los artículos 26, 110 y 111 de la dicha instrucción.

SS.M. el Rey (q. D. G.) se ha servido disponer que se apruebe el adjunto proyecto de bases generales para la redacción de los reglamentos de Higiene, para todos los efectos determinados en la instrucción general de Sanidad.

De Real orden á V.I. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde a V.I. muchos años. Madrid, 12 de Octubre de 1910. -Merino.- Señor inspector general de Sanidad interior.

Bases generales para la redacción de los reglamentos de higiene.

La instrucción de Sanidad vigente establece en sus artículos 110 y 111 la necesidad de redactar reglamentos municipales de Sanidad, cuyos preceptos sirvan de norma y señalen la línea de conducta a que deben ajustarse en el desarrollo de sus funciones los inspectores encargados de la aplicación en las diferentes poblaciones de los preceptos de aquélla.

La redacción de esos reglamentos en cada localidad aisladamente y con independencia unos de otros, sin una orientación común y sin una idea informadora única. Traería como consecuencia lógica la existencia de una serie de trabajos y de disposiciones encaminadas todas sin duda alguna, al mismo fin, pero recorriendo caminos diversos, empleando procedimientos y aplicando métodos diferentes, siendo la resultante de esa diversidad de medios una falta de unidad imposible de admitir en esta clase de disposiciones.

La única manera de evitar ese grave inconveniente es fijar una pauta precisa a la que deban atenerse los encargados de la redacción de esos reglamentos; puntualizar de una manera indudable y clara los puntos que deben tocarse y el desarrollo que cada extremo ha de tener; regular de antemano la amplitud y el alcance que es preciso dar a esas disposiciones, para que con esos datos sea más fácil y más sencillo á los futuros redactores, aplicando esas indicaciones y esos consejos á la confección

Ley Municipal

de sus reglamentos respectivos, llenar su cometido, dedicando toda su atención á aquellas disposiciones especialísimas y derivadas de las condiciones de localidad que son indispensables, y que habrán d constituir la característica propia de cada uno de esos reglamento.

La autoridad superior en materias de higiene en las provincias reside en el gobernador, asesorado en caso de necesidad por el inspector y la Junta provincial de Sanidad.

II

Atmósfera

- a) Por los Laboratorios municipales se verificarán los análisis periódicos, químicos y bacteriológicos, del aire atmosférico.
- b) Estos análisis se harán por lo menos uno cada semana en tiempo normal; diarios en caso de epidemia. Sus resultados se publicarán semanalmente, deduciendo en la época oportuna los resúmenes mensuales, estacionales y anuales.
- c) Se prohíbe terminantemente la corta de árboles en el interior de las poblaciones sin previa información que justifique la medida. Se facilitará, en cambio, por todos los medios posibles la reposición de los que por cualquier motivo hubieran desaparecido.
- d) Se limitara el número de conductores eléctricos á alta tensión descubierto en la vía pública, disponiendo que los teléfonos y la luz eléctrica vayan cubiertos con substancias aisladoras.
- e) Se prohibirá en el interior de las poblaciones. Toda chimenea de fábrica o establecimiento análogo que no consuma de una manera completa sus humos.

III

Terreno

- a) Por los Laboratorios municipales se procederá á llevar á cabo un estudio minucioso y detenido del terreno en el que se encuentre edificada la población, determinando su naturaleza, composición, porosidad, permeabilidad al agua y á los gases, composición del aire interpuesto, profundidad de la capa de agua subterránea, termalidad y proporción y clase de las bacterias que en él se encuentren.

Estos estudios se repetirán periódicamente, de tal manera que lleguen á reunirse datos completos que permitirán en tiempo de epidemias estudiar las condiciones de propagación de éstas, por si alguna influencia ejerce en este sentido la naturaleza y condiciones del terreno.

IV

Aguas.

- a) Por los Laboratorios municipales se efectuarán análisis periódicos de las aguas de alimentación de las poblaciones, así desde el punto de vista químico como del microbiológico. Esos análisis se repetirán cuando menos ocho veces al mes en épocas normales, publicando los resultados y deduciendo en las épocas correspondientes las cifras medias mensuales, estacionales y anuales.

En épocas de epidemias ó en las que exista el temor fundado de que pueda desarrollarse alguna enfermedad que revista este carácter, esos análisis se efectuarán diariamente.

- b) En el caso de que exista una canalización general para la distribución del agua de que se surtan las poblaciones, se vigilará cuidadosamente esa canalización para evitar todo riesgo de contaminación. Las canalizaciones deberán construirse lo más alejadas posible de las alcantarillas, desagües de las casas y depósitos de materias orgánicas de todas clases , y

Ley Municipal

utilizando para las tuberías materiales completamente impermeables, de preferencia el hierro, cubierto por el exterior con brea, asfalto ó cemento.

- c) En el caso de existir depósitos para el agua potable, se construirán con substancias inatacables por aquel liquido; estarán perfectamente cerrados, pero de tal manera que su apertura para la limpieza periódica sea fácil , y se situarán á cubierto de la irradiación directa del sol y separados de todo conducto de evacuación de aguas residuarias.
- d) No podrá utilizarse para la bebida el agua de ningún pozo ni aljibe que no estén alejados de una manera conveniente de todo retrete, alcantarilla, estercolero ó cualquier depósito de inmundicias.
- e) Los pozos y aljibes estarán perfectamente tapados, y la superficie del terreno que rodea el orificio de aquellos, en un área de dos metros de radio, revestida con una capa de cemento íntimamente unida con las paredes del pozo y con una inclinación marcada hacia la periferia. La unión de esta capa con las paredes deberá presentar una superficie cóncava.
- f) Al llenar los aljibes se cuidará de que no penetre en ellos la primer agua de lluvia que se recoja.
- g) Se prohibirá lavar en las fuentes que existen en las casas, lo mismo en el patio que en los pisos, así como destinarlas a otra aplicación que la de tomar el agua necesaria para los usos domésticos.
- h) Se prohibirá del mismo modo beber directamente agua del caño de estas fuentes. El que quiera utilizarlas con este objeto llevará siempre un vaso ó vasija apropiada.
- i) El agua de los pozos ó aljibes se extraerá precisamente por medio de bombas elevadoras. De permitirse el uso del cubo, se exigirá que éste no se emplee en ningún caso más de que para el referido objeto.
- j) Se prohibirá el empleo del plomo para la construcción de los depósitos destinados á contener el agua que haya de usarse para la alimentación.
- k) Las alcantarillas, atarjeas y conductos de bajadas de los retretes deberán estar cuando menos á dos metros de las tuberías de conducción de agua potable.

V

Vía pública.

- a) La altura de las construcciones particulares, en relación con el ancho d las calles, será la siguiente:

ANCHURA DE LAS CALLES	Altura de los edificios / Metros
Menos de 6 metros.	6
De 6 á 8	8
De 8 a 10	10
De 10 a 15	12
De 15 a 20	16
De más de 20	20

- b) Se procurará que la orientación de las calles principales que se abran nuevamente sea de Norte á Sur y que su trazado sea lo más recto posible.
- c) Se procurará emplear para el pavimentado de las calles el sistema que más asegure su impermeabilidad. En todos los casos se sentará sobre un afirmado que reúna esta condición.

Ley Municipal

- d) La limpieza de las calles se hará empezando por el riego de la vía pública con agua en tiempo normal, y con soluciones de permanganato de potasio ó de calcio al 1 por 1.000, ó de creolina al 50 por 1.000, en tiempo de epidemia, y el barrido ulterior.
- e) Los riegos sucesivos se harán con mangas provistas de lanzas, cubas ó cualquier otro mecanismo de fácil transporte que esparza el liquido en lluvia fina , para evitar que se levante polvo y queden encharcadas las calles.
- f) Los porteros de las casas y los dueños de las tiendas, en la línea que ocupen éstas y durante el tiempo que estén abiertas, responden del trozo de acera que corresponde á su fachada de la casa. En tiempo de nieves cuidarán de levantar ésta y reunirla en el borde libre de la acera en seguida que concluya de caer.
- g) Se prohibirá sacudir en la vía pública alfombras, vestidos, esteras, etc., después de las siete de la mañana en verano y de las ocho en invierno.
- h) Se prohibirá igualmente arrojar ni depositar en la vía pública, fuera de la horas de limpieza de la misma, las basuras de las casas y los residuos y barreduras de las tiendas. En ningún caso se permitirá verter aguas sucias de lavado ó limpieza.
- i) Por los encargados de la limpieza de las calles se conducirán á las bocas de las alcantarillas, donde existan, ó se recogerán en depósitos cerrados para conducirlos á los vertederos ó lugares señalados al efecto, los residuos excrementicios de las caballerías y animales que circulen por las calles, á medida que se depositen, aprovechando el primer riego ó la primera limpieza para hacerlo desaparecer
Sería muy conveniente la adopción por los Municipios que contaran con recursos para ello de uno de los procedimientos actualmente en uso para la destrucción por el fuego de las basuras de la población.
- j) Cuando por las Compañías de alumbrado (eléctrico ó por gas), de tranvías, de teléfonos, de conducción de aguas, ó por los mismos Municipios para sus obras de alcantarillado, empedrado, etc., se levante una parte de la vía pública removiendo el terreno, se procederá diariamente á regar las tierras sacadas al exterior con una solución al 5 por 100 de creolina ó cresilol, ó al 10 por 100 de sulfato de cobre, de manera que se humedezcan por igual las superficies puestas al descubierto. Este riego será por cuenta de la Sociedad ó entidad que ejecute ó haga ejecutar la obra.
- k) En las poblaciones en que no exista sistema de alcantarillado, los pozos negros, depósitos, pozos Mouras, etc., que se utilicen para reunir los productos excrementicios de la vida de los habitantes estarán contruidos de tal manera que esté asegurada su completa impermeabilidad, siendo su revestido interior perfectamente liso, sus dimensiones estarán d acuerdo con el volumen de materias que deban recibir, y se exigirá su absoluta incomunicación con el interior de las habitaciones.
- l) El vaciado de estos depósitos se hará en la horas resulten menos molestas para el vecindario, y siempre previa una desinfección por medio de la cal viva ó sulfato ferroso.

VI Construcciones.

- a) Se examinará el terreno en el que trate de edificarse una casa antes de procederá los trabajos. Si fuera húmedo en exceso, se procederá al drenaje forma, llevando la conducción de aguas recogidas á la alcantarilla ó cauce más próximo; en los terrenos se exigirá que los muros de

Ley Municipal

cimentación estén protegidos contra la humedad por alguno de los medios conocidos en el día (fosas de aireación, capas aisladoras de los muros, ladrillos perforados, etc.).

- b) En donde exista sistema de alcantarillado es obligatoria la unión de las bajadas y construcciones de las casas con aquél. Toda casa nueva deberá disponer de las canalizaciones de descarga: una para las aguas llovedizas y las de lavado de las habitaciones (pilas de las cocinas, lavabos y baños). Y otra para las procedentes de los retretes.
- c) Los patios generales de las casas de nueva edificación deberán tener cuando menos tres metros de lado en las de un solo piso, cuatro en las de dos, seis en las de tres, y ocho en las que excedan de esta última cifra.
Los patios de desahogo para las cocinas y retretes tendrán cuando menos dos metros de lado.
- d) Cada habitación independiente en cada piso deberá tener cuando menos un retrete alumbrado y ventilado, respectivamente, por una ventana especial de 90 centímetros cuadrados de superficie útil. Esa ventana se comunicará directamente con el exterior.
- e) Donde sea posible, por existir distribución general de agua para la alimentación, esos retretes estarán provistos de water-closets, con su dotación necesaria de agua de un modelo que asegure la incomunicación completa de las habitaciones con la conducción general.
- f) Todas las conducciones de descarga de aguas de limpieza ó fecales de las casas estarán provistas de sifones en su unión con la conducción á las alcantarillas, pozos negros ó cualquier otro sistema de colector usado en la localidad.
- g) Donde exista servicio general de suministro de aguas, toda casa de nueva edificación tendrá cuando menos en el patio una fuente que no deberá servir en ningún caso para más uso que para tomar de ella el agua precisa para el consumo de los vecinos,. Queda prohibido lavar, fregar ni hacer ninguna otra operación doméstica en la referida fuente.
- h) Las construcciones y su distribución deben estar en el conjunto y en cada local destinado á ser habitado dispuestas y divididas de tal suerte y hechas con tales materiales, que la luz y el aire encuentren libre acceso y que la habitación sea bien seca. A este efecto conviene que las piezas que hayan de ser ocupadas con más frecuencia y por más tiempo y las alcobas tengan exposición al Mediodía, mientras que las escaleras, las cocinas, los comedores y los retretes la tendrán al Norte ó al Este.
- i) Todos los locales en los que se duerme, permanece habitualmente y trabaja, lo mismo que la cocina, deben tener ventanas que abran directamente al exterior.
- j) Las alcobas deberán tener una capacidad que asegure por lo menos ocho metros cúbicos de aire por individuo que haya de utilizarlas; se prescindirá en ellas de toda clase de cornisas y escocias ; los ángulos de unión de las paredes entre sí y de éstas con el techo serán redondeados, y aquéllas y éstos se blanquearán , estucarán ó pintarán al óleo.
- k) Ningún sótano puede ser en totalidad ó en parte habitado en las casas de nueva edificación. En las antiguas podrá tolerarse esta aplicación, siempre que las piedras (1) reúnan las condiciones siguientes:
 - 1ª Tener cuando menos 2,15 metros de altura, y de ellos, siquiera 0,90 metros por encima del nivel del suelo exterior.
 - 2ª Tener los pisos y las paredes impermeables y bien saneados.
 - 3ª Tener una ventana de 0,90 metros de superficie útil por cada 10 metros cúbicos de capacidad de la habitación.
- l) No se permitirá habitar ninguna buhardilla que tenga menos de 2,15 metros de altura media y cuya iluminación y ventilación natural no estén bien aseguradas.

Ley Municipal

El revestido interior de las paredes, techos y suelo de las habitaciones deberá mantenerse limpio y en buen estado; para el solado se preferirán los materiales impermeables (baldosín bien cocido, cemento comprimido, mosaico ó madera cubierta con barniz adecuado); las paredes y techos se blanquearán, estacarán ó pintarán al temple ó al óleo. El blanqueado se renovará cuando menos una vez al año; el pintado y estucado, una vez cada cinco años.

- m) En los edificios, sea cual fuere su clase, destinados para ser habitados la altura de las habitaciones se ajustará á las mínimas siguientes:

Pisos bajos, 2,60 metros

Idem entresuelos y primero, 2,80 metros.

Los demás pisos 2,60 metros.

El fondo de las habitaciones no podrá exceder del doble de su altura.

- n) No se permitirá alquilar ni habitar ninguna casa d nueva construcción mientras no hayan transcurrido seis meses (de Octubre á Abril) en invierno y cuatro (de Mayo á septiembre) en verano, como máximo, desde la terminación de las obras. Esos períodos podrán reducirse á un minimum de tres y dos meses, respectivamente, en relación con las condiciones climatológicas de la localidad.

VII Alimentos.

- a) Se prohibirá la venta de todo artículo alterado ó en malas condiciones de consumo.
- b) De la misma manera se prohibirá la venta de ningún artículo cuya conservación se haya tratado de asegurar por medio de alguna substancia ó compuesto de los considerados como antiséptico.
- c) Se prohíbe vender, con perjuicio del comprador, todo alimento que no sea de la localidad pedida por éste, que no esté constituido por los alimentos que normalmente entren en su composición, y que no tenga el peso que le corresponda.
- d) Todo lo relacionado con las materias comprendidas en este grupo se ajustará a lo dispuesto en el Real decreto sobre represión de fraudes en las substancias alimenticias de 22 de Diciembre de 1908.
- (1) Piedras, dice la Gaceta, sin duda por error. Querrá decir piezas.

VIII Panaderías.

- a)→Ninguna persona menor de diez y seis años puede estar empleada en una panadería entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana.
- b)→En las poblaciones de más de 5.000 habitantes los techos y las paredes de la panaderías, corredores y despachos deberán estar blanqueados a la cal ó pintados al óleo, con tres manos. En el primer caso se renovará el blanqueo cada seis meses. En el segundo el pintado debe repetirse cada siete años cuando menos. Los techos y las paredes de los locales pintados se lavarán con agua y jabón una vez cada cuatro meses.
- c)→Queda prohibida la existencia de dormitorios en las tahonas para el personal auxiliar de las mismas.
- d)→El agua de los pozos ó fuentes de las panaderías se analizará periódicamente, suspendiendo el trabajo del despacho en cuanto se note la menor contaminación en ese liquido hasta que se haya corregido la causa que la produjera.

Ley Municipal

- e) Se prohibirá igualmente en las tahonas calentar los hornos con maderas viejas procedentes de derribos, sobre todo si han estado pintadas, como asimismo el empleo de carbón de piedra ó de cok, sea cual fuere su procedencia.
- f) Se prohíbe el empleo de muelas ó piedras emplomadas para la fabricación de harinas.

IX Vaquerías.

- a) No se podrá abrir al público ninguna vaquería ni despacho de leche sin que se demuestre que el ó los establos y la habitación en que se deposita la leche están bien alumbrados, ventilados, limpios y provistos de la dotación de agua necesaria.
- b) Los establos para vacas deberán tener tal espacio, que resulten 20 metros cúbicos de aire por vaca, y ocho por cabra ú oveja de los últimos animales.
- c) Las jarras, garrafas y demás utensilios estarán perfectamente limpios. Los que sean estañados lo estarán con estaño fino y cubierto por completo el cobre.
- d) En el momento en que una vaquería se declare una enfermedad en el ganado queda prohibido mezclar la leche de las vacas enfermas con la de las sanas y emplearla como alimento para el hombre. A los animales se les podrá dar, pero sólo después de cocida.
- e) Toda persona atacada de una enfermedad contagiosa ó que haya estado recientemente en contacto con un enfermo de esta clase, no debe ordeñar los animales ni tomar parte de ninguna manara en los cuidados y trabajo de las lecherías hasta que haya pasado un plazo de tiempo que fijará, bajo su responsabilidad, el médico encargado de la asistencia.
- f) En ningún caso se autorizará en lo sucesivo la apertura de ninguna vaquería ni establo en el interior de las poblaciones, como no sea en edificio construido á propósito.

X Lavaderos y baños.

- a) Todas las ropas procedentes de enfermos contagiosos que hayan de darse á lavar serán desinfectadas previamente por inmersión durante veinticuatro horas en una solución desinfectante colocada en una tina de madera con su tapa. Esa inmersión deberá hacerse en la misma casa del enfermo, y cuando esto no fuera posible (por las condiciones de esa casa), en un local destinado al efecto por el Ayuntamiento de la localidad, y bajo la vigilancia y dirección del jefe del Laboratorio municipal ó, en su defecto, del inspector municipal de Sanidad.
En todas las casas de baños deberá existir una estufa de esterilización, de un metro cúbico de capacidad cuando menos, para la desinfección de las ropas (sábanas, toallas que se entreguen á los bañistas). Lo mismo se hará con los peines, cepillos, etc.
- b) Las pilas se enjuagarán, después de bien lavadas, una vez terminado cada servicio, con agua bórica al 5 por ciento.
- c) Queda prohibido á los dueños de establecimientos de baños de aseo y de placer, bajo su responsabilidad especial, la admisión de bañistas que presenten alguna enfermedad contagiosa. Estos deberán presentarse en los establecimientos de baños medicinales, cuyo personal facultativo tomará las medidas necesarias para prevenir el contagio.

XI

Viviendas económicas y casas para obreros.

- a) *Las habitaciones destinadas á dormitorios tendrán las dimensiones necesarias para asegurar ocho metros cúbicos de aire por individuo, y ventilación directa del exterior.*
- b) *Un reglamento especial determinará el número máximo de habitantes que puede tolerarse en cada casa destinada a obreros, teniendo en cuenta sus condiciones de edificación y la capacidad de sus locales.*
- c) *En toda casa de esta clase existirán por lo menos una fuente en el patio principal y otra en cada uno de los pisos, en el sitio más cómodo para que puedan servirse de ella todos los vecinos.*
- d) *Queda prohibido lavar en estas fuentes, ni utilizarlas para otro uso que el de tomar el agua necesaria para los servicios domésticos.*
- e) *Queda igualmente prohibido beber agua directamente del caño de estas fuentes. El que quiera utilizarlas con este objeto llevará siempre un vaso ó vasija apropiada.*
- f) *Los propietarios de estas casas están obligados à blanquear todas las paredes y techos dos veces al año en época normal, una en la primera semana de Marzo y otra en la primera de Octubre. La falta á esta disposición se castigará de la misma manera que se ha dicho en el artículo análogo referente á las casas de dormir.*
- g) *En todos los pisos y en los patios se establecerá el número necesario de water-closets de descarga automática, con su dotación de agua correspondiente, y en habitación aislada y con ventilación directa del exterior, para el servicio de los vecinos. Este número no será nunca menor de uno por cada diez habitantes.*
- h) *En todos los pisos se colocarán una pila de piedra artificial y del tamaño conveniente, con su desagüe especial y su dotación de agua correspondiente, para que los vecinos puedan utilizarla en el lavado de sus ropas.*

XII

Casas de dormir.

- a) *Las casas de dormir no podrán recibir un número de personas mayor del que permita la cubicación de las habitaciones destinadas á este objeto. Esta cubicación será tal, que asegure ocho metros cúbicos de aire por individuo.*
- b) *Los dormitorios se establecerán con separación absoluta de sexos.*
- c) *Cada dormitorio tendrá ventilación directa exterior por ventanas ó balcones, en la proporción se una por cada 20 metros superficiales. Estas ventanas deberán tener por lo menos 2,20 metros de abertura útil, sin contar el marco.*
- d) *En todas las casas de dormir deberán establecerse lavabos de fundición esmaltada ó de mármol, con agua corriente, para uso de los que á ellas acudan. Esos lavabos estarán en la proporción de uno por cada diez asistentes.*
- e) *Igualmente deberán tener water-closets, en número, cuando monos, de dos, uno para cada sexo, debidamente separados y con la dotación necesaria de agua.*
- f) *Los techos y las paredes de todas las habitaciones de estas casas se blanquearán dos veces al año por cuenta de sus propietarios: una en la primera semana de Marzo y otra en la primera de Octubre.*
- g) *No se autorizará la apertura de ninguna casa de dormir que no reúna las condiciones citadas. Las ya existentes se ajustarán á ellas en un plazo máximo de seis meses.*

XIII
Escuelas.

- a) Se elegirán para instalarlas casas bien orientadas, de preferencia al Mediodía, con las habitaciones en primer piso ó en bajo; pero en este último caso sobre sótanos bien aireados y
- b) secos, con ventilación suficiente y fácil y con iluminación lateral; tendrán las paredes y el techo pintados al óleo en color verde claro ó amarillo pálido, y el piso de madera de pino, barnizado con aceite de linaza hirviendo; una superficie que represente cuando menos 90 decímetros cuadrados por alumno, y una altura mínima de 3,5 metros.
- c) En todo local destinado á escuela, y en habitación especial, se instalarán lavabos fijos en la pared, de jofaina basculante ó con vaciado automático de hierro esmaltado, y mejor aun de porcelana, con la dotación de agua necesaria para el servicio de los alumnos, y el jabón y las dotaciones indispensables. Aquel se renovará cuando sea preciso, y éstas se cambiarán por otras limpias dos veces por semana.
- d) Habrá en esos locales los water-closets necesarios, dispuestos de manera que los niños se vean obligados á sentarse sobre la taza ó recipiente, no pudiendo en ningún caso subirse sobre él. El funcionamiento de los depósitos de agua de esos aparatos será automático.
- e) Las ventanas de la clase se abrirán completamente por espacio de cinco minutos en invierno y diez en verano después de cada hora de permanencia de los alumnos. Durante este tiempo pasarán éstos á otra habitación, no volviendo á la clase hasta que se hayan cerrado las ventanas en invierno.
- f) Se elegirá un mobiliario, entre los numerosos modelos hoy existentes, que impida toda posición viciosa en el alumno.
- g) Se dispondrá una fuente para que los niños puedan beber el agua que deseen. Con este objeto, y al lado de aquélla, se tendrá siempre una taza de hierro esmaltado, que dos veces al día cuando menos se sumergirá durante media hora en agua hirviendo, después de haberla limpiado por los medios ordinarios.
- h) La limpieza de los locales destinados á escuelas se efectuarán fuera de las horas de clase, sustituyendo el barrido por el empleo de paños humecidos.
- i) La temperatura d las clases no deben ser en invierno inferior á 14 grados ni superior á 18. Para conseguir esto se dispondrá de un sistema de calefacción el más perfeccionado posible dentro de los recursos de la localidad, pero que debe reunir necesariamente las condiciones de no vaciar el aire de las clases ni exponer á los alumnos á accidentes por el fuego.
- j) No se consentirá la asistencia á las escuelas de alumnos atacados de enfermedad contagiosa, incómoda, repugnante ó peligrosa. Serán especialmente vigiladas las afecciones cutáneas de naturaleza parasitaria, y especialmente la sarna y las tiñas, debiendo reconocer el inspector provincial ó el municipal, según los casos, á todos los alumnos tan pronto como se descubra el primer caso, retirando de la clase al atacado y procediendo inmediatamente á la desinfección del local.
- k) El tiempo mínimo que deberá tardar en volver á la escuela un alumno atacado de enfermedad contagiosa será de cuarenta días para los casos de viruela, escarlatina y tos ferina, de veinte días para los de difteria, y de quince para los de sarampión.
En todos estos casos, así como en los de fiebre tifoidea, se exigirá para recibir nuevamente al niño en la escuela certificado médico en el que conste que no existe ya peligro de contagio y que se han tomado todas las medidas necesarias de desinfección con sus ropas, libros y cuadernos.

Ley Municipal

- l) Los niños en cuya casa haya ocurrido algún caso de enfermedad contagiosa no podrán volver á asistir á las clases sin presentar certificado médico d no haber tenido contacto con el enfermo y de que no presentan síntomas de contagio.
- m) Queda prohibida la costumbre establecida en algunas localidades de que los alumnos acompañen a los entierros de compañeros fallecidos de enfermedades contagiosa, infecciosa ó epidémica. No se admitirá ningún alumno en las escuelas públicas ni privadas, colegios y
- n) establecimientos del Estado, la Diputación ó el Municipio que no presente el documento en que conste que ha sufrido la vacunación ó revacunación, según su edad.

XIV Cafés.

- a) Se exigirá que en todas las vidrieras, así interiores como exteriores, sean móviles hacia adentro los vidrios superiores para facilitar la ventilación del local.
- b) Para la instalación de las bombas que en algunos cafés se utilizan para subir la cerveza desde las cuevas al mostrador de despacho se tendrán presentes las siguientes disposiciones:
 - 1ª Los tubos que conducen el liquido deben ser de vidrio ó de estaño fino.
 - 2ª El aire destinado á suministrar la presión se tomará por un tubo especial de los de patio, á una altura mínima de seis metros sobre el nivel del piso del mismo patio. Ese tubo tendrá su extremo libre encorvado hacia abajo, y el orificio de entrada estará obturado con un tapón de algodón hidrófilo que se renovará cada ocho días.
 - 3ª La limpieza de todo el aparato se verificará con intervalos regulares; cuando más cada quince días.
 - 4ª Estas mismas disposiciones regirán para los hoteles, restaurantes, tabernas, merenderos, etc.

XV *Fábricas y establecimientos insalubres, peligrosos ó incómodos.*

- a) Se cumplirán estrictamente las disposiciones consignadas en las Ordenanzas y reglamentos municipales y de policía urbana referentes á la instalación y explotación de los establecimientos de esta clase, sin perjuicio de lo prevenido en relación con ellos en las leyes sociales hoy vigentes.
- b) Las aguas residuales nocivas de las fábricas se dispondrá que sean purificadas antes de incorporarse á las aguas públicas.
- c) Las fábricas de hielo emplearán para elaborar éste exclusivamente aguas potables, así desde el punto de vista químico como del bacteriológico, y mejor todavía el agua procedente de las condensaciones de las calderas de vapor, recogida al efecto y conservada en recipientes especiales. Estos deberán estar construidos con hierro galvanizado ó estaño, con estaño de 990 milésimas.

XVI Cementerios.

- a) Se estudiará á la mayor brevedad posible la situación y emplazamiento de los actuales cementerios, examinando su orientación, distancia á las habitaciones, y muy especialmente la naturaleza y composición de las aguas de filtración de los mismos, analizándolas

Ley Municipal

detalladamente y precisando la distancia á que de ellos pasan los conductos ó cañerías de agua potables, caso de que existieran en las inmediaciones, para poner en claro sí esas filtraciones pueden influir en la composición de éstas.

- b) Caso de que esa contaminación fuera posible, se establecerá un sistema de saneamiento del suelo del cementerio, llevando las aguas resultantes por el camino más corto y en las mayores condiciones de aislamiento á la alcantarilla ó corriente de agua de evacuación más cercana.
- c) Por los Municipios que cuentan con recursos para ello se estudiará el medio de instalar en cada cementerio un horno crematorio, en el que se distribuirán todos los restos que hoy se confían á la fosa común, transcurrido el tiempo que señalan las disposiciones vigentes en la materia.
- d) Queda prohibida toda visita en épocas fijas del año á los cementerios, y más especialmente en época de epidemia.
- e) Se dispondrá que el tiempo de epidemia se cubra cada cadáver que se sepulte con una capa de cal viva de 50 centímetros cuando menos de espesor.

XVII

Defensa contra las enfermedades contagiosas.

a) Se prohibirá escupir en el suelo en todos los lugares públicos de reunión, iglesias, teatros, cafés, escuelas, fábricas, oficinas, coches, tranvías, etc., y en las aceras de la vía pública. A este efecto, se dispondrá que en todos estos sitios se coloquen, distribuidas profusamente, escupideras metálicas conteniendo serrín d madera empapado en solución al 45 por 100 de sulfato de cobre, y rótulos ó carteles en los que con letras bien visibles se recuerde este precepto. Estos recipientes se vaciarán las veces que fuere necesario al día en uno mayor, cuyo contenido, ó bien se arrojará en la alcantarilla más cercana, añadiendo, para hacer más fácil y completa esta limpieza, la cantidad precisa de solución de sulfato de cobre para dar fluidez á la mezcla, ó bien se destruirá por el fuego donde no hubiera alcantarillado

Será conveniente que esta precaución se adopte también en los comercios, hoteles, escaleras y habitaciones de las casas particulares y, en una palabra, en todas partes, puesto que, además de constituir un hábito de limpieza, es una precaución importantísima para prevenir el contagio d enfermedades graves.

b) Será obligatorio el blanqueo, estucado ó pintado de aquellas habitaciones en las que hubiera permanecido un atacado de enfermedad contagiosa. Esas operaciones se efectuarán después de una desinfección previa de esas paredes y techo por medio de la solución al 1 por 1.000 de sublimado ó del formaldehído, y los gastos producidos se abonarán por mitad entre el inquilino y la Administración municipal si aquél contara con recursos para ello, ó entre esta última y el propietario de la casa en el caso contrario.

c) Las Administraciones central, provincial y municipal exigirán que todos sus dependientes y las familias de éstos sufran la vacunación y la revacunación en tiempo oportuno, reclamando el comprobante de haberlo efectuado, que se entregará por las oficinas encargadas d este servicio.

d) Por el Estado, la Diputación y el Municipio se procederá en la época oportuna á la vacunación y la revacunación del personal que de ellos depende.

f) La vacunación y revacunación serán gratuitas para todas aquellas clases de la sociedad cuyos medios no les permitan abonar la pequeña cantidad que debe fijarse como retribución por esta clase de servicios.

g) En tiempo de epidemias se prohibirá la costumbre de la permanencia de los cadáveres en las casas. Esta prohibición se aplicará en tiempo normal siempre que se trate de fallecimiento por enfermedad infecciosa.

Ley Municipal

- h) En tiempo de epidemias se aplicarán con todo rigor las medidas necesarias con todo rigor las medidas necesarias para asegurar el aislamiento en su casas, y de no ser esto posible en hospitales especiales de los enfermos.
- i) En la casa en que ocurra un caso de enfermedad contagiosa se tomarán las precauciones siguientes:
- 1ª Se desinfectarán dos veces al día cuando menos los retretes, vertiendo en cada uno, y de una sola vez, 10 litros de solución de sulfato de cobre al 5 por 100.
 - 2ª Se dispondrá un recipiente apropiado en el que se verterá una solución desinfectante. En está se sumergirán todas las ropas de cama é interiores de vestir, pañuelos, servilletas, etc., que utilice el enfermo, manteniéndolas veinticuatro horas, transcurridas las cuales se aclararán, reuniéndolas aparte para enviarlas á lavar.
 - 3ª Todo utensilio que utilice el enfermo, vasos, copas, tazas, cucharas, etcétera, se pondrá aparte y sumergirá inmediatamente después de usado en agua hirviendo, en la que permanecerá quince minutos, pasados los cuales podrá lavarse como de ordinario.
 - 4ª En las escupideras y servicios que utilice el enfermo se pondrá serrín de madera empapado en solución al 5 por 100 de sulfato de cobre. Con la misma solución se diluirán las materias recogidas para verterlas en los retretes de las casas á medida que vaya siendo necesario.
 - 5ª En la habitación que ocupe el enfermo se suprimirán todas las colgaduras, tapices, alfombras, y muebles de tapicería, dejando sólo los más indispensables para su servicio
- o) Se prohibirá, bajo pena de multa que fijará la autoridad municipal:
- 1º Que toda persona atacada de una enfermedad contagiosa se presente sin haber tomado las precauciones necesarias en la vía pública, tiendas, hoteles, tranvías y establecimientos de todas clases; si tomara algún coche, deberá antes prevenir al cochero de la enfermedad que padece. La prohibición anterior se hará extensiva á toda persona que esté encargada de cuidar á un enfermo de esta clase
 - 2º Dar, vender, prestar, expedir, ó exponer ropas de cama, vestidos ú otros objetos que hayan estado en contacto con individuos afectos de una enfermedad contagiosa y que no hayan sido previamente desinfectados
 - 3º Que todo coche que con consentimiento del cochero haya transportado enfermo alguno de esta clase vuelva á prestar servicio sin ser previamente desinfectado. El que haya tomado el coche abonará al cochero, además del precio del servicio, los gastos de desinfección, más una indemnización por el tiempo que pierde en esta operación.
 - 4º Que la casa, habitación ó departamento habitado por un enfermo infeccioso se alquile nuevamente sin una desinfección previa, que será abonada por quien corresponda, con arreglo á las tarifas sanitarias vigentes.
 - 5º Que ningún propietario de hotel alquile una habitación, sea cual fuere su clase, en la que haya permanecido un enfermo infeccioso. Hasta que haya sido debidamente desinfectada.
- p) Será obligación del médico que asista á un enfermo infeccioso avisar al servicio local de desinfección para que éste proceda inmediatamente á practicarla, indicando la enfermedad de que se trata.
- q) La desinfección se hará dentro de las veinticuatro horas siguientes á aquella en que se reciba el aviso, y comprenderá el local, los muebles y objetos que se encuentren en el mismo, y las ropas de cama y de uso del enfermo, los cuales se devolverán á la familia una vez practicada la operación, con el documento que acredite haberse llevado á cabo.
- r) Se transportará al hospital por cuenta de la Administración á todo atacado de enfermedad contagiosa que no disponga de una habitación especial para su uso exclusivo, ó que habite un cuarto ocupado por más de una familia.

XVIII

Defensa contra las enfermedades contagiosas en los animales.

En lo referente á los medios de defensa contra las enfermedades contagiosas de los animales hay que ajustarse á lo que dispone el reglamento de policía sanitaria de los animales domésticos de 3 de Julio de 1904.

XIX

Penalidad.

Las infracciones á los preceptos y disposiciones contenidas en el presente reglamento se castigarán en la forma y con la penalidad establecida en los artículos 201 á 209 (ambos inclusive) de la instrucción general de Sanidad pública aprobada por Real orden de 12 de enero de 1904 y en los 356, 357, 547, 548, 549, 592, 595, y 596 del Código penal vigente, según el caso particular de que en cada momento se trate.

Madrid, 12 de Octubre de 1910.- Aprobado.- F. Merino.

Existiendo en Madrid tres Dispensarios antituberculosos, emplazados á bastante distancia entre sí para que puedan atender á las necesidades de otras tantas zonas d la población, y conviniendo para mayor comodidad de los enfermos que éstos sean asistidos en el Dispensario más próximo á su domicilio.

S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:

1º Que en el Real Dispensario antituberculoso Victoria Eugenia sean asistidos los enfermos que habiten en la zona comprendida entre las calles de Bravo Murillo, Fuencarral, Montera (acera de la izquierda), Puerta de Sol, Calle Mayor, Cuesta de la Vega y carretera de Extremadura (acera de l derecha).

2º Que en el María Cristina lo sean los que habiten en la zona comprendida entre las calles de Bravo Murillo, Fuencarral, Montera (acera de la derecha), Puerta del Sol, Carretas, Atocha y Puente de Vallecas (acera de la izquierda).

3º Que en el Príncipe Alfonso lo sean los de la zona comprendida desde el Puente de Vallecas y calles de Atocha (acera de la derecha), Carretas Puerta del Sol, Mayor, Cuesta de la Vega y carretera de Extremadura 8acera de la izquierda).

De Real orden lo diga á V. S. para su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid, 5 de Diciembre de 1910.-Merino.-Ilustrísimo señor inspector general de Sanidad.

En el libro original esta ley ocupa las páginas 287 a 327 ambas inclusives.

LEY DE 11 DE JULIO DE 1912.

Creación de los Cabildos insulares en las islas canarias.

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución. Rey de España;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado, y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1º. El territorio de la nación española que constituye el archipiélago canario, cuya capitalidad reside en Santa Cruz de Tenerife, conservará su unidad, atendándose los servicios públicos en el modo y forma que se determina en esta ley.

Artículo 2º. El archipiélago canario mantendrá organización actual en los ramos militar y judicial, continuando como hasta aquí establecidas, con jurisdicción en todo él. La Capitanía general en Santa Cruz de Tenerife, la Audiencia territorial en Las Palmas.

Artículo 3º. Completando su organización, se establecerá por el Ministerio de la Guerra un gobierno militar en la isla de la Palma, que será desempeñado por un general de brigada.

Artículo 4º. Para facilitar la más pronta y económica administración de los asuntos judiciales, por el Ministerio de Gracia y Justicia se creará una Audiencia provincial en Santa Cruz de Tenerife en iguales condiciones que las existentes en las demás capitales de provincia, con facultades para el nombramiento de los jueces, fiscales y adjuntos de los Tribunales municipales de Tenerife, Palma, Gomera y Hierro, funcionando en ella el Tribunal contencioso-administrativo.

Para la celebración de los juicios orales en lo criminal continuarán actuando las Secciones como hasta aquí, constituyéndose en las poblaciones del archipiélago indicadas por la ley.

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se crearán Juzgados de primera instancia e instrucción en los pueblos de Los Llanos, de la isla de La Palma, en las capitales de las islas de Hierro y Fuerteventura, uno en Icod, de la isla de Tenerife, y habrá dos en Las Palmas, que se denominarán de Triana y de Vegueta.

La creación de los nuevos Juzgados no alterará el número de diputados provinciales que corresponda elegir en cada isla ó comarca.

Artículo 5º. Se crearán Corporaciones administrativas denominadas Cabildos insulares en cada una de las siete islas que forman el archipiélago canario.

El cabildo insular tendrá un número de vocales proporcional á la población de su isla respectiva, siendo los de Tenerife y gran Canaria uno por cada 5.000; los de La Palma, uno por cada 2.000; y los de las cuatro islas restantes, uno por cada 1.000.

La elección de los vocales se hará por sufragio directo en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del reglamento de esta ley, renovándose en lo sucesivo por mitad cada dos años en la época de la elección bienal de los Ayuntamientos.

Las atribuciones de los Cabildos serán:

a) Propias, ó sean de la exclusiva competencia de los mismos.

Las que el artículo 74 de la ley Provincial atribuye a las Diputaciones provinciales, en cuanto sea propio y peculiar de cada una de las islas.

Ley Municipal

- b) Como Corporaciones de categoría superior á los Ayuntamientos, las que se atribuyen á las Diputaciones y Comisiones provinciales por los artículos 75 de la ley Provincial y 7º, 21, 76 y 165 de la ley Municipal y Real decreto de 24 de Marzo de 1891.
- c) Funciones consultivas en materia de aguas, fomento, instrucción, sanidad, beneficencia y obras públicas, en todo lo que respecta á cada una, y según se determina en el artículo 102 de la ley Provincial.

La Hacienda de los cabildos insulares estará constituida:

1º Por los recursos que procedan así de rentas ó productos de toda clase de bienes, derechos ó capitales que por cualquier concepto les pertenezca y no formen parte hoy de la Hacienda provincial ó de establecimientos que dependan de los Cabildos, como los de obras públicas , instituciones ó servicios costeados de sus fondos .

2º Por las subvenciones voluntarias de los Ayuntamientos.

3º Por los arbitrios y demás recursos autorizados por la ley Municipal á los Ayuntamientos, previo informe de los mismos.

Los Cabildos insulares consignaran como primera partida de su presupuesto anual la suma que les haya sido repartida por las Diputaciones provinciales en concepto de contingente.

Un reglamento dictado por el Gobierno dentro del plazo de cuatro meses á partir de esta ley determinará el funcionamiento de los Cabildos insulares, el carácter de sus resoluciones y los recursos que contra los mismos proceda.

Por asuntos de interés común á dos ó más islas se autorizan las mancomunidades de cabildos.

Artículo 6º. La Diputación provincial del archipiélago canario funcionará con arreglo á lo prevenido en la ley orgánica de 29 de Agosto de 1882 y demás disposiciones vigentes en todo lo que sea compatible con los cabildos insulares.

El Gobierno podrá establecer Delegaciones en el archipiélago canario, con arreglo á las disposiciones vigentes.

Artículo 7º. Se crearán en la ciudad de Las Palmas una Jefatura de Obras públicas y organismos para los servicios económicos del Estado, con iguales funciones que las establecidos en las capitales de provincia.

En cada isla menor se creará una Depositaria Pagaduria.

Se creará un Distrito forestal con residencia en Las Palmas, y una oficina auxiliar del Distrito forestal hoy existente en Santa Cruz de la Palma.

Esta última tendrá además una Administración Depositaria de Hacienda, una oficina auxiliar de Obras públicas, una Administración de Correos en Santa Cruz de la Palma y una Estafeta de Correos en Los Llanos.

Se creará una oficina auxiliar de Obras públicas en Arrecife.

Por el Ministerio de Hacienda se creará una Administración subalterna en Arrecife, y por el de Fomento se creará una Granja agrícola en Guía de Gran Canaria.

Y se creará una hijuela de la Granja agrícola de Canarias en el Valle de la Orotava.

Artículo 8º. Se autoriza al ministerio de Instrucción pública para establecer en La Laguna Centros docentes en relación con las necesidades del archipiélago.

Se crearán Escuelas de Artes y Oficios en las islas de La Palma, Lanzarote y Gomera, y una escuela de Comercio en Las Palmas.

La Escuela municipal de Artes y Oficios que existe en Santa Cruz de Tenerife se elevará á Escuela del Estado, ingresando su profesorado en el escalafón oficial.

Ley Municipal

Artículo 9º. La provincia de Canarias elegirá tres senadores , como actualmente.

En cada isla, y ante las Secciones de la Junta provincial del Censo, votarán los respectivos compromisarios y diputados provinciales, y el escrutinio general se verificará en la capital de la provincia

La división electoral para diputados á Cortes será la siguiente:

1º La isla de Tenerife formará un distrito, que elegirá tres diputados; la de La Palma nombrará uno, como actualmente, y la Gomera y Hierro constituirán cada una un distrito, eligiendo su diputado, estableciéndose Secciones independientes de la Junta provincial del Censo las que han de funcionar en Santa Cruz de la Palma, en San Sebastián de la Gomera y en Valverde. Si el censo de población de la isla de La Palma acusase cifra mayor de 50.000 almas, elegirá dos diputados , uno por el distrito de Santa Cruz de la Palma y otro por el distrito de Los Llanos.

2º. La isla de Gran Canaria formará un distrito, que elegirá tres diputados; la de Lanzarote, uno y la de Fuerteventura, otro diputado, constituyendo Secciones independientes de la Junta provincial del Censo, que deben establecerse en Arrecife y Puerto de Cabras.

Artículo 10º. Se autoriza al ministro de Hacienda para que, promulgada la presente ley, requiera á la Sociedad Arrendataria de Tabacos para convenir el restablecimiento de lo estipulado en la base 8ª del contrato que se celebró el 20 de Octubre de 1900 entre el Estado y dicha Compañía, por la cual se adquirirán anualmente hasta 100.000 kilogramos de tabaco en rama de producción canaria, y para convenir también la venta en comisión del tabaco elaborado en dicha provincia.

En su virtud, quedan derogadas las Reales órdenes de 23 de Noviembre de 1899, 19 de febrero y 1º de Noviembre de 1903, y el tabaco en rama producido y cultivado en Canarias y la elaboración del mismo por la industria del país se considerará como producción española, quedando, por tanto, comprendido entre los demás productos exceptuados que se enumeran en el artículo 7º de la ley de 5 de Marzo de 1900, siempre que el referido tabaco en rama sea destinado á las fábricas del monopolio y el elaborado á la venta en comisión por la Sociedad Arrendataria. Dicha comisión se fijará por el ministro de Hacienda á propuesta de la Compañía, pues nunca podrá exceder del 25 por 100 sobre el precio convenido para la venta al público del producto elaborado.

Artículo 11º. Sin perjuicio de las actuales franquicias arancelarias que disfruta el archipiélago canario, se autoriza al ministro de Hacienda para establecer en las ciudades de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de la Palma y Arrecife zonas libres para la mercancías de tránsito á plazas extranjeras.

Artículo 12º. La nueva organización determinada por esta ley sólo podrá ser modificada por otra ley.

Disposiciones transitorias.

1ª Dentro de los seis meses siguientes á la publicación de esta ley se convocarán las elecciones de diputados á Cortes por los nuevos distritos de Lanzarote, Gomera, Fuerteventura y Hierro.

2ª La organización establecida por la presente ley quedará implantada dentro del término de seis meses, debiendo dictar el Gobierno con la conveniente anticipación las disposiciones complementarias que juzgue pertinentes.

3ª Cuidará también el Gobierno al organizar los servicios administrativos de Canarias de unificar las gratificaciones de residencia y computo de tiempo de servicio de que disfrutaban los funcionarios del Estado en dichas islas, fijando lo que deben percibir desde la fecha indicada en la primera de estas disposiciones.

Artículos adicionales.

1º Esta ley no empezará á regir mientras no se dicte el reglamento de los Cabildos insulares, el cual quedará publicado en el improrrogable término de cuatro meses.

2º Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al cumplimiento ejecución de la presente ley.

Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á 11 de Julio de 1912- Yo el Rey.- El presidente del consejo de ministros. José Canalejas.

REAL DECRETO DE 12 DE OCTUBRE DE 1912

Aprueba el reglamento para el régimen de los Cabildos insulares en las islas Canarias.

EXPOSICIÓN

Señor: La Ley especial de 11 de Julio último sobre la reorganización administrativa y representación en Cortes de las islas Canarias impone al Gobierno por su artículo 5º que en el improrrogable plazo de cuatro meses á partir de su publicación se dictará el reglamento que determine el funcionamiento de los Cabildos insulares el carácter de su resoluciones y los recursos que contra los mismos proceda.

Pronto á vencer este plazo imperativo, obliga su ejecución pues de otro modo no sólo quedaría incumplido el mandato legal, sino que se imposibilitaría el efectivo planteamiento de la nueva reorganización en uno de sus aspectos más fundamentales, como será siempre la creación de los Cabildos insulares, organismos de perfecta autonomía local que representan la más provechosa descentralización administrativa, el completo reconocimiento del derecho de las islas á sus administración propia, respondiendo además á las necesidades y deseos de la vida moderna, á las aspiraciones bien definidas en amplias informaciones públicas y á las concretas manifestaciones de los legítimos representantes en Cortes de aquella hermosa y querida región española.

La indiscutible importancia y trascendencia que reviste el funcionamiento de dichos Cabildos, por influir muy directamente en los actos más fundamentales de la vida local de la islas, obliga á que se autorice y publique este reglamento con carácter provisional, con el propósito del mejor acierto, para que una vez conocido y ejecutado puedan recogerse las siempre beneficiosas enseñanzas de la práctica, completándose de este modo la labor organizadora que realizada, se someterá á su debido

Ley Municipal

y oportuno tiempo á los necesarios informes de los respetables Cuerpos consultivos, justificándolo además esta declaración de carácter provisional la urgencia que ahora obliga á su publicación por la premura de los plazos de la ley citada, y que resulta admitida en el apartado 8º del artículo 27 de la ley orgánica del Consejo de Estado de 8 de Mayo de 1904,.

Fundado en las consideraciones expuestas, el ministro que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de Vuestra Majestad el adjunto proyecto decreto.

Madrid, 12 de Octubre de 1912.- Señor: A.L.R.P. de V.M. , Antonio Barroso y Castillo.

REAL DECRETO

De acuerdo con mi Consejo de ministros y á propuesta del de la Gobernación,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Se aprueba con carácter provisional, para que en tal sentido rija desde luego, el adjunto reglamento sobre funcionamiento y organización de los Cabildos insulares de las islas Canarias.

Dado en Palacio á 12 de Octubre de 1912.- ALFONSO.- El ministro de la Gobernación, Antonio Barroso y Castillo.

REGLAMENTO PROVISIONAL

para el régimen de los Cabildos insulares en las islas Canarias.

Artículo 1º.- El régimen y administración del archipiélago canario corresponderá en lo sucesivo, y con arreglo á los preceptos de la ley de 11 de Julio de 1912:

1º Al gobernador, como representante del Gobierno.

2º A la Diputación y Comisión provincial.

3º A los Cabildos insulares.

Artículo 2º La Diputación provincial continuará funcionando con arreglo á lo prevenido en la ley orgánica de 29 de Agosto de 1882, y demás disposiciones vigentes, pero sólo en cuanto afecta á los asuntos de interés general y común del archipiélago canario y sea compatible con el funcionamiento ordenado y reglamentario de los Cabildos insulares, en vista de lo dispuesto en el artículo 6º de la ley citada.

Artículo 3º En el cumplimiento de lo establecido en el artículo 5º de la ley de 11 de Julio de 1912 referida, el gobierno peculiar de cada isla será encomendado á un Cabildo insular, como Corporación administrativa y representación legal del territorio á que se extienda su acción.

Estos Cabildos se compondrán de un número de vocales ó consejeros proporcional al de sus habitantes, siendo los de Tenerife y Gran Canaria uno por cada 5.000; los de La Palma, uno por cada 2.000; y los de las cuatro islas restantes, uno por cada 1.000.

Cuando la proporción no resulte exacta por exceso del número de habitantes, se elegirá un consejero más.

Cada Cabildo insular tendrá para su funcionamiento un presidente, un vicepresidente, uno ó dos procuradores síndicos y una comisión permanentes, síndicos y una comisión permanente, elegidos por el Cabildo mismo en la forma que se determinará más adelante.

Artículo 4º.- El Gobierno, haciendo uso de la facultad que le concede el apartado 2º del artículo 6º de la ley citada de 11 de Julio de 1912 para establecer delegados en el archipiélago canario, autoriza

Ley Municipal

su creación y funcionamiento desde luego en las islas de Gran canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Palma, Gomera y Hierro.

Estos funcionarios actuarán con facultades delegadas del gobernador, y sus providencias serán ejecutivas en los casos siguientes: Cuando se trate de recursos contra los acuerdos que adopten los Cabildos en materia de su especial competencia, según el artículo 5º de la ley especial citada, y asimismo en los asuntos á que se refiere el artículo 75 de la ley Provincial, los artículos 7º, 21, 76, y 165 de la ley Municipal, Real decreto de 24 de Marzo de 1891 y artículos correspondientes de este reglamento.

En estos casos, contra las providencias de los delegados, que no podrán dictarse más que por infracción manifiesta y definida de la ley, no procederá otro recurso que el contencioso provincial.

Los vecinos interesados en los acuerdos á que se hace referencia quedan autorizados asimismo para acudir á mantener sus derechos ante el Tribunal contencioso provincial en los plazos marcados al efecto.

En los acuerdos que adopten los Cabildos referentes á recursos electorales ó á incapacidades de carácter municipal sólo se admitirán los recursos establecidos por el Real decreto de 24 de Marzo de 1891, directamente ante el Ministerio de la Gobernación, en los plazos marcados en el mismo.

En los demás asuntos, y especialmente en los encomendados por las leyes orgánicas Provincial y Municipal á los gobernadores, y que no sean de las atribuciones de los Cabildos, con arreglo á lo definido en el artículo 5º de la ley citada y disposiciones armónicas y complementarias de este reglamento, las providencias de los delegados serán sometidas al gobernador de la provincia en consulta inmediatamente.

Esta autoridad, en el plazo de tres días improrrogables, sancionará la consulta, ó recabará para sí la resolución del expediente en el caso de disconformidad.

El delegado de la Gran Canaria tendrá categoría de jefe de Administración de tercera clase.

El Gobernador y los delegados en su caso podrán presidir los Cabildos insulares y sus Comisiones permanentes, en la misma forma prescrita en las leyes orgánicas Provincial y Municipal.

Los Cabildos insulares funcionarán como Comisiones mixtas para entender en lo que á la isla afecta, en las operaciones del reemplazo del ejercito y sus incidencias, conforme á la ley de reclutamiento vigente.

Estos Cabildos designarán de su seno dos consejeros y un médico como vocales civiles para formar dicha Comisión, correspondiendo al Ministerio de la Guerra la designación de los jefes ú oficiales del ejercito que han de constituir la Comisión expresada, presidiéndolo el del Cabildo insular y actuando de secretario el del mismo.

Artículo 5º.- Con arreglo al censo de población vigentes, los Cabildos se constituirán en la actualidad en la forma siguiente:

Tenerife elegirá 28 consejeros.

Gran Canaria, 26 ídem.

Palma, 24 ídem.

Lanzarote, 19 ídem

Gomera, 16 ídem.

Fuerteventura, 12 ídem.

Hierro, 7 ídem.

Cuando como consecuencia de futuros censos parezcan variaciones en las poblaciones de las islas respectivas, no se alterará el número de consejeros hasta la primera renovación bienal del Cabildo que se efectué después de declarado oficial el nuevo censo.

El aumento de individuos del Cabildo por los motivos anteriormente expuestos se acordará por el Cabildo mismo con cuatro meses de anticipación á la elección, señalándose en el acuerdo el distrito

Ley Municipal

por donde haya de ser elegido el vocal que se aumente, y haciéndose público este acuerdo en Boletín extraordinario de la provincia.

Contra este acuerdo se podrá recurrir en el plazo de diez días ante la Diputación provincial, y la resolución que se dicte será ejecutiva y firme.

Elección, constitución y funcionamiento de los Cabildos.

Artículo 6º.- La elección de los vocales del Cabildo se hará por sufragio directo, sujetándose en un todo á lo prevenido en la Ley Electoral de 8 de Agosto de 1907 y sus disposiciones complementarias.

La elección de vocales correspondiente á cada Cabildo se efectuará por partidos judiciales, que vendrán á constituirse en distritos electorales, asignándose á cada uno de estos el número de vocales correspondiente al de habitantes que sumen los pueblos que constituyan el partido judicial.

Las islas de Gomera, Fuerteventura y Hierro se considerarán á este efecto como si constituyeran cada una un partido judicial.

Todos los distritos electorales se dividirán en las secciones y Colegios correspondientes con arreglo á lo dispuesto en el artículo 23 de la ley Electoral vigente.

Artículo 7º.- La ley Electoral anteriormente citada regirá en todo para cuanto se refiera el régimen electoral, tanto para la proclamación de candidatos como para la agrupación de vocales, con arreglo al artículo 21 de dicha ley, constitución de Mesas, procedimiento activo de la elección y cuanto á la misma se refiera, como si se tratase de elección de concejales.

Las reclamaciones contra dichas elecciones é incapacidades se tramitarán en la forma y plazos prevenidos por el Real decreto de 24 de Marzo de 1891 hasta tanto que se reforme esta legislación.

Para la proclamación de candidato ó sea para la aplicación del artículo 24 de la ley Electoral vigente, las Juntas provinciales, que serán las que actuarán en todo lo que á la elección de Cabildos se refiera, como si se tratase de elecciones de diputados provinciales, declararán candidatos á los que lo soliciten el domingo anterior al señalado para la elección, siempre que reúnan alguna de las siguientes condiciones:

1º Ser propuesto por dos concejales ó exconcejales del Ayuntamiento que forme el distrito respectivo.

2º Ser propuesto por dos diputados ó exdiputados provinciales de la misma isla.

3º Ser ó haber sido propuesto por dos personas que reúnan tales condiciones.

4º Haber sido propuestos como candidato por la vigésima parte del número total de electores del distrito y en la forma prevenida en el artículo 25 de la ley Electoral vigente.

Artículo 8º Son condiciones precisas para ser admitido como vocal del Cabildo insular:

1º Ser español, mayor de edad, gozar de todos los derechos civiles y políticos, y ser vecino de cualquiera de los municipios de la isla con dos años de residencia fija justificada por la inscripción en los padrones municipales.

2º Haber sido elegido y proclamado electo con arreglo á las disposiciones de la ley electoral vigente, siempre que reúna las condiciones de vecindad anteriormente señaladas.

3º No estar inhabilitado por cualquier motivo de incapacidad personal para obtener el cargo el día en que se verifique la sesión de constitución del Cabildo.

Artículo 9º Están incapacitados para ser vocales de los Cabildos:

1º Los comprendidos en alguno de los casos que determina el artículo 3º de la ley Electoral para diputados á Cortes y concejales.

2º Los contratistas de obras ó servicios públicos que se costeen con fondos del Estado, de la Provincia, del Cabildo ó de los Municipios de la isla; los que de resultas de tales contratas tengan

Ley Municipal

pendientes reclamaciones de interés propio contra la administración, y los fiadores y consocios de dichos contratistas.

3° Los que desempeñan ó hayan desempeñado un año antes en el distrito en que la elección se verifique cualquier empleo, cargo ó comisión de nombramiento del Gobierno, ó ejercido función de la carrera judicial y fiscal, aun cuando fuera con carácter de interinidad ó sustitución, autoridad de elección popular, en cuyo concepto se comprenden el presidente de la Diputación y los diputados que durante el año anterior hubiesen desempeñado el cargo de vocal de la Comisión provincial, los militares que forman parte de las Comisiones mixtas de Reclutamiento y Reemplazo, y el presidente de los Cabildos y los vocales que integran en Comisión permanente.

Las incapacidades á que se refiere este número se limitarán á los votos emitidos en el distrito electoral adonde alcance la autoridad ó funciones de que haya estado investido el vocal electo.

En los casos de incapacidad referentes á servicios, contratos y suministros dentro de la isla por cuenta de sus Ayuntamiento, de la Provincia ó del Estado, está sólo procederá si el interés afectare á los que tengan cargos de gerencia ó administración ó a los partícipes en un 20 por 100 ó más del capital social.

Artículo 10. El cargo de vocal del Cabildo es incompatible con los de concejal, diputado provincial, notarios, registradores y demás personas que desempeñen cargos públicos de cualquier clase que sean, bien del Estado, de la Provincia, del Municipio ó del Cabildo, aun cuando se haya renunciado el sueldo ó remuneración.

Se exceptúan únicamente de esta incompatibilidad se produce y será declarada desde el momento en que, obtenido por el consejo cargo cualquiera retribuido, no lo renuncie en el plazo de ocho días, dando cuenta al secretario del Cabildo.

Transcurrido el plazo expresado sin recibirse la renuncia, se declarará la vacante, por entenderse renunciado el cargo vocal del Cabildo.

Artículo 11. El cargo de vocal del Cabildo es gratuito y obligatorio.

Esto no obstante, podrán excusarse de su desempeño ocho días antes del marcado para la constitución de dicho Cabildo los que documentalmente justifiquen encontrarse en alguno de los siguientes casos:

1° Los que no sepan leer ni escribir .

2° Los mayores de setenta años.

3° Los impedidos físicamente, cuando lo justifiquen con las debidas certificaciones.

4°. Los que hayan sido senadores, diputados á Cortes, diputados provinciales, vocales de Cabildo y concejales, hasta dos años después de haber cesado en sus respectivos cargos.

Artículo 12 Sobre las incapacidades y excusas, dimisiones y renunciaciones de cualquier cargo correspondientes al Cabildo sobrevenidas después de las elecciones entenderá siempre el Cabildo en pleno correspondiente.

Si no estuviera reunido ó convocado el Cabildo, dictaminará la Comisión permanente del mismo, con la aportación de los datos ó justificantes necesarios que servirán de ponencia, y se resolverá en la primera reunión que haya de celebrarse por el Cabildo, á no ser que la urgencia del caso obligase á una convocatoria especial.

Si la incapacidad, excusa ó renuncia se refiriese al presidente, vicepresidente ó síndico ó a alguno de los individuos que forman la comisión permanente, será convocado el Cabildo en pleno en el plazo de cuarenta y ocho horas para sesión extraordinaria.

Contra los acuerdos de los Cabildos en tales materias no se da otro recurso que el de nulidad por infracción de la ley ante el Tribunal contencioso-administrativo provincial, salvo siempre la responsabilidad exigible á los vocales del mismo.

El plazo para entablar el recurso contencioso será el ordinario, á contar desde la fecha del acuerdo.

Ley Municipal

Por cada día de demora de remisión del expediente incurrirá el presidente del Cabildo en una multa de 100 pesetas que le impondrá de oficio el Tribunal contencioso.

Artículo 13. Para la declaración de las incapacidades deberá tenerse muy en cuenta lo siguiente: La contienda administrativa judicial ó la existencia de reclamación administrativa deberá entenderse cuando se justifique documentalmente verdadera colisión de derechos ú oposición de intereses bien demostrada entre el vocal y el Cabildo, existiendo presentación en forma legal de demanda , ó escritos encaminados á mantener derechos é intereses particulares que pugnen ó perjudiquen justificadamente los del Cabildo.

Se consideran como deudores á los fondos municipales, provinciales, del Cabildo ó generales á los contribuyentes de cualquier grado que hayan sido declarados como tales por disposición firme de carácter judicial ó administrativo, siendo condición precisa además la declaración de haber sido apremiados, hecho que debe justificarse también documentalmente.

No se considerarán motivo de incapacidad los contratos de locación ú otros análogos de carácter fijo que no pueda ser alterado y que no signifique, por tanto, la probabilidad de que pueda ejercerse acción alguna contraria a los intereses del Cabildo por pertenecer el interesado á la Corporación.

De la elección de vocales del Cabildo.

Artículo 14. Los vocales del Cabildo insular serán elegidos directamente por los electores de los respectivos distritos de la isla; pero después de nombrados y admitidos por el Cabildo representan individual y colectivamente á la isla á que éste pertenece.

Los Cabildos se renovarán por mitad cada dos años en la época de la elección bienal de los Ayuntamientos y en virtud de lo prevenido en el artículo 57º de la ley citada de 11 de Julio de 1912.

Artículo 15. La primera renovación se hará por medio de sorteo de los distritos en que fueron elegidos los vocales, Verificándose la elección en la mitad designada por la suerte y quedando señalado así el turno de las renovaciones sucesivas.

Artículo 16. En las elecciones bienales los vocales de los Cabildos se elegirán simultáneamente con los concejales del Ayuntamiento del distrito respectivo, interviniendo las Mesas, con el presidente y adjuntos determinados por la ley Electoral, los interventores designados tanto por los candidatos proclamados para vocales del Cabildo por la Junta provincial del censo respectiva, cuando los que hubieren designados los candidatos á concejales proclamados por la correspondientes Junta municipal del Censo.

Artículo 17.- La elección, como anteriormente queda expresado, se verificará en la forma prevenida por la Ley Electoral vigente, sin más diferencia que la obligación de las Mesas electorales de levantar dos actas distintas, una referente á la votación de los concejales y otra á la votación d los concejales y otra á la de los Cabildos insulares, cuyas actas se remitirán las de los concejales á sus Juntas municipales y todas las de Cabildos á las provinciales, en la forma prevenida á estos efectos por la ley Electoral referida.

Artículo 18. Se procederá á la elección parcial cuando medio año antes por lo menos d las elecciones ordinarias ocurran vacantes que ascienden á la tercera parte del numero total de vocales del Cabildo insular.

Para los efectos del turno de elección en la renovación bienal serán considerados los vocales elegidos en el caso de vacantes como aquellos á quienes reemplacen.

Artículo 19. los Cabildos tendrán, como anteriormente se han dicho, un presidente, dos vicepresidente de la comisión permanente y de cinco vocales más en los Cabildos insulares de Tenerife y Gran Canaria.

Ley Municipal

Del presidente, el vicepresidente y tres vocales más en La Palma, y del presidente y dos vocales más en los restantes islas de Lanzarote, Gomera, Fuerteventura y Hierro, donde las Comisiones permanentes del Cabildo no tendrán vicepresidente.

Artículo 20. Verificada la elección primera para la constitución de los Cabildos, éstos se constituirán en el primer domingo del mes siguiente á la celebración de dicha elección.

Inmediatamente se procederá á la votación definitiva de presidentes, vicepresidentes y procuradores síndicos, ocupando á este efecto la Mesa el vocal de más edad como presidente para la votación, y los dos más jóvenes como secretarios escrutadores.

Todos los vocales del Cabildo votarán en una sola papeleta los cargos expresados, y será necesaria para la primera votación la mayoría absoluta.

Si esta no pudiera lograrse, se procederá en la misma sesión á segunda votación, en cuyo caso, si resultase empate, se procederá al sorteo entre los empatados, y si no se obtuviese en la segunda votación la mayoría absoluta de la totalidad de los vocales que forman el Cabildo, se citará para la sesión extraordinaria á las cuarenta y ocho horas, haciéndose las citaciones nominales por medio de papeletas cuyo duplicado tendrá que firmar el vocal y unirse al acta de la sesión.

En esta segunda votación los empates se resolverán por sorteo, como anteriormente queda dicho, y bastará con la mayoría absoluta de los asistentes.

Ningún vocal del Cabildo podrá excusarse de la asistencia á estas sesiones de constitución más que en el caso de enfermedad justificada, que tendrá que ser probada documentalmente por medio de la certificación de dos médicos de la localidad.

El vocal que no asistiese será multado con la suma de 500 pesetas, que hará efectivas en el plazo de cuarenta y ocho horas, sin que contra el acuerdo del Gobernador multándose exista recurso de ningún género.

Contra los acuerdos que se adopten en las sesiones de constitución de los Cabildos podrá recurrirse ante el Ministerio de la Gobernación, bien por los Cabildos mismo ó por cualquiera de los vecinos de la isla.

El recurso tendrá que entablarse en el plazo de seis días hábiles después de la constitución, y el gobernador ó el delegado lo hará público, para que en el plazo de diez días puedan alegar todos los vecinos de la isla cuando estimen conveniente.

Terminada la audiencia citada informará la autoridad gubernativa, y en el plazo de cuarto día se remitirán todos los antecedentes al Ministerio de la Gobernación, que fallará en el improrrogable de un mes.

Artículo 21. Los Cabildos, una vez constituidos procederán con toda urgencia á la formación de su reglamento de régimen interior.

Estos reglamentos se harán públicos en el Boletín Oficial de la provincia, consignándose un plazo de audiencia de diez días para que puedan alegar todos los vecinos del término del Cabildo correspondiente.

Transcurrido ese plazo, se existiesen reclamaciones, se remitirá el reglamento y las reclamaciones al gobernador civil de la provincia, el cual resolverá en el transcurso forzoso de veinte días hábiles.

Si el Cabildo no se mostrase conforme con la reforma que en vista de los recursos introdujese el gobernador, podrá entablar recurso ante el Ministerio de la Gobernación, el cual resolverá en un plazo máximo de veinte días desde el momento en que reciba el expediente.

Artículo 22. En la misma sesión en que queden constituidos definitivamente los Cabildos elegirán éstos una Comisión permanentes compuesta en la forma que determina el artículo 19 de este reglamento.

Asimismo en una de las primeras sesiones fijará el Cabildo en pleno el número de Comisiones en que ha de dividirse para los trabajos y servicios que le están encomendados.

Ley Municipal

La elección de los que han de constituir estas Comisiones se hará en votación secreta y por papeletas, decidiendo la suerte en caso de empate.

Artículo 23. La capitalidad de cada isla á los efectos de la reunión del Cabildo será: de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife , de la Palma, Santa Cruz de la Palma, de la Gomera, San Sebastián; del Hierro, Valverde de Gran Canaria, Las Palmas; de Lanzarote, Arrecife; de Fuerteventura, Puerto de Cabras.

Artículo 24. Las reuniones ordinarias que verifique el Cabildo en pleno en los períodos trimestrales se verificarán el primer día útil de la segunda quincena de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre.

En la primera sesión de cada período se fijará el número de las que hayan de celebrarse en día consecutivos durante el mismo, pudiendo aumentarse estas sí al Cabildo en pleno lo acordase.

Sí durante la celebración de las sesiones sobreviniesen causas que hicieran peligrosa su continuación, la autoridad gubernativa de la isla puede, bajo su responsabilidad, suspenderlas ó aplazarlas, dando cuenta al gobernador, y este al Gobierno, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Artículo 25. Los Cabildos celebrarán reuniones extraordinarias cuando para asuntos determinados que se expresarán en la convocatoria lo disponga el gobierno ó el gobernador, y también cuando lo solicite la tercera parte de los individuos del Cabildo ó igual número de Ayuntamientos de la isla.

Artículo 26. Es obligatoria la asistencia á las sesiones del Cabildo, y sus miembros sólo podrán excusarse por causa justificada documentalmente de enfermedad ó cuando soliciten y se acuerde permiso por el Cabildo mismo.

La falta de asistencia á las sesiones injustificadamente se castigará imponiendo el presidente una multa de 25 á 50 pesetas.

La reincidencia en la falta después de la primera multa se considerará como desobediencia grave, aplicándose á este efecto la debida penalidad, y la tercera falta dará lugar á estimarla como abandono de funciones públicas.

Artículo 27. Para deliberar será necesaria la presencia de la mayoría absoluta del número total de los consejeros que correspondan al Cabildo.

Para adoptar acuerdos se necesita el voto de la mayoría de los concurrentes.

En caso de empate repetirá la votación al día siguiente ó en la misma sesión, debiendo normalizarse todo cuanto al funcionamiento de los Cabildos se refiere en su reglamento de orden interior.

COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DE LOS CABILDOS

Artículo 28. Corresponde á los Cabildos asuntos de su facultad y exclusiva competencia regir y administrar los intereses peculiares de las islas respectivas con arreglo y sujeción á las leyes, reglamentos y demás disposiciones dictadas para sus ejecución, y en particular cuando se refiera á los objetos siguientes:

1º Creación y conservación de servicios que tengan por fin la comodidad de los habitantes de la isla y el fomento de sus intereses morales y materiales, á saber: establecimientos de beneficencia é instrucción, caminos vecinales, canales de riego y toda clase de obras publicas de interés general, así como concursos, exposiciones y otras instituciones de fomento, y cuantas materias el artículo 74 de la ley Provincial atribuya á las Diputaciones provinciales, en cuanto sea propio y peculiar cada una de las islas.

2º Administración insular, que comprende el cuidado y conservación de las fincas y bienes que pertenezcan á la isla, especialmente los establecimientos de beneficencia de cada una, y la

Ley Municipal

recaudación y distribución de los medios de que disponga para la realización de los servicios de carácter insular, administrando al efecto los fondos del Cabildo.

3º Nombramientos y separación de todos los empleados y dependientes pagados de los fondos del Cabildo.

Artículo 29. Los Cabildos tendrán capacidad jurídica para contratar y obligarse, establecer y obligarse, establecer y explotar obras ó servicios públicos, adquirir reivindicar y poseer bienes de toda clase y ejercer acciones civiles, criminales y contencioso administrativas.

Para la enajenación, permuta é hipoteca de bienes inmuebles, derechos reales y títulos de la Deuda pública necesitarán autorización del Gobierno, que se estimará concedida si no fuera denegada en el plazo de treinta días á contar de la petición.

No es necesaria autorización para la venta de edificios pertenecientes al Cabildo y declarados inútiles para el servicio á que estaban destinados.

Artículo 30. La contratación de servicios de caracteres insular , mientras otra cosa no se dispriere legalmente, se regirá por la instrucción de 24 de enero de 1906, con la siguiente reforma:

Las subastas simultaneas a que se refiere su artículo 7º serán precisas solo en el caso de que el tipo señalado ascienda a 300000 pesetas.

Los acuerdos que adopten los Cabildos en lo que se refiere a contratación de servicios se considerarán ejecutivos por efectuar a asuntos de su exclusiva competencia.

Artículo 31. En la creación y sostenimiento de establecimientos de beneficencia y de enseñanza los Cabildos se ajustarán a lo que disponen las leyes de Beneficencia y de Instrucción pública.

Artículo 32. Los actuales establecimientos benéficos , sean cualesquiera su carácter, serán en lo sucesivo de cargo de los Cabildos de las islas en que radican.

Cuando sean utilizados por enfermos de otras islas, devengarán estancia a cargo de los Cabildos a cuya jurisdicción correspondan los enfermos, salvo el caso de mancomunidad.

Artículo 33. Igualmente pasarán a cargo de los Cabildos en cuyas islas existan los establecimientos de cualquiera enseñanza creados y sostenidos anteriormente con fondos provinciales.

Artículo 34. Para el sostenimiento de los actuales establecimientos benéficos y de enseñanza y para los de las mismas clases que en lo sucesivo quieran crear los Cabildos, lo mismo que para todos los fines de su interés, podrán mancomunarse dos ó más de ellos, siendo ésta también exclusiva facultad suya.

La mancomunidad quedará pactada por acuerdo que conste en acta de los Cabildos contratantes, figurando en los respectivos presupuestos las cantidades con que ha de contribuir cada uno al gasto convenido.

La ejecución y administración del servicio mancomunado las realizará el Cabildo de la isla en que el servicio radique, sin perjuicio de la intervención de los otros interesados de forma que libremente convengan.

Artículo 35. Como Corporaciones de categoría superior á los Ayuntamientos, tendrán las atribuciones siguientes:

1ª Revisar los acuerdos de los Ayuntamientos, con arreglo á lo que dispone la ley Municipal.

2ª Encargar á cualquiera de sus vocales que giren visitas de inspección á los Ayuntamientos con el fin de enterarse del estado de sus servicios cuentas y archivo.

El Cabildo insular adoptará en vista del resultado de estas visitas las disposiciones que estime conducentes dentro de sus facultades, para mejorar la administración municipal.

3º Resolver los expedientes de creación agregación ó supresión de los Municipios y sus términos en la isla.

Sus acuerdos serán ejecutivos cuando fueran adoptados de conformidad con los interesados.

En caso de desidencia, la aprobación será objeto de una ley.

Ley Municipal

4ª Resolver los recursos de alzada contra las decisiones de los Ayuntamientos relativas al empadronamiento ó sus rectificaciones.

5ª Informar al gobernador respecto de las Ordenanzas municipales de policía urbana y rural con los Ayuntamientos de la isla acuerden para el régimen de sus respectivos distritos, siendo ejecutivas las resoluciones del gobernador si está conforme con el Cabildo.

En caso de discordia, corresponderá la resolución al Gobierno, oyendo al Consejo de Estado.

6ª Examinar y proponer al gobernador la aprobación de las cuentas municipales cuando los gastos no excedan de 100000 pesetas, y si excediesen de esta suma, al Tribunal de Cuentas del Reino.

7ª Resolver todas las reclamaciones, protestas y excusas formuladas con motivo de las elecciones municipales y relacionadas con los concejales con motivo de las elecciones municipales y relacionadas con los concejales de la isla, con sujeción á los trámites del Real decreto de 24 de Marzo de 1891, así como también las incapacidades que se refieren á los mismos.

Artículo 36. Conforme á la ley de 11 de Julio de 1912, pasan á los Cabildos, por lo que á cada isla respecta, las funciones consultivas que el artículo 102 de la ley Provincial de 29 de Agosto de 1882 señaló á las Comisiones provinciales.

Artículo 37. La comisión permanente del cabildo residirá en la capital de la isla.

En los casos de enfermedad ó licencia y en los de suspensión gubernativa ó judicial de algunos de sus miembros, les sustituirá el consejero que en las elecciones haya obtenido el mayor número de votos de los que residan en dicha capital, y en defecto de éstos, de los residentes en el pueblo más cercano.

En iguales casos sustituirá al presidente el vicepresidente, y a éste el vocal de más edad de los que asistan á las sesiones.

La comisión celebrará una sesión semanal por lo menos, haciendo público en la sesión de constitución primera los días en que han de celebrarse.

Celebrará además sesiones extraordinarias cuando lo exija la autoridad gubernativa ó los asuntos especiales de su competencia.

Artículo 38. Para deliberar es necesaria la presencia de la mitad más uno de los vocales que compongan la Comisión, y para acordar, la mitad más uno de los votos de los concurrentes.

Cuando exista empate se aplazará la segunda votación para la sesión inmediata, y si se repitiera el empate decidirá el voto del presidente.

Las sesiones serán secretas ó públicas según se establezca en los reglamentos de orden interior de los Cabildos.

Artículo 39. corresponde á la Comisión permanente:

1º Preparar el despacho de los asuntos que hayan de someterse al Cabildo insular en cada reunión trimestral acompañando los antecedentes é informes que juzgue necesarios y proponiendo el acuerdo que estime procedente.

2º Resolver los asuntos urgentes, de trámite ó escasa importancia, a reserva de la aprobación definitiva del Cabildo al cual dará cuenta en la primera sesión de los acuerdos que haya adoptado.

En ningún caso acordará la Comisión por ser necesaria la reunión del Cabildo en pleno sobre la creación de establecimientos obras ó servicios, contratos, pactos de mancomunidades, presupuestos, repartimientos entre los pueblos, visitas á Ayuntamientos y revisión de acuerdos municipales.

3º Nombrar el personal administrativo con arreglo á las plantillas aprobadas por el Cabildo y dando cuenta al mismo.

4º Velar por el exacto y rápido cumplimiento de los acuerdos del Cabildo.

5º Dar los informes que se le pidan, si no fuere necesario para ello el acuerdo previo del Cabildo en pleno.

Ley Municipal

Artículo 40. Todos los Cabildos publicarán mensualmente en el Boletín Oficial de la provincia relación bien especificada de los acuerdos que adopten, á fin de que en los plazo de diez días puedan los vecinos entablar los recursos correspondientes.

Artículo 41. El delegado del Gobierno en Las Palmas queda facultado en todo caso para resolver aquellos asuntos en que la ley especial reconoce carácter consultivo al Cabildo, así como los expedientes, ya de índole de interés público ó particular, originados por el funcionamiento de los nuevos organismos creados por la misma ley.

Iguals funciones podrán ejercer los delegados de las demás islas, siempre que sean autorizados para ello por el gobernador civil de la provincia.

Estas resoluciones serán ejecutivas , y contra ellas podrán entablarse los recursos que establecen las leyes.

Artículo 42. Los secretarios de los Cabildos serán libremente elegidos por los mismos, previa oposición.

Estos secretarios serán á la vez los de las Comisiones permanentes.

En las islas de Lanzarote, Gomera, Fuerteventura y Hierro el secretario desempeñará el cargo de contador.

Las obligaciones de los secretarios se ajustarán á lo señalado en la ley Municipal respecto á los de los Ayuntamientos y en los reglamentos especiales de los Cabildos.

Artículo 43. en los Cabildos insulares de Tenerife y Gran Canaria podrán nombrarse dos procuradores síndicos; los demás nombrarán un solo vocal con este carácter.

Estos procuradores representan á la Corporación en todos los juicios que deba sostener en defensa de los intereses del Cabildo.

Censurarán y revisarán todas las cuentas y presupuestos y darán informes sobre las propuestas de arbitrios y demás incidencias que con ellos se relacionen.

Artículo 44. Los acuerdos del Cabildos ó de la Comisión permanente son ejecutivos; esto no obstante, procederán los recursos legales que contra ellos puedan entablarse.

Dichos acuerdos serán puestos en conocimiento del gobernador si se trata de la isla de sus residencia, y de los delegados respectivos donde éstos residan, en la misma fecha en que se adopten y hechos públicos por las respectivas autoridades, como asimismo notificado á los interesados en la forma prevenida al efecto, por la ley y reglamento de Procedimiento administrativo vigente.

Artículo 45. El presidente del Cabildo insular está obligado á suspender, por el ó á instancia de cualquier residente en la isla, los acuerdos del Cabildo en los casos siguientes:

1º Por recaer en asuntos que no sean de la competencia del Cabildo.

2º Por delincuencia.

3º Por perjudicar á los intereses generales ó al orden público.

4º Por perjudicar los derechos civiles de n tercero.

En todos estos casos la suspensión será razonada, con expresión completa y precisa de las disposiciones legales en que se funde.

Cuando la suspensión se haga por virtud de lo dispuesto en el caso 4º de los que quedan expresados, se acordará solamente cuando el interesado lo solicite, reclamando al mismo tiempo contra el acuerdo.

Todos los acuerdos de suspensión tendrán que dictarse en el plazo máximo de tres días.

Artículo 46. El delegado del Gobierno de la isla de Gran Canaria podrá también á instancia de parte ó d oficio, bajo su directa responsabilidad suspender los acuerdos del Cabildo ó de su Comisión permanente en los casos del artículo anterior y cuando intervenga grave necesidad de orden público. También en casos podrán los delegados de las demás islas suspender los acuerdos de los Cabildos ó de sus Comisiones permanentes; pero esta suspensión no hará efectiva, y será comunicada

Ley Municipal

inmediatamente al gobernador civil de la provincia, el cual la ratificará ó revocará en el improrrogable plazo de diez días.

contra la providencia del gobernador reformando la de los delegados podrá entablarse recurso ante el Ministerio de la Gobernación, el cual resolverá en el plazo de un mes.

Procederá igualmente la suspensión en la forma establecida en los dos párrafos anteriores cuando los acuerdos causaren perjuicio de difícil reparación á los intereses y derecho de los particulares ó de las Corporaciones, siempre que los agraviados lo soliciten dentro de los diez días hábiles posteriores al acuerdo, anunciado al mismo tiempo que interpondrán contra dichos acuerdos demanda contencioso-administrativa ó judicial.

El peticionario deberá acreditar la interposición de la demanda en tiempo hábil ó en el plazo que se le señale para la subsistencia de la suspensión.

Contra las resoluciones del presidente del Cabildo, del gobernador civil ó del delegado de Gran Canaria decretando la suspensión de los acuerdos podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno en el término de diez días los particulares ó Corporaciones y el Cabildo mismo.

El Gobierno resolverá en el plazo máximo de un mes, transcurrido el cual sin resolución alguna del mismo se entenderá alzada la suspensión.

Artículo 47. Contra los acuerdos de los Cabildos en los asuntos atribuidos á su competencia por la ley especial citada y por este reglamento, podrá recurrirse en alzada de el término de quince días hábiles al delegado insular por todo el que se crea perjudicado, sea ó no residente en la isla.

El delegado, oída la Comisión permanente del Cabildo, resolverá en el plazo de diez días el recurso, confirmando ó revocando el acuerdo recurrido.

Si lo revocara, se abstendrá de hacer declaración alguna sobre el fondo del asunto, y volverán los antecedentes al Cabildo para que acuerde de nuevo lo que proceda.

Artículo 48. Las autoridades gubernativas y consejeros de Cabildos son personalmente responsables, con arreglo á las leyes, de los daños y perjuicios que se originen por la suspensión ó ejecución de los acuerdos de los Cabildos.

Artículo 49. Los que se crean perjudicados en sus derechos civiles por los acuerdos de los Cabildos haya sido ó no suspendida su ejecución por la virtud de lo que queda indicado anteriormente, pueden reclamar contra ellos mediante demanda ante el Juez ó tribunal competente, según lo que dispongan las leyes dada la naturaleza del asunto.

El juez ó Tribunal que entienda en la cuestión puede suspender por primer providencia, á petición del interesado, la ejecución del acuerdo de que se trate, cuando á su juicio proceda y convenga, en evitación de un perjuicio grave é irritable.

Para interponer dicha demanda se concede un plazo de treinta días después de notificado el acuerdo, pasado el cual se entenderá consentido.

Artículo 50. Cuando los Cabildos se negaran á resolver alguna petición que ante ellos se hiciere, podrá recurrirse en queja contra los mismos ante la Comisión provincial.

Del acuerdo que en este caso adopte este Cuerpo se dará recurso ante el Gobierno.

Contra los acuerdos que tomen los Cabildos en asuntos que no sean de su exclusiva competencia se dará recurso de alzada ante el gobernador de la provincia y el Gobierno.

Artículo 51. Los Cabildos, en sus reglamentos de orden interior, establecerán las reglas convenientes para el funcionamiento de todas sus dependencias, y especialmente de la Secretaria, Contaduría y Depositaria.

HACIENDA, PRESUPUESTOS Y CUENTAS DEL CABILDO

Artículo 52. Son aplicables á la Hacienda de los Cabildos insulares las disposiciones adaptables á los mismos que rijan para el Estado, para las Diputaciones y para los Ayuntamientos.

Artículo 53. Los Cabildos formarán todos los años sus presupuestos, comprendiendo todos los gastos que hayan de hacer y todos los ingresos destinados á cubrirlos.

Tienen como recursos ordinarios de su Hacienda:

1º Los que procedan de rentas ó frutos de toda clase de bienes, derechos ó capitales que por cualquier concepto pertenezcan á los Cabildos y no formen hoy parte de la Hacienda provincial.

2º Rentas ó productos de bienes y derechos pertenecientes á establecimientos que dependan de los Cabildos.

3º Arbitrios sobre obras públicas, instituciones ó servicios costeados con sus fondos.

4º Subvenciones voluntarias de los Ayuntamientos.

5º Las subvenciones que les otorgue el Gobierno para la realizar obras y servicios determinados .

6º. Arbitrios y demás recursos autorizados por la ley Municipal á los Ayuntamientos, previo informe de los mismos.

Entre los recursos se cuenta el repartimiento general que autoriza el artículo 136 de la ley Municipal, y que en este caso gira sobre los Ayuntamientos de la isla.

Al repartimiento no se podrá acudir sino mediante imposibilidad demostrada documentalmente de completar la dotación del presupuesto con los demás ingresos.

7º Los arbitrios que el Estado les autorice sobre transportes de mercancías y otros análogos.

8º Cualquier participación ó beneficio que el Estado pueda otorgarles, ya en los impuestos que perciba, ya como premio ó remuneración de servicios especiales que se les encomienden.

Artículo 54. Los Cabildos consignarán como primera partida del presupuesto de gastos la suma que les haya sido repartida por la Diputación provincial en concepto de contingente, teniendo en cuenta al efecto las disposiciones legales de la materia.

Contra los repartimientos de la Diputación provincial, si no estuviere conforme el Cabildo, procederá un recurso especial ante el Ministerio de la Gobernación.

Artículo 55. Será facultad de los Cabildos promover la revisión de amillaramiento y matriculas de la contribución industrial de los pueblos en que lo estimen conveniente.

Artículo 56. Los Cabildos insulares discutirán y votarán su presupuesto ordinario para el año subsiguiente en las sesiones del mes de Octubre, circunscribiendo la deliberación á las variantes que convenga introducir en el que esté en ejercicio.

En las sesiones de Abril examinarán las cuentas del año anterior.

Artículo 57. Siempre que se proyecte el establecimiento de algún recurso que no hubiere sido utilizado en los presupuestos anteriores, se procurará la equidistancia de los Ayuntamientos á quienes interese, sobre los cuales pese la exacción del impuesto ó arbitrios que se creen.

Si los arbitrios se extendieren á toda la isla, se necesita para establecerlos explícita conformidad de Ayuntamientos que representen la mayoría de los habitantes de la isla y la aprobación del Gobierno.

El reparto entre los Municipios por contingentes guardarán proporción las contribuciones directas; pero podrán graduarse el recargo señalando tipo distinto para cada una de éstas; y siempre aplicando con igualdad á todos los pueblos.

Artículo 58. Los Cabildos serán los encargados de la imposición y cobranza del repartimiento por contingente que corresponde á cada pueblo, ingresando directamente en la Diputación provincial la parte que á esta corresponda.

Para la aplicación del contingente regirán las disposiciones vigentes en la materia.

Ley Municipal

Artículo 59. Para hacer efectivas las recaudaciones serán aplicables las disposiciones de apremio que rigen acerca del particular.

Artículo 60. Los presupuestos tendrán precisamente las partidas necesarias, según los recursos del Cabildo, para atender á los servicios siguientes:

1º Cuota con que corresponda al Cabildo contribuir al presupuesto provincial, limitándose los gastos de éste á lo estrictamente necesario.

2º Personal y material de oficinas y dependencias, que no será más que lo absolutamente necesario.

3º Sostenimiento de establecimientos benéficos y de instrucción antiguos ó nuevamente creados.

4º Abonos de estancias de enfermos en hospitales sostenidos por otros Cabildos.

5º Gastos de presos que cumplen condena en las cárceles de partido y de los que en si mismas se halan á disposición de las Audiencias.

6º Construcción, conservación y administración de obras públicas ó explotación de servicios que corran al cuidado de los Cabildos.

7º Conservación y administración de los bienes del Cabildo.

8º Parte con que deba contribuir al sostenimiento de servicios mancomunados, según los pactos hechos.

9º Suscripción á la Gaceta de Madrid y Boletín Oficial.

10º Material de la Junta provincial del Censo electoral é impresión de listas.

11º Gastos de los servicios de quintas y bagajes.

12º Aumento gradual de sueldos en los maestros de primera enseñanza.

13º Imprevistos y calamidades públicas.

14º Los demás gastos que exijan las leyes en la parte que deban ser cumplidas por los Cabildos.

Siempre que éstos tuvieren deudas ú obligaciones contraídas ó las contrajeran, consignaran también en sus presupuestos anuales las cantidades destinadas al pago de intereses cuando proceda y á la amortización.

Artículo 61. La Comisión permanente formará en la segunda quincena de Mayo un proyecto e presupuesto para el año siguiente, y lo comunicará á los Ayuntamientos para que hasta el 30 de Junio deduzcan observaciones ó reclamaciones.

Artículo 62. Aprobado el presupuesto, se anunciará al público en un plazo de veinte días, y con las observaciones que se hagan se pasará al gobernador en su isla ó al delegado de la isla respectiva, con todos los antecedentes y reclamaciones de que corrija la extralimitaciones legales, si las hubiere.

Si estas autoridades introdujesen alguna reforma en el presupuesto, podrá el Cabildo interponer recurso de alzada ante el Gobierno, que resolverá en el plazo máximo de treinta días desde el ingreso del expediente en el Ministerio de la Gobernación.

Artículo 63. Para la aprobación del presupuesto, lo mismo que para la distribución de déficit entre los Ayuntamientos, se requiere el voto de la mayoría absoluta total de vocales que forman el Cabildo.

Artículo 64. La cuota asignada á cada Ayuntamiento para cubrir el déficit será notificada á éstos forzosamente antes del 15 de Agosto, para que puedan consignarla en el presupuesto municipal correspondiente.

Artículo 65. Si fuera menester deliberar de nuevo para subsanar la invalidación total ó parcial de los presupuestos revisados por la autoridad gubernativa, y en su caso por el gobernador, celebrará el Cabildo sesión extraordinaria con toda urgencia y reformará lo que hubiese modificado la censura.

Ley Municipal

Artículo 66. El presupuesto del Cabildo de Tenerife se remitirá al gobernador de la provincia, y los demás Cabildos, á los delegados de su isla respectiva, á más tardar el día 20 de Agosto, y si transcurriese hasta el 5 de Septiembre sin que hubiese sido devueltos á los Cabildos respectivos, se entenderán autorizados.

Artículo 67. Corresponde la Comisión permanente, no estando reunido el Cabildo, acordar la distribución mensual de fondos.

La ordenación de pagos compete al presidente del Cabildo ó á quien haga sus veces, siendo personalmente responsable de lo que ordenara fuera del presupuesto, bien por tratarse de obligaciones no previstas en él, bien por rebasar los créditos respectivamente consignados.

Artículo 68. En los reglamentos de orden interior se establecerá todo lo referente á fianzas agentes de recaudación, responsabilidad de éstos, publicación de estados de recaudación é inversión de fondos, publicación de listas de jornales en las obras y cuando se refiere á los servicios, formalización de cuentas, publicación de las mismas, etc.

Artículo 69. También se establecerá en dicho reglamento todo lo referente á la justificación y aprobación de cuentas .

Las cuentas de los Cabildos, una vez formalizadas y aprobadas, se remitirán al ministerio de la Gobernación, para que éste lo haga al Tribunal de Cuentas del Reino para su revisión y aprobación definitiva.

Se considera á los Ayuntamientos de la isla correspondiente como interesados en las cuentas insulares para los efectos de reclamar y protestar contra la aprobación de las mismas.

Artículo 70. La celebración de las sesiones de los Cabildos tendrá lugar en las Casas consistoriales.

Artículo 71. Todo lo referente al funcionamiento de los Cabildos en la celebración de sus sesiones se regirá por lo dispongan sus reglamentos especiales.

Artículo 72. Los Cabildos y sus Comisiones permanentes obrarán bajo la dependencia del Gobierno, y están, por consiguiente, sujetos á la responsabilidad que proceda en todos aquellos asuntos que según las leyes no les competen exclusivamente, ejerciendo con absoluta independencia las atribuciones que le son propias.

Incurrir en responsabilidad, aun cuando ejerzan atribuciones propias, los Cabildos y Comisiones que comentan infracciones manifiestas de la ley.

Artículo 73. El ministro de la gobernación y el gobernador civil de la provincia en su delegación son los encargados de transmitir á los Cabildos y Comisiones permanentes las disposiciones del Gobierno en la parte de deban ser ejecutadas por estas Corporaciones, y de ejercer la alta inspección que al mismo tiempo corresponde para impedir las infracciones de la Constitución y de las leyes.

Artículo 74. Incurrir en responsabilidad los Cabildos:

1º Por infracción manifiesta de la ley en sus actos ó acuerdos, bien sea atribuyéndose facultades que no les competen, bien abusando de las propias.

2º Por desobediencia al Gobierno en los asuntos en que proceden por delegación y bajo la dependencia de éste.

3º Por desacato á sus superiores jerárquicos.

4º por negligencia ú omisión de que resulte perjuicio á los intereses ó servicios que les están encomendados, abuso ó malversación de la administración de sus fondos.

Artículo 75. la responsabilidad podrá exigirse á los Cabildos ó á los consejeros ante la Administración ó ante los Tribunales de justicia.

Ante la Administración, por hechos ú omisiones punibles en el ejercicio de sus funciones ,cuando no lleguen á constituir delito.

Ante los Tribunales de justicia, por hechos ú omisiones en el ejercicio de sus funciones, cuando éstos constituyan delito según el Código penal.

Ley Municipal

La responsabilidad sólo se exigirá á los consejeros si hubiesen incurrido en la omisión ó tomado parte en el acto ó acuerdo que lo motive.

Artículo 76. Corresponde exclusivamente al Gobierno exigir responsabilidades administrativas.

Estas comprenden el apercibimiento y la multa.

Procede al apercibimiento en los casos de omisión, negligencia y abuso de facultades, cuyas consecuencias no sean irreparables.

Procede la multa siempre que las leyes ó disposiciones generales lo determinen, y en los casos de reincidencia en faltas castigadas ya con apercibimiento, así como en los de negligencia cuyas consecuencias sean irreparables, y en los abusos de autoridad y desobediencia que no produzcan responsabilidad criminal.

Si el corregido persistiese en la falta ó la culpa que ocasionase la corrección, se promoverán las sanciones del Código penal ante los Tribunales por desobediencia y resistencia á la autoridad del Gobierno.

Artículo 77. Para la imposición de multas se tendrán presentes las reglas siguientes:

1ª La declaración de estas correcciones corresponde al Gobierno, con audiencia de los interesado y del Consejo de Estado.

2ª Las multas no excederán de 500 pesetas.

3ª Las multas serán satisfechas por los consejeros responsables.

Artículo 78. Para la exacción de las multas se observarán además las siguientes reglas:

1ª La resolución del Gobierno se comunicará por escrito al multado; del pago se le extenderá el correspondiente recibo.

2ª Las multas y los apremios se cobrarán en papel del sello correspondiente.

3ª Las multas serán pagadas precisamente del peculio particular del multado.

Artículo 79. Para el pago de toda multa se concede un plazo proporcionado á la cuantía de la misma y que no baje de diez días ni exceda de veinte, pasado el cual procede el apremio contra los morosos.

El apremio no será mayor del 5 por 100 diario del total de la multa, sin que exceda en ningún caso del duplo de la misma.

Contra la imposición gubernativa de la multa procede el recurso contencioso administrativo, previa consignación ó depósito del importe.

Artículo 80. Cuando los multados dejen de pagar la multa no obstante el apremio, el delegado del Gobierno oficiará al Juzgado correspondiente comunicándole la orden ministerial imponiendo la multa, y la cuantía y liquidación de ésta, y requiriendo su autoridad para hacerla efectiva.

El juez procederá á la exacción por la vía de apremio.

Artículo 81. los Cabildos y sus miembros no pueden ser suspendidos ni destituidos sino por auto ó sentencia de Tribunal competente.

Por motivo de suspensión no se convocará á elección parcial; pero sí en caso de destitución.

Artículo 82. Si las suspensiones fueran en tal número que no pueda funcionar el Cabildo, la autoridad gubernativa nombrará para reemplazar inmediatamente á los suspensos los ex -consejeros que en fecha más reciente hayan cesado en sus cargos.

Alzada la suspensión, volverán los suspensos al ejercicio de sus funciones.

Los que les hubiesen reemplazado serán considerados como culpables de usurpación de atribuciones si después de requeridos continuaren desempeñando funciones de consejeros insulares, sin que les sirva de excusa el haber recibido la orden de cesar de sus cargos.

Artículo 83. Para la instrucción de las causas por delitos que cometan los Cabildos y sus vocales en el ejercicio de sus funciones actuará la Audiencia respectiva.

Ley Municipal

Artículo 84. Los empleados y agentes de la Administración insular nombrados por el Cabildo ó por la Comisión están sujetos á su obediencia y son responsables ante ella.

Disposiciones transitorias

1ª Verificada la primera elección de Cabildos, que según la ley ha de efectuarse dentro de los dos meses siguientes á la publicación de este reglamento, las respectivas Secciones de la Junta provincial del Censo enviarán al gobernador por lo que respecta á Tenerife, y á los delegados del Gobierno en las demás islas, certificaciones acreditativas de los consejeros electos, los cuales serán convocados por dichas autoridades para la constitución interina de los Cabildos, procediéndose á ella y á la constitución definitiva en la forma prescrita en este reglamento.

Los Cabildos quedarán definitivamente constituidos dentro de los veinte días siguientes á su elección.

Las elecciones para la primera renovación se efectuarán en la primera quincena de Noviembre de 1915.

2º Constituidos los Cabildos, la Diputación les hará entrega de los establecimientos benéficos y demás dependencias que radiquen en cada isla y á la vez practicará una liquidación de los débitos y créditos de la provincia.

Los débitos por contingente de los pueblos de cada isla pasarán al haber de los Cabildos respectivos.

Las deudas de la Diputación serán cargo de los Cabildos, repartidas las que procedan de servicios generales en proporción al último contingente señalado á los pueblos de cada isla. Las deudas que provengan de los servicios de beneficencia y cualquiera otros se encargarán á la isla en que radiquen los establecimientos ó servicios deudores.

Los Cabildos figuraran en la sección de los ingresos de sus presupuestos los débitos de los pueblos; y en los gastos, así la parte que les ha correspondido abonar á la Diputación por deudas de servicios generales como las otras deudas que quedan expresadas por servicios realizados en su territorio.

Los Cabildos adquieren el derecho de exigir á los pueblos el pago de los mencionados débitos, y contraen la obligación de pagar sus créditos á los acreedores de las otras deudas que no hayan prescrito.

3ª Coincidiendo con la constitución de los Cabildos, la Diputación se reunirá en sesión extraordinaria para acordar el desglose del presupuesto de 1913 en la parte no realizada á la fecha de la instalación de aquellos.

Deberán separarse los gastos generales ó comunes para repartirlos proporcionalmente entre los Cabildos y los asignados á cada servicio que hayan de ejecutar éstos, formándose así los presupuestos de gastos insulares de 1913.

Los ingresos serán el producto de bienes y derechos de los establecimientos insulares y el contingente que para dicho año se haya señalado á los pueblos.

4ª Mientras los Cabildos no hayan realizado ingresos para costear local y mobiliario, los Ayuntamientos de las capitales de las islas les facilitarán uno y otro, con obligación de las Corporaciones insulares de reintegrar estos gastos oportunamente.

Madrid, 12 de Octubre de 1912.- El ministro de la Gobernación, Antonio Barrosa y Castillo.- (Gaceta del 14 de Octubre).

Precio del tomo 1,50 pesetas. Número 6191325.

Índice

Estudio Preliminar.

Ley Municipal de 2 de Octubre de 1877.

Título Primero. De los Términos municipales y de sus habitantes.

Capítulo primero. De los términos municipales u sus alteraciones.

Capítulo II. De los habitantes de los términos municipales.

Capítulo III. Del empadronamiento.

Capítulo IV. De los derechos y las obligaciones de los habitantes de los términos municipales.

Título II. Del gobierno y organización de los Municipios.

Capítulo primero. De los Ayuntamientos y de las Juntas municipales.

Capítulo II. De la organización de los Ayuntamientos.

Capítulo III. De la organización de la Junta municipal.

Título III. De la administración municipal.

Capítulo primero. De las atribuciones de los Ayuntamientos.

Capítulo II. De la administración de los pueblos agregados á un término municipal.

Capítulo III. De las sesiones y del modo de funcionar los Ayuntamientos.

Capítulo IV. De las funciones administrativas de los alcaldes, tenientes, síndicos, regidores y alcaldes de barrio.

Capítulo V. De los secretarios de Ayuntamiento.

Título IV. De la Hacienda municipal.

Capítulo primero. De los presupuestos municipales .

Capítulo II. De la recaudación distribución y cuenta de los fondos municipales.

Título V. Recursos y responsabilidades que nacen de los actos de los Ayuntamientos.

Capítulo primero. Recursos contra los acuerdos de los Ayuntamientos.

Capítulo II. Dependencia y responsabilidad de los concejales y de sus agentes.

Título VI. Gobierno Político de los distritos municipales.

Capítulo único.

Disposiciones adicionales.

Disposiciones transitorias.

Real decreto de 15 de Noviembre de 1909 sobre descentralización administrativa.

Real decreto de 7 de Julio de 1911.

Disposiciones complementarias.

Real decreto de 24 de marzo de 1891 sobre procedimiento para las reclamaciones posteriores al escrutinio general y declaración de incapacidades.

Ley de 18 de marzo de 1895 sobre reforma interior y saneamiento de grandes poblaciones.

Ley de 26 de Julio de 1892.- Ensanche de Madrid y Barcelona y poblaciones á ella acogidas.

Real decreto de 7 de junio de 1891 (artículo 10).

Real decreto de 24 de Enero de 1905. Instrucción para la contratación de servicios provinciales y municipales.

Real orden de 7 de Febrero de 1906 aclarando los artículos 8º y 23 de la instrucción anterior.

Real orden de 24 de Noviembre de 1909 sobre proclamación de candidatos en las elecciones municipales.

Real orden de 12 de Octubre de 1910, Higiene municipal.

Ley de 11 de Julio de 1912 creando los Cabildos insulares de las islas Canarias.

Reglamento de los Cabildos insulares.

Ley Municipal